«142. Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del PRD

Érick López Barriga, diputado federal por el estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4 y 6 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La integración del Congreso General, su instalación, facultades, el funcionamiento de sus Cámaras, los requisitos para ser diputado o senador, y las atribuciones del Poder Legislativo, se encuentran regulados en el Capítulo II del Título Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dentro de tales disposiciones, los artículos 65 y 66 establecen las fechas en que inician y terminan cada uno de los periodos ordinarios de sesiones: del 1º de septiembre al 15 de diciembre –excepto cuando en ese año inicie el encargo del Ejecutivo federal, caso en que se prolongará hasta el 31 de diciembre– en un primer periodo ordinario, y del 1 de febrero al 30 de abril del año siguiente en el segundo periodo ordinario; mientras que la posibilidad de sesionar extraordinariamente para atender algún asunto particular, queda previsto en el artículo 67.

En la Constitución de 1824 se contemplaba un solo periodo de sesiones del Congreso: del 1 de enero al 15 de abril, pudiendo prorrogarse hasta por treinta días. El modelo de dos periodos fue adoptado por primera vez en la tercera de las siete Leyes Constitucionales de 1836, cuando su artículo 14 señalaba del 1 de enero al 31 de marzo como primer periodo, en tanto que el segundo abarcaba del 1 de junio hasta la conclusión de los asuntos de su competencia. Igualmente, en la Constitución de 1857 se preveía un primer periodo ordinario de labores del Congreso el cual com-

prendía del 16 de septiembre al 15 de diciembre; el segundo, iniciaba el 1 de abril para finalizar el 31 de mayo.

Los procesos de inserción de nuestro país en la comunidad internacional se han traducido en cambios a la estructura institucional que da sustento y forma al Estado mexicano. Así por ejemplo, la suscripción de convenciones y acuerdos derivaron en la modernización en el campo económico y en la transición a la democracia. Y pensar que la democracia se agota en cuestiones electorales, significa reducir el concepto a su más burda expresión pues ella consiste en poner al alcance de todos los gobernados las condiciones mínimas para que de manera efectiva ejerciten sus derechos fundamentales y participen en la sociedad.

Precisamente es el espíritu democrático surgido de la tradición griega –de carácter eminentemente oral, en donde tanto las decisiones que involucraban los asuntos de la polis, como los litigios que enfrentaban a los ciudadanos se discutían públicamente–, lo que constituye la esencia de la actividad parlamentaria; parlamentar significa dialogar, de manera que en el aspecto interno, los representantes populares dialogan entre sí para generar los instrumentos legales que respondan a las necesidades de la sociedad.

En el ámbito exterior, este diálogo se entabla entre la población y el poder, ya que la ley es parte del proceso comunicativo por el cual se establece el marco donde las relaciones sociales pueden tener lugar con miras a la convivencia armónica; pero también surge el diálogo entre los poderes: El Ejecutivo y el Judicial coordinan con el Legislativo sus esfuerzos para alcanzar los objetivos comunes del Estado. En este sentido, el equilibrio de poderes supone un papel más activo del Congreso de la Unión y en especial de los Diputados, habida cuenta de que como representante de la población, les corresponde servir de contrapeso al Ejecutivo y al Judicial.

La Cámara de Diputados, como el Ágora griega, es un foro de debate de los grandes temas nacionales, pero la trascendencia de su papel no termina ahí, pues esa es sólo una de múltiples facetas de su quehacer; a lo que podemos agregar: la función de control de la administración pública, lo cual evidencia el carácter democrático del congreso de diputados. Es así como el contenido del artículo 39 de la ley fundamental se realiza efectivamente, cuando los representantes populares examinan la gestión del gobierno respecto de los programas formulados y los recursos entregados para su ejecución.

Así, el Poder Legislativo ha cobrado en las dos últimas décadas un papel cada vez más protagónico y proactivo, lo que supone nuevos retos que ya no es posible afrontar con las prescripciones que antaño tal vez resultaron adecuadas y hasta vanguardistas. Justamente por ello, resulta extraño que si el Ejecutivo y el Judicial laboran en periodos anuales, el Congreso lo haga en dos periodos de sesiones ordinarias que suman sólo seis meses y medio.

Los tiempos modernos se caracterizan por la incertidumbre: lo único constante es el cambio y éste se presenta en todos los ámbitos de la vida nacional; tal estado de cosas exige una capacidad de reacción inmediata, pero sobre todo, de anticipación.

Recordemos que si bien, nuestra Constitución es del tipo rígido –en virtud de que establece un procedimiento específico y una serie de requisitos para ser modificada–, nada impide adaptarla a los requerimientos sociales; tan es así, que a menos de un lustro de su entrada en vigor, se hizo patente la necesidad de enmendar la duración del periodo de sesiones originalmente establecido.

Desde entonces, los artículos 65 y 66 constitucionales han experimentado más de un par de reformas sobre el particular; y es natural, pues a medida que la Cámara de Diputados asume con mayor dedicación y compromiso su papel, requiere mayor tiempo para desempeñar diversas actividades. En este sentido, resultaría incongruente aceptar que la actividad del congreso aumenta, y empeñarse en mantener el mismo calendario de trabajo; con mayor razón si se toma en cuenta que sus facultades han aumentado también.

Sin embargo, de manera paradójica al aumento de la actividad en el Congreso, también se ha incrementado el número de iniciativas y puntos de acuerdo que por no haber sido atendidos en tiempo y forma han provocando un grave rezago legislativo. Este rezago se ha nutrido incluso, durante varias legislaturas, pues de manera lamentable el Congreso no ha hallado un mecanismo que agilice el proceso de dictamen de las mismas; aunado a ello, que la presente Legislatura se destaca por el aumento –sin precedentes– de iniciativas presentadas.

De acuerdo con el Monitor Legislativo, “la introducción de iniciativas en el primer período de sesiones se ha venido incrementando sistemáticamente desde hace varias legislaturas. Sin embargo, la LX Legislatura representa un aceleramiento importante. En 35 sesiones plenarias los

diputados presentaron 266 iniciativas, 7.5 en promedio por cada sesión.

El aumento fue de 135% respecto al mismo periodo de la legislatura anterior (pasando de 113 a 266). De sostenerse esta tasa de crecimiento la LX Legislatura no sólo rebasará el ya inédito récord de la LIX sino que podrá rebasar los cuatro millares.”¹

Situación que es preocupante, pues de no ser dictaminadas a tiempo, muchas de esas iniciativas corren el riesgo de convertirse en parte del rezago legislativo; con ello sólo contribuiremos al cúmulo de pendientes que limitan la eficacia del Congreso. Recordemos que no solo se trata de presentar un mayor número de iniciativas, sino de mejorar la calidad de todo lo que implica el trabajo legislativo.

La demanda ciudadana por mayor eficiencia legislativa impulsa el cambio de las viejas prácticas y los modelos obsoletos; por ello el Congreso debe adaptarse para responder a sus votantes y servir a sus intereses con mayor eficiencia.

Siguiendo tal orden de ideas, se propone reorganizar el calendario de sesiones, introduciendo un tercer periodo de sesiones ordinarias para incrementar a 9 meses el tiempo de los trabajos legislativos.

En virtud de lo anterior, con fundamento en el contenido de los artículos 71, fracción II, y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del H. Congreso de la Unión la presente iniciativa de:

Decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4 y 6 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, a partir del 1° de febrero de cada año para celebrar en segundo periodo de sesiones ordinarias y a **partir del 1 de junio para un tercer periodo.**

En el año legislativo el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.

En cada Periodo de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.”

“**Artículo 66.** Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la república inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de abril **siguiente; y el tercer periodo no podrá prolongarse más allá del 15 de agosto de ese año.**

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República.”

Artículo Segundo. Se **reforman** los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“**Artículo 4.**

1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del primero de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias; a partir del primero de febrero de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias; **y a partir del primero de junio de cada año para celebrar un tercer periodo de sesiones ordinarias.**

2. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el quince de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el treinta y uno de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del treinta de abril **siguiente; y el tercer periodo no podrá prolongarse más allá del quince de agosto del mismo año.**

3. Las dos Cámaras acordarán, en su caso, el término de las sesiones antes de las fechas indicadas. Si no estuvieren de acuerdo, resolverá el Presidente de la República.

4. El Congreso, o una de sus Cámaras, podrán ser convocados a periodos extraordinarios de sesiones cuando en los términos que establece el artículo 67 de la Constitución.”

“**Artículo 6.**

1. El primero de septiembre, a las 17 horas; el primero de febrero **y el primero de junio**, a las 11 horas de cada año, el Congreso se reunirá en sesión conjunta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados para inaugurar su periodo de sesiones ordinarias.

2. Al iniciarse el periodo de sesiones ordinarias, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados declarará en voz alta: “El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy (fecha) el primer (segundo, **o tercer**) periodo de sesiones ordinarias del (primer, segundo o tercer) año de ejercicio de la (número ordinal) Legislatura”.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Monitor Legislativo, “Informe de Desempeño Legislativo. Primer periodo de sesiones, primer año de ejercicios de la LX legislatura.”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.— Diputado Erick López Barriga (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

«143. Que reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, a cargo del diputado Ramón Barajas López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ramón Barajas López, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo séptimo de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La reserva de hidrocarburos, principalmente el petróleo, es finita y en pocos años se agotará. Por ello, se ha buscado la alternativa de la energía renovable, que contribuya a la autosuficiencia energética.

Asimismo, los altos costos de los combustibles fósiles y los problemas ambientales que éstos ocasionan han contribuido al desarrollo de los combustibles bioenergéticos. En este sentido, se busca impulsar el uso de combustibles alternativos, como el etanol y el biodiesel, con objeto de remplazar los derivados del petróleo.

Los biocombustibles serán una alternativa al petróleo, energético fósil cuyas reservas empiezan a agotarse en México y en el mundo y cuyo precio aumenta a niveles sin precedente, presionando a las economías de todo el orbe. Buscar la diversificación energética ya es un objetivo de muchos gobiernos y los biocombustibles ofrecen una atractiva opción de carburante líquido, que también dañan menos el medio ambiente.

En México, los bioenergéticos tienen potencial para contribuir al desarrollo social en regiones donde la energía convencional es económicamente inviable, sobre todo en zonas rurales apartadas. También podrán ayudar a lograr la autosuficiencia energética, ahora que Petróleos Mexicanos (Pemex) importa el 30 por ciento de las gasolinas con las que abastece el mercado nacional.

Los biocombustibles están despertando un gran interés en naciones ricas y pobres como alternativa a la gasolina derivada del petróleo, o como complemento de ella. Brasil es, desde hace años, el líder mundial en la producción de bioetanol utilizado como carburante para vehículos automotores. Allí son cada vez más comunes los vehículos que usan un combustible “flexible” (flexfuel), que puede ser 85 por ciento etanol obtenido de los cultivos y 15 por ciento gasolina, mientras que otros vehículos usan mezclas de 25 por ciento de etanol y 75 por ciento gasolina. Brasil produjo más de 15 mil millones de litros de bioetanol en el 2004 a partir de la caña de azúcar.

La preocupación mundial sobre el agotamiento de los mantos de petróleo de fácil y barata extracción tampoco es ajena a México, donde se prevé una fuerte declinación de Cantarell, el único yacimiento supergigante del país, en los próximos años.

México también requería de un marco legal para dar cumplimiento a sus compromisos en el protocolo de Kioto, respecto de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestro país es el primer productor de este tipo de emisiones en América Latina con aproximadamente 360 millones de toneladas de bióxido de carbono al año.

Mientras que el Congreso mexicano analizaba la nueva ley, también los Congresos de Argentina y España promulgaron un nuevo marco legal para impulsar los bioenergéticos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) arrancó un programa de promoción a nivel mundial, sobre todo en las naciones en vías de desarrollo donde las alzas en el precio del petróleo pueden llegar a tener un efecto económico devastador.

El 7 de febrero de 2006, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, turnándola en la misma fecha al Senado de la República.

El dictamen aprobado por la mayoría parlamentaria atendió las observaciones que el 3 de septiembre pasado envió el Ejecutivo.

En ese sentido, la Comisión de Agricultura y Ganadería decidió ampliar el abanico de fuentes de biocombustibles y consideró que éstos pueden provenir de la biomasa lignocelulósica de los aserraderos, de los desechos de la agroindustria y urbanos, así como de los residuos tradicionales de la agricultura y los bosques.

El dictamen aprobado señalaba que los bioenergéticos también pueden ser producidos de soya, de sorgo, de la yuca o de la remolacha, de la celulosa o de cualquier material que sea susceptible de fermentación o que pueda ser sometido a un proceso biotecnológico.

También considera que el empleo de la biotecnología, incluyendo los procesos de fermentación y enzimáticos permitirán el empleo de residuos de las actividades agroindustriales en la producción de biocombustibles, también conocidos de segunda generación.

También señalaba que en el caso del biodiesel, además de la canola, el girasol, la soya y el cártamo, que son de consumo humano, se puede emplear el piñón mexicano o la palma de aceite, así como residuos agroindustriales como la cáscara del aguacate o el cebo animal que tienen un alto contenido de aceite susceptible de ser transformados en biocombustible, o bien de aceite gastado proveniente de la cocción de alimentos.

De igual manera, el dictamen de la legisladora determinó que “es necesario promover la agroindustria nacional a partir de la instalación de plantas para el procesamiento de los productos agropecuarios que pudieran ser empleados en la producción de etanol y otros bioenergéticos, así como fomentar la creación de cadenas productivas relacionadas con los biocombustibles impulsando la producción, tecnificación, comercialización y empleo de los bioenergéticos.

Dicha Ley establece las bases para promover y fomentar la producción y desarrollo de combustibles limpios de uso automotriz, proporcionar los apoyos técnicos y presupuestales que se requieran para el desarrollo de energías renovables para coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad a partir de la diversificación energética.

En síntesis, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos tiene como objetivo la promoción y desarrollo de los bioenergéticos, para lo que establece: 1) promover y desarrollar el uso de los bioenergéticos; 2) impulsar la producción agrícola y el empleo productivo a partir de la bioenergía; 3) orientar a la agroindustria para que los productos agropecuarios puedan emplearse en la producción de etanol y otros bioenergéticos; 4) promover la producción y desarrollo de combustibles limpios de uso automotriz; y 5) fomentar la producción, distribución y comercialización de energías renovables provenientes de la biomasa.

De igual manera, se agregó una fracción cuarta al artículo 11 de la Ley de Bioenergéticos, una fracción VIII al artículo 12 y un segundo transitorio para determinar que las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Energía, elaborarán un programa de producción sustentable de insumo para bioenergéticos y un programa de introducción de bioenergéticos, en el que se tomarán en cuenta la producción nacional sobre la importación, así como la definición de plazos y regiones para la incorporación del etanol como componente de la gasolina y la incorporación del biodiesel al consumo, así como los requerimientos de infraestructura para su producción, transporte y comercialización.

Así, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación sólo se encargará de impulsar la producción de insumos para los bioenergéticos sin poner en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria; la de Energía impulsará el desarrollo y comercialización de los bioenergéticos, así como su introducción al mercado y establecerá las normas oficiales mexicanas para definir las mezclas de etanol y biodiesel, como componentes de la gasolina y el diesel. Finalmente, la Semarnat establecerá los lineamientos sobre el medio ambiente y evitará el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola para la producción de bioenergéticos.

Asimismo, este nuevo ordenamiento coordinará las acciones que desde la administración pública deberán tomar las dependencias involucradas, principalmente las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Energía, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, cada una en el ámbito de su competencia, través de la Comisión Intersecretarial de Bioenergéticos.

La introducción de estos combustibles requiere de una estricta voluntad política y la concertación institucional entre los organismos de gobierno resulta vital. La participación y el compromiso del sector privado son fundamentales para el éxito del programa.

También prevé que los incentivos estarán dirigidos a quien contribuya al desarrollo de la industria de los bioenergéticos y a la modernización de su infraestructura, a través de la fabricación, adquisición, instalación, operación o mantenimiento de maquinaria para la producción.

También toma en consideración a aquellas personas e instituciones que realicen investigaciones sobre tecnologías cuya aplicación disminuya a la generación de emisiones

contaminantes a la atmósfera, aguas, suelo, así como la innovación en las plantas de producción.

Al respecto, quisiera mencionar que el estado de Chiapas se ha convertido en pionero en la iniciativa de producir biocombustibles. Destaca la creación de la Comisión de Bioenergéticos del estado de Chiapas, “creada como un organismo auxiliar del Poder Ejecutivo del estado, con el propósito de impulsar el desarrollo, la producción y uso de productos bienergéticos y ambientales, fomentar la inversión, la participación social, privada y pública; propiciando el desarrollo, autosuficiencia energética y cultura de conservación, uso de tecnologías y productos no contaminantes y de impactos positivos en el cambio climático”.

A poco más de un año de haberse creado, ya se tienen avances para señalar que desde el sureste mexicano podría venir el repunte de los biocombustibles.

Compañeras y Compañeros legisladores, la experiencia de Chiapas debe impulsar a los gobiernos de los tres niveles a crear Comisiones que tengan la finalidad de coadyuvar al desarrollo de las entidades y del país, otorgándoles atribuciones para diseñar y ejecutar políticas públicas para impulsar la producción, agroindustria, industria, comercialización, financiamiento y uso de productos bioenergéticos y ambientales, así como, promover la investigación y transferencia tecnológica en esta materia y coadyuvar al desarrollo de una cultura bioenergética y ambiental.

Para ello se requiere adecuar este nuevo marco normativo. Esta nueva Ley debe incidir en la creación de estas comisiones estatales que, como se está viendo en Chiapas, serán un importante factor para el desarrollo y la planeación de la nueva política de biocombustibles.

Por lo anterior, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el artículo séptimo de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 7 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos para quedar como sigue:

Artículo 7o. ...

...

Los gobiernos de los estados podrán crear la Comisión Estatal de Bioenergéticos, la cual se encargara de suscribir los convenios a que hace referencia el párrafo anterior, además de:

I. Establecer servicios de investigación y extensionismo para apoyar a las personas y organizaciones que se dediquen a esas actividades;

II. Asesorar a los productores para que los cultivos abocados para la producción de bioenergéticos se realicen de acuerdo con las prácticas que las investigaciones científicas y tecnológicas aconsejen; así como en materia de construcción de infraestructura, adquisición y operación de plantas de conservación y transformación industrial, insumos, equipos y demás bienes que requiera el desarrollo de la actividad; y

III. Fomentar y promover acciones tendientes a:

a. La construcción de plantas de producción, la formulación y ejecución de programas de apoyo financiero para el desarrollo, la construcción, mejora y equipamiento de instalaciones para la producción de Bioenergéticos en las entidades federativas; y

b. La organización económica de los productores y demás agentes relacionados al sector, a través de mecanismos de comunicación, concertación y planeación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2008.— Diputado Ramón Barajas López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

«144. Que reforma el artículo 9 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo de la diputada Silvia Emilia Degante Romero, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Silvia Emilia Degante Romero, diputada federal por San Luis Potosí e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para estudio y dictamen respectivo realiza la iniciativa de reforma del artículo 9o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La pluralidad de la sociedad mexicana actual conlleva la necesidad de ajustar el cuerpo normativo que la rige, que construya relaciones sociales, culturales, económicas y políticas ajenas a la exclusión, a la marginación y a la desigualdad, asegurando su pleno goce en condiciones de igualdad en cuanto a los derechos humanos y libertades fundamentales; promoviendo el respeto de su dignidad humana mediante la eliminación de barreras que haga acceder a cualquier persona la equidad real de oportunidades; es decir, un combate contra la discriminación por menoscabo de las capacidades físicas, sensoriales o mentales, que en este momento de la vida nacional resulta una de las vías fundamentales para alcanzar una ciudadanía plena.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera expresa la prohibición de excluir a persona alguna por diversas circunstancias, y la interpretación en sentido contrario fija entonces la obligatoriedad de incluir a todo individuo en las actividades que por su propia naturaleza tenga que desempeñar una actividad laboral y con ella alcanzar una plena inclusión en el desarrollo del país.

El normal desarrollo del ser humano incluye, además de otras actividades, su incorporación al mercado laboral, que lo haga sentir útil y que además cumpla con ser la forma por la cual obtiene sus satisfactores, de manera que ningún grupo social clasificado individualmente se haga diferente uno de otro, pues la población activa propicia el desarrollo y crecimiento económico del país. No obstante, referirse a las personas con discapacidad para algunos sería hablar de

cargas económicas para el país, pero si logramos engarzar las posibilidades de un trabajo digno y remunerado que garantiza las prestaciones sociales, como vivienda y pensión, no representa sino el otorgamiento de sus derechos conquistados.

El trabajo hace a la persona con discapacidad libre y productiva, y socialmente llega a vivir un sentimiento de plenitud, satisfaciendo las obligaciones ante la sociedad y su familia. Una de las exigencias que más reclaman las personas con discapacidad es el derecho al trabajo, pues por su condición son el grupo social con mayor desempleo. Ese trabajo no es una prerrogativa individual: es una obligación pública que contribuye a la plena realización de cualquier persona.

El Estado, además de propiciar la inserción laboral de personas con discapacidad en la iniciativa privada, debe exigirse en sus tres niveles de gobierno, como el mejor ejemplo de una política humana, incluir un porcentaje de personas con discapacidad en su plantilla laboral.

Las actividades por realizar por cada persona que se tenga que emplear deberán ser acordes con la necesidad del Estado y con el nivel técnico o profesional de la persona con discapacitado, y previa evaluación que haga constar que es el apta para el desempeño del encargo, permitiéndole desarrollar sus habilidades y conocimientos que puedan llevarla a una contratación y un ascenso, así como el mejor desempeño con el órgano gubernamental que la contrata.

Otra forma de llegar al porcentaje de incorporación de personas con discapacidad en la estructura orgánica de los diversos niveles y poderes de gobierno, sin erogación en perjuicio del Estado, es la ocupación de personas con discapacidad por cualquier forma de contratación.

De ese modo, ni siquiera se causa perjuicio a trabajadores con estabilidad laboral y servicio civil de carrera, por la incertidumbre que genera personal que se incorpora a colaborar.

Asimismo, la integración de personas discapacitadas a los centros gubernamentales de trabajo implica de manera obvia un cambio en el espacio físico, que para tal efecto el Estado con la firma y ratificación del convenio 159 de la OIT y la norma oficial de accesibilidad en espacios públicos ya no representa una erogación fuerte para el erario. En este sentido la administración pública ha hecho esfuerzos para crear condiciones de accesibilidad.

Para garantizar no sólo la inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral y el consiguiente desarrollo gubernamental, sino participar en el cumplimiento de una vida plena, es evidente la necesidad de que el Estado, esencialmente y como ejemplo a seguir, sea el promotor de la política incluyente de personas con discapacidad.

Así, la suscrita propone la siguiente modificación: se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en los siguientes términos:

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

Cada órgano gubernamental deberá realizar las acciones necesarias que le permitan contar, entre el total de sus trabajadores, con al menos uno por ciento de trabajadores con discapacidad. La discapacidad deberá estar certificada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en coordinación con la Secretaría de Salud.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los órganos gubernamentales deberán presentar a la Cámara de Diputados un informe anual sobre los avances en el cumplimiento de la disposición contenida en el segundo párrafo del artículo 9 de la presente ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.—
Diputada Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

«145. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Carlos Ernesto Navarro López integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le conceden los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta soberanía a fin de presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 16. Reforma el primer párrafo del artículo 41 y el primer párrafo del artículo 42. Todos ellos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Exposición de Motivos

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye todas las acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural y considera como sujetos de la ley a toda persona física o moral que de manera individual o colectiva realice preponderantemente actividades en el medio rural.

También establece que para lograr el desarrollo rural sustentable, se debe impulsar un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector. Responsabiliza al Estado del impulso de las políticas, acciones y programas a aplicar en el medio rural, además de considerar éstas acciones con carácter de prioritario para el desarrollo del país.

Sin embargo, actualmente los números oficiales en el agro son desesperantes. En la zona rural donde viven 25 millones de mexicanos, más del 80 por ciento vive en la pobreza y más del 50 por ciento alcanza niveles de pobreza extrema. Solo dos de cada 10 productores cuenta con capacitación y organización para el trabajo y de esos dos, solo uno puede tener acceso al apoyo tecnológico. Y que decir sobre que el nivel educativo en el medio rural apenas alcanza los tres años.

Es decir, desde la creación de la ley a la fecha, las cosas no han cambiado en el sector, continúa el rezago económico, social y tecnológico, los niveles de migración siguen en aumento, los jefes de familia y sus jóvenes hijos, se mudan

a las zonas urbanas en la búsqueda de mejores condiciones de vida para las familias rurales. Bien si encuentran un empleo, si no, solo engrosarán las filas del desempleo en las ciudades, o peor aún hay quienes deciden arriesgarse en el abandono del país aunque en esa aventura pongan en riesgo su vida. De las zonas rurales, más de mil personas por día se atreven a salir al extranjero, con un porcentaje casi total de ellos hacia los Estados Unidos de América.

Según el INEGI cerca del 70 por ciento de los analfabetas del país se encuentran en comunidades de menos de 15 mil habitantes. Existen mil 978 municipios con características de ruralidad, la gran mayoría de ellos clasificados con el estatus de alta y muy alta marginalidad y con índice del 40 por ciento de analfabetismo, además, el 86 por ciento no han concluido su educación primaria y aportan un buen número de ellos los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla.

Otro elemento sobre el que vale la pena reflexionar, es la reciente apertura total en el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tal situación tenderá a empeorar la situación y por lo tanto obliga a tomar medidas distintas a las tradicionales, debemos capacitar más y mejor a los productores para que puedan estar en posibilidades de llegar a ser competitivos.

Si queremos que se cumplan los objetivos centrales de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, es necesario desatar una ofensiva muy dinámica hacia el medio rural en el área de la capacitación y la asistencia técnica. La ley ya contempla el instrumento y se integró el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (Sinacatri), como una instancia para la atención de las necesidades de capacitación de la población rural de manera integral y permanente. Solo es apuntalar a ese instrumento con los recursos suficientes para que opere adecuadamente y de frutos. Hay que generalizar la capacitación entre los productores rurales y garantizarles la asistencia técnica.

Existen programas de capacitación por parte de distintas secretarías de las que participan en el PEC. Es decir, no solo la Sagarpa capacita, también lo hace Reforma Agraria o la Financiera Rural. Tal situación provoca la dispersión de los recursos y no facilita la consolidación de un proyecto consistente de capacitación en el medio rural. Lo que requerimos es que la instancia creada para el efecto, consolide un proyecto de corto, mediano y largo plazos, con un seguimiento adecuado de los avances del proceso de adiestramiento de los productores rurales, e inclusive de un buen

nivel de coordinación entre todas las instituciones que otorguen capacitación de algún tipo. Convertir al Sinacatri en el alma de la capacitación y la asistencia técnica.

En cuanto a las modificaciones que se proponen para los artículos 41 y 42, estas son en el sentido de eliminar la redundancia que actualmente existe en la Ley, ya que la última oración del artículo 41 es casi igual a la redacción del artículo 42, con la única diferencia en que en el primer caso se hace mención al concepto rural, mientras que en el segundo se menciona a la población campesina, lo cual es a nuestro criterio un ámbito más limitado. El término rural es mucho más integral, por lo que se propone que en el artículo 42 se aplique este término.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 16, reforma el primer párrafo del artículo 41 y el primer párrafo del artículo 42, todos ellos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo Primero. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar de la forma siguiente:

Artículo 16. ...

...

Entre las previsiones presupuestarias mencionadas, se deberá contemplar obligatoriamente, un mínimo equivalente al uno por ciento del monto total del presupuesto asignado al Programa Especial Concurrente para capacitación y asistencia técnica, que será ejercido a través del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, conforme a lo estipulado en el artículo 42 de la presente ley.

Artículo Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 41 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que solo diga lo que a continuación se muestra:

Artículo 41. Las acciones en materia de cultura, capacitación, investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología son fundamentales para el fomento agropecua-

rio y el desarrollo rural sustentable y se consideran responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los sectores productivos, mismas que se deberán cumplir en forma permanente y adecuada a los diferentes niveles de desarrollo y consolidación productiva y social.

Artículo Tercero. Se reforma el primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que quede como sigue:

Artículo 42. El gobierno federal desarrollará la política de capacitación a través del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, atendiendo la demanda de la población **rural** y sus organizaciones.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.— Diputado Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural.

«146. Que reforma y adiciona los artículos 31 de la Ley General de Salud y 77 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Lorena Martínez Rodríguez, diputada federal a la LX Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 31 de la Ley General de Salud y 77 de la Ley de la Propiedad Industrial, con arreglo en la siguiente

Exposición de Motivos

Los actuales retos de salud en México exigen una más decidida participación del Poder Legislativo, generando el marco que articule medidas eficaces que progresivamente contribuyan a garantizar el derecho a la salud, consagrado en el artículo cuarto de la Constitución.

Pero para que los sistemas de salud sean capaces de preservar y desarrollar las capacidades físicas y mentales de los mexicanos, el abasto y acceso a los medicamentos debe ser considerado como un elemento fundamental. Es necesario, que no solamente estén disponibles para las personas que los necesiten, sino que además, se les vendan a precios justos.

La Presidencia de la República ha iniciado algunos esfuerzos pero éstos han sido insuficientes. Promovió en febrero del 2007 la firma del compromiso para garantizar la suficiente disponibilidad y el precio justo de los fármacos, pero la realidad muestra que las medicinas siguen sin ser accesibles para las instituciones y para las familias mexicanas.

Ante este escenario en el que privan los monopolios, el desabasto y la disparidad de precios, he venido, a lo largo de esta legislatura, proponiendo diversas reformas a leyes en la materia e impulsando puntos de acuerdo para que los medicamentos estén disponibles y a bajo costo.

Recientemente he expuesto ante esta soberanía el grave problema que representan los precios de los medicamentos relacionados con la prevención del virus del papiloma humano y ofreciendo alternativas de solución que ya se han puesto en práctica en otros países; pero la respuesta oficial ha sido débil, temerosa y falta de creatividad.

No obstante este señalamiento concreto, en padecimientos como el VIH/sida, tuberculosis, malaria, diabetes, cáncer, etcétera, requieren una perspectiva de mayor sensibilidad institucional, social y empresarial.

En tanto se atienden estos y otros trámites de la burocracia sanitaria, la salud y la vida de muchos mexicanos –sobre todo la de los 44 millones 700 mil pobres reportados por la Secretaría de Desarrollo Social– está a merced de criterios mercantilistas.

En enero del 2004 se publicó la reforma al artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial, con el propósito de otorgar

a las empresas de la industria farmacéutica licencias de utilidad pública por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras subsistan éstas, incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General.

Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 70 de la misma ley dispone que “no procederá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la patente o quien tenga concedida licencia contractual, hayan estado realizando la importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado”. (DR)IJ

En esas circunstancias y tomando en cuenta que más del 30 por ciento de los medicamentos que se consumen en México son importados, así como un 90 por ciento de insumos, la previsión normativa queda prácticamente en desuso o resulta nugatoria.

En este rubro son de la mayor importancia los acuerdos de Doha, en los que se busca promover el acceso de los medicamentos para todos y no impedir que los miembros adopten medidas para proteger la salud pública. De tales convenios internacionales, resulta que ninguna regulación vinculada al comercio debe constituirse en un obstáculo para la protección de la salud pública o el acceso a los medicamentos.

Por tanto, y sin soslayar la importancia de la protección de la propiedad intelectual para el desarrollo de nuevos medicamentos, la presente iniciativa busca colocar en la Ley un mecanismo de concertación comercial que auspicie licenciamientos voluntarios con la intervención del Estado.

En ese sentido, se propone adicionar el artículo 31 de la Ley General de Salud que actualmente concede al Ejecutivo Federal la potestad de asegurar la adecuada distribución y comercialización de los medicamentos e insumos, así como para fijar los precios máximos de su venta al público, a fin de que las Secretarías de Economía, y de Salud establezcan políticas tendientes a fortalecer la competencia, promover que haya una mayor eficiencia en la cadena de abasto de medicinas y transparencia sobre precios de compra de medicamentos y de insumos.

Pero con el fin de que ningún satisfactor o producto medicamentoso quede fuera de esa posibilidad, se precisa que las políticas de precios justos deberán abarcar los medicamentos, fármacos, materias primas, aditivos, materiales, productos de origen biológico o sustancias análogas se-

misintéticas, a los que se refiere la propia Ley General de Salud en sus artículos 221 y 229.

Es decir, que ningún tipo de sustancia o mezcla de sustancias de origen natural, sintético o biotecnológico, así como sueros, antibióticos, hemoderivados, vacunas y otras preparaciones bacterianas que tengan efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio podrá ser excluido de las medidas institucionales que garanticen su acceso.

Como parte de esa política, se establece la posibilidad de que ambas secretarías promuevan acuerdos de conciliación comercial con el fin de garantizar el acceso a los medicamentos, obtener precios más bajos para la población o ampliar la capacidad de producción suficiente para atender la demanda.

En la celebración de estos acuerdos, que tendrían un plazo prudencial e implicarían remuneraciones adecuadas entre las empresas participantes, intervendrían –en el ámbito de sus respectivas atribuciones– el Consejo de Salubridad General, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Comisión Federal de Competencia.

La norma propuesta establece que se considerará grave una enfermedad cuando sea causa de emergencia; tenga elevados índices de morbilidad o mortalidad; o atente contra la seguridad nacional.

En el supuesto de que dichos acuerdos de conciliación comercial no logren el objetivo de atender la salud pública, se estará a lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial, relativa a las licencias obligatorias o de utilidad pública.

Por tanto, se armoniza la Ley General de Salud con lo previsto en el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial, para que –antes de aplicar el procedimiento de licenciamiento obligatorio– las Secretarías de Salud y de Economía (cuyo nombre anterior de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial también se actualiza) puedan optar previamente por convocar a las empresas farmacéuticas fabricantes o titulares de los derechos de patente o licencia, a llevar a cabo acciones de diálogo, concertación o de conciliación comercial a favor de la salud de los mexicanos.

De acuerdo con diversos estudios, en el año 2020 unos 719.4 millones de personas tendrán más de 65 años, un 9.4 por ciento de la población mundial frente a los 477 millones que había en el 2005. De ellas, un 36 por ciento tomarán más de cuatro fármacos diarios.

Iniciado el tercer milenio, la situación de las personas enfermas está empeorando, sobre todo en los países pobres. El sida se ha propagado más en estas naciones; donde se encontrará el 60 por ciento de los enfermos de cáncer en el año. El número de enfermos de diabetes ha crecido de 30 a 230 millones de personas en los últimos 20 años, la mayor parte de los cuales vive en estos países.

En México, cuya población rebasa los 100 millones de habitantes, es evidente que las necesidades de atención médica son extremadamente grandes, pues nos encontramos en los primeros sitios de la mortalidad por tumores malignos, diabetes mellitus, enfermedades del hígado y del corazón.

La situación se agrava si tomamos en cuenta que menos del 40 por ciento de su población cuenta con alguna atención médica proporcionada por la seguridad social; donde un 2 por ciento es atendido por el sector privado y el resto, 58 por ciento, por instituciones que atienden al sector más pobre de la población a través de una cuota de recuperación o de forma gratuita. Toda vez que el gasto en salud representa un 30 por ciento aproximadamente del ingreso familiar, la calidad de vida de los mexicanos se ve seriamente afectada.

Debido a que estas y otras estadísticas mundiales y nacionales de salud son desoladoras, debemos insertar en la ley instrumentos que permitan anteponer la salud frente a los sistemas comerciales; así como mecanismos que faciliten acuerdos para que se aseguren medicamentos baratos para todos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 31 de la Ley General de Salud y 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 31 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 31. La Secretaría de **Economía, con la participación** de la Secretaría de Salud, asegurará la adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los **medicamentos, fármacos, materias primas, aditivos, materiales, productos de origen biológico o sustancias análogas semisintéticas, para lo cual establecerán políticas tendientes a fortalecer la competen-**

cia, promover que haya una mayor eficiencia en la cadena de abasto de medicinas y transparencia sobre precios de compra de medicamentos y de insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la determinación de precios, cuando tales bienes sean producidos por el sector público.

La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de **Economía**, acerca de la importación de insumos para la salud.

Cuando se trate de medicamentos, fármacos, materias primas, aditivos, materiales, productos de origen biológico o sustancias análogas semisintéticas indispensables para la prevención o atención de una enfermedad grave, las Secretarías de Economía y de Salud podrán convocar a las empresas farmacéuticas fabricantes o titulares de los derechos de patente o licencia, a llevar a cabo acuerdos de conciliación comercial con el fin de garantizar el acceso a los mismos, obtener precios más bajos para la población o ampliar la capacidad de producción suficiente para atender la demanda.

En la celebración de estos acuerdos, que tendrán un plazo prudencial e implicarán remuneraciones adecuadas entre las empresas participantes, intervendrán, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, el Consejo de Salubridad General, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Comisión Federal de Competencia.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará grave una enfermedad cuando sea causa de emergencia que implique elevados índices de morbilidad o mortalidad o atente contra la seguridad nacional.

En el supuesto de que dichos acuerdos de conciliación comercial no logren el objetivo de atender la salud pública, se estará a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 77.- Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, el Instituto, por declaración que se

publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de **medicamentos, fármacos, materias primas, aditivos, materiales, productos de origen biológico o sustancias análogas semisintéticas** para la población. **No obstante, las Secretarías de Salud y de Economía podrán optar previamente por convocar a las empresas farmacéuticas fabricantes o titulares de los derechos de patente o licencia, a llevar a cabo acuerdos de conciliación comercial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley General de Salud, a fin de garantizar el acceso a los mismos, obtener precios más bajos para la población o ampliar la capacidad de producción suficiente para atender la demanda.**

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril del 2008.— Diputada Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía.

«147. Que reforma los artículos 59 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Soledad Limas Frescas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María Soledad Limas Frescas, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por el estado de Chihuahua, integrante de la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable

asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La incorporación de la mujer a la actividad económica ha crecido de manera sostenida durante las últimas décadas, contribuyendo a un cambio de roles, diferentes estructuras familiares y nuevas relaciones sociales.

Actualmente, en México las mujeres tienen una amplia participación en la actividad económica, siendo una tarea adicional al desempeño de las tareas domésticas y a su rol de madres de familia.

Este fenómeno ha significado para muchas madres trabajadoras la dificultad de conciliar sus actividades laborales con las responsabilidades familiares, y ha debilitado los lazos entre los miembros de los núcleos familiares debido a la falta de convivencia.

Según el Inmujeres, de acuerdo con estimaciones de la Encuesta Nacional de Empleo, las madres trabajadoras suman 8.5 millones, lo que representa poco más de la quinta parte de la población económicamente activa; mientras que el Consejo Nacional de Población (Conapo), estima que en promedio, seis de cada 10 pesos de los ingresos monetarios en los hogares provienen de la actividad laboral femenina.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el año 2005 el 23.1 por ciento de los hogares contaba con una mujer al frente de la familia, cifra que alcanzó el 28.9 por ciento en el Distrito Federal para ese año.

Entre las mujeres que son mamás, la tasa de participación económica se ha incrementado de 12.7 por ciento en 1970 a 40.4 por ciento en 2006.

El Premio Nobel de Economía Amartya Sen, señala que dentro de cada comunidad, cada nacionalidad y cada clase social, el peso más arduo recae de una manera desproporcionada sobre las mujeres.

Estas mujeres no sólo trabajan y aportan a la economía familiar, sino que deben cuidar de sus hijos sin descuidar su trabajo, lo que generalmente es difícil y se ven en la necesidad de buscar alternativas para el cuidado de los hijos, sobre todo en la infancia y la adolescencia.

El gobierno federal ha implantado el programa de estancias infantiles con el objetivo de apoyar a las madres trabajadoras y padres solos para que puedan contar con servicios de cuidado y atención infantil para sus hijos, sin embargo, dichas estancias sólo se ocupan del cuidado de menores entre uno y casi cuatro años de edad.

Pero existe otra población de menores de edad que van desde los 4 años y hasta los 15, a quienes también se les debe prestar atención constante, de orientación y apoyo por parte de sus familiares directos. Las madres trabajadoras con hijos de estas edades se ven en la necesidad de buscar cuidado informal para sus hijos o pedir el apoyo de amigos o familiares, como pueden ser incluso los hermanos mayores. En muchos de los casos no hay de por medio una persona adulta al cuidado de estos menores o se corre el riesgo de contratar a personas poco profesionales, por lo que es latente el peligro de que éstos cometan un abuso de cualquier índole contra los menores.

En gran parte de los hogares con hijos en los que la madre trabaja, se pierde una importante contribución de ella al papel que juega dentro del desarrollo y educación. Según encuestas de opinión, la mayoría de la gente está en desacuerdo con que la mujer trabaje fuera del hogar (74 por ciento). Esto sucede porque consideran que se descuida a los hijos, se pone en riesgo su educación y su futuro.

La mujer juega un papel muy importante en el fortalecimiento de la familia, por ser ella quien atiende todo lo que conocemos como valores: el amor, la lealtad, la generosidad, entre otros. Sin éstos valores y sin la supervisión continua de la madre, se corre el riesgo de acrecentar la delincuencia juvenil, la drogadicción, el alcoholismo, la deserción escolar, los embarazos precoces, el abuso de cualquier clase contra los menores, una falta de buena alimentación, entre otros riesgos que pueden afectar la salud y hasta la vida de los menores.

El esquema laboral actual, no se permite a las madres trabajadoras el espacio de tiempo para convivir con sus hijos, impacta negativamente en los núcleos familiares.

La realidad de muchas madres trabajadoras, es que al no tener un espacio mayor de convivencia con los hijos, se va acentuando una crisis en la estructura social, ya que por una parte se inculca un modelo y estilo de vida familiar y, por la otra, al enfrentar la ausencia en el hogar de la madre, se ofrece un mensaje contradictorio y destructivo para los menores de edad.

No es posible desligar a las mujeres trabajadoras de las actividades y tareas que realizan como madres y esposas, por ello es necesario idear esquemas flexibles de jornada laboral para que éstas puedan atender sus responsabilidades familiares.

Estos esquemas flexibles abonarían en el acceso de las mujeres mayores oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Conciliar las actividades laborales y familiares debe ser un interés compartido de todos los actores involucrados en el proceso productivo.

La propuesta es buscar un sano equilibrio entre las necesidades laborales y aquellas responsabilidades familiares de toda madre, como por ejemplo: ir por los hijos a la hora de entrada o de salida de sus centros educativos, acudir a alguna junta de padres de familia, velar por la salud de los hijos, vigilar que cumplan con sus tareas, o simplemente para una sana y adecuada convivencia familiar que les otorgue el tiempo necesario para convivir con sus hijos y vigilar el tipo de actividades que estos realizan. Esto traería como consecuencia una prevención de diversos peligros a los que hoy están expuestos niños y adolescentes.

Por eso se deben tomar medidas de carácter legislativo con el fin de conseguir que las mujeres puedan negociar con sus patrones un horario más flexible, que les permita armonizar su tarea y labor familiar con su jornada de trabajo y que sigan siendo “el pilar de muchos hogares desde los que se contribuye al desarrollo integral de México”.

Se deben apoyar los diferentes roles que juega la mujer en la sociedad actual, como personas económicamente activas y como madres y cabeza de familia, permitiéndoles continuar en la labor de formar a los futuros ciudadanos de este país.

Bajo ese tenor, y con el compromiso que las y los legisladores tenemos para seguir avanzando en mejores oportunidades para el desarrollo de México, previendo que el descuido en menores de edad puede traducirse en algún accidente, robo de infante, tentaciones que pongan en riesgo la salud, como son drogas o alcoholismo; esta iniciativa propone el establecimiento de un esquema de horarios flexibles para que madres trabajadoras con hijos –cursando la educación básica– puedan atender sus múltiples responsabilidades familiares.

Nuestro interés es el de impulsar un marco jurídico eficiente en el cual se promueva y garantice una mayor convivencia diaria de las madres con su familia, sin descuidar el papel destacado que han alcanzado al ocupar un lugar cada vez más importante en la vida económica, política y social del país.

Toda vez que la Ley Federal del Trabajo ha sido creada para normar y conseguir un equilibrio en la justicia social que tiene cada persona como un derecho al trabajo con libertad y dignidad de quien lo presta, asegurándose de que se den las condiciones de una vida digna y decorosa para el trabajador y su familia; y siendo que tal y como se señala en las estadísticas, las mujeres al incorporarse económicamente en la actividad laboral, tienen la necesidad, no solo de ser el sostén de una familia, sino también de atenderla, se plantea la posibilidad de que para alcanzar una verdadera igualdad para las mujeres, se les permita la flexibilidad de un horario compatible entre su trabajo y el quehacer de atender a sus hijos. Máxime cuando éstas sean madres solteras, viudas, divorciadas, mayormente cuando tengan una capacidad diferente.

De aprobarse la presente iniciativa, se consagraría un derecho humano que como madre tiene cada mujer, pero además, se conseguirá fortalecer la convivencia familiar en la que se tendrán esquemas que armonicen el desempeño laboral y profesional, o ambos de las mujeres trabajadoras y su responsabilidad familiar; resolviéndose así un conflicto con el que éstas tienen que lidiar cotidianamente.

Por lo anteriormente expuesto cometo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 59, y la fracción VIII al artículo 170, ambos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 59. ...

Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. **Sin exceder los máximos legales de la jornada de trabajo, las madres trabajadoras con hijos cursando la educación básica podrán establecer, de común acuerdo con el patrón, un esquema de horarios flexibles que les permita atender sus responsabilidades familiares.**

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. a VII. ...

VIII. Las madres trabajadoras que tengan hijos cursando la educación básica, podrán acordar con el patrón un esquema de horarios flexibles que les permitan atender sus responsabilidades familiares, en términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 59 de esta ley.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.— Diputada María Soledad Limas Frescas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

148. Que expide la Ley de Pensión Universal para las Personas de Setenta Años de Edad o Más, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito legislador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Pensión Universal para las Personas de Setenta Años de Edad o Más, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México carece de un sistema de seguridad social para amplios sectores de la población cuyas necesidades no son

atendidas prácticamente por ninguna institución o cuya atención es muy reducida.

Al no cubrir a los hogares más pobres, las instituciones públicas de seguridad social han fallado en mitigar la desigualdad que persiste en la sociedad mexicana. Como consecuencia, una gran mayoría de pobres tiene pocos medios para manejar riesgos.

A estos factores se suman las repercusiones de las políticas de liberalización económica y ajuste estructural, que “han originado la existencia de amplios grupos vulnerables que no pueden cotizar a los regímenes de seguro social y que no están dentro del campo de aplicación de otras políticas sociales”.

Nuestro partido defiende un modelo de política social sustentado en respeto y cumplimiento de los derechos sociales de los mexicanos. Para nosotros este es el punto de partida y eje articulador de la acción del Estado y de las políticas públicas de la nación.

Con esta iniciativa nuestro Grupo Parlamentario reitera su llamado para aprobar una Ley que establezca el derecho de los Adultos Mayores de 70 años a recibir una pensión no contributiva destinada a la satisfacción de sus necesidades esenciales.

Afortunadamente, la experiencia nacional e internacional, ha desplazado la visión simplista que dominó el debate durante varios años, encabezada por los grupos más conservadores y neoliberales, que ubicaba a estas políticas públicas como meros actos populistas, sin justificación social alguna y sumamente riesgosos para la estabilidad financiera de nuestro país.

Esto ha hecho posible que el día de hoy existan en nuestro país programas municipales, estatales y nacionales, que han replicado la exitosa experiencia del Distrito Federal.

A nivel nacional, en el marco de la discusión y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, el Grupo Parlamentario del PRD ubicó como prioridad la inclusión de un programa de carácter universal, mediante el cual se incorporará de forma gradual al total de adultos mayores de 70 años y que habitan en el territorio nacional.

De este modo, se logró incluir en el Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social 6,250 millones de pesos des-

tinados a otorgar un apoyo mensual de 500 pesos (equivalente al 30% de 1 salario mínimo) a 1 millón 71 mil adultos mayores de 70 años o más que habiten en localidades de 0 hasta 2499 habitantes de todo el país. Esto es, aproximadamente el 28% del total de personas de este grupo poblacional.

Para el ejercicio fiscal de 2008, nuevamente a insistencia del Partido de la Revolución Democrática, se logra ampliar en \$3 mil 700 millones de pesos los recursos destinados para la atención de adultos mayores y con ello se alcanzará un monto de 10 mil 53 millones de pesos.

Esto hará posible incorporar a los adultos mayores de 70 años o más que habiten en localidades de 2 mil 500 a 10 mil habitantes con posibilidades de extenderse has localidades de hasta 20 mil habitantes. Es decir, en 2008, de forma inmediata se integrarán a este programa a 436 mil personas, con lo cual se alcanzará una cobertura del orden del 40 por ciento.

Por esta razón nuestro Grupo Parlamentario plantea la necesidad de establecer en una Ley los instrumentos normativos, operativos y financieros que aseguren el derecho de los adultos mayores de 70 años o más a recibir una Pensión Universal, en completa transparencia, sin manipulación ni interferencia por parte de ningún actor político, social, institucional, económico o religioso.

La iniciativa propone establecer el derecho de los adultos mayores de 70 años o más a recibir por parte del Estado una pensión equivalente al 50 por ciento del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Este aspecto es central, toda vez que con ello se transforma una política de asistencia en un derecho exigible para los mexicanos.

Se propone la operación concurrente de la Pensión Universal, entre el gobierno federal y el de las entidades federativas, donde quedan en el ámbito de responsabilidades de la federación, la emisión de las disposiciones normativas y reglamentarias necesarias controlar, evaluar y operar la identificación, incorporación, pago, vigencia y evaluación de la pensión.

Asimismo, será el facultado para administrar y actualizar, el padrón de beneficiarios en coordinación con las entidades federativas; transferir a éstas los recursos financieros para el pago de la pensión; verificar el los procesos de incorporación, liquidación y vigencia de derechos; informar al congreso; y evaluar los resultados.

Por su parte, las entidades federativas, serán las responsables de atender y tramitar las solicitudes de inscripción al padrón; verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en esta ley; pagar la pensión a las personas beneficiadas; instalar centros de atención en las unidades de salud, entre otras.

Esta iniciativa propone, que sea la Secretaría de Salud junto con sus contrapartes en las entidades federativas los responsables de operar la Pensión Universal. Este cambio, obedece a fundamentalmente a la necesidad de dotar de institucionalidad, transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia a esta importante política pública, ubicándola dentro de una de las instituciones de la administración pública federal más sólidas y profesionales.

Con este cambio, se establecen las bases para que las entidades federativas, a través de sus organismos públicos de salud y mediante la suscripción de convenios para el desarrollo de acciones complementarias, ofrezcan seguimiento y atención médica a los adultos mayores beneficiados. Esto posibilitará arribar a un efectivo sistema de protección social para este grupo poblacional, toda vez que se garantizará un ingreso mínimo vía pensión universal y la atención de su salud a través de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

Al ser un derecho bajo la tutela de una institución sólida, integrada en por profesionales de salud, se cierran espacios para la manipulación electoral y lucro político, toda vez que no habrá intermediaciones de ningún tipo que interfieran entre el derecho establecido en esta Ley y las personas que cumplan con los requisitos que aquí se señalan.

Asimismo, esta modificación propuesta para la operación de la Pensión, significará ahorros en gastos de operación importantes, ya que se utilizará infraestructura existente a cargo de los gobiernos de las entidades federativas.

La iniciativa propone que el gobierno federal concentre y transfiera a las entidades federativas los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de esta Ley, quedando bajo la responsabilidad federal el control, supervisión, fiscalización y evaluación de dichos recursos.

De este modo las entidades federativas serán responsables de pagar a los beneficiarios inscritos en el padrón de conformidad con las disposiciones que emita la Secretaría.

Con el propósito de evitar desviaciones se fija como máximo posible a utilizar en la operación de las Pensión Uni-

versal el 2 por ciento del total del Presupuesto, se establece que los gastos que realicen las entidades federativas para la inscripción y verificación de los sujetos de este derecho serán absorbidos por ellas mismas con cargo a sus recursos propios; y finalmente se señala expresamente que la Secretaría o las entidades de reducir, no podrán afectar, reducir o transferir de ninguna forma los recursos que le sean transferidos por la Secretaría para el pago de la Pensión Universal a los beneficiarios de la misma

También se establece un modelo, para que tanto las entidades federativas y municipios, con cargo a sus recursos y mediante acuerdos con la federación puedan aportar recursos para ampliar la meta de beneficiarios o el monto de la pensión, así como prestar servicios de salud, educación, esparcimiento, asistencia, etc. Con estas acciones complementarias se fortalece y multiplican los alcances del apoyo a los adultos mayores de 70 años o más y se genera un mecanismo democrático de colaboración entre federación, entidades federativas y municipios.

La propuesta legislativa que hoy presentamos, establece en sus disposiciones transitorias un mecanismo para la incorporación gradual de las personas que reúnan los requisitos señalados en la Ley, fijándose como meta para alcanzar el 100 por ciento del universo total de beneficiarios el año 2012, para lo cual en 2009, quedarán incorporados todos los adultos mayores que habiten en localidades de 1 hasta 99 mil 999 habitantes, esto es el 56 por ciento del total y 16 por ciento más que el padrón del Programa de Adultos Mayores de 70 años y más a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.

Para años siguientes se establece una meta de incorporación del equivalente al 14.62% del universo total de beneficiarios hasta alcanzar en 2012 la cobertura universal.

Se propone que para la incorporación de adultos mayores de 70 años y más en localidades con una población mayor a los 100 mil habitantes, se establezca prioridad a las personas que habiten en localidades con mayores índices de rezago social, de conformidad con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

También se dispone que tanto los recursos como el padrón del programa de apoyo a los adultos mayores de 70 años y más serán transferidos a la Secretaría de Salud para operarse de conformidad con lo que dispone este proyecto de ley.

En síntesis. Se trata de una propuesta democrática y federalista, que apunta al fortalecimiento de la ciudadanía social, la responsabilidad y colaboración entre distintos ordenes de gobierno.

Los legisladores del PRD, estamos absolutamente comprometidos con la concreción de amplias reformas sociales, que asuman el cumplimiento de los derechos sociales de los mexicanos como eje articulador de las políticas públicas; que combatan con eficacia la desigualdad; que garanticen la transparencia y eviten la manipulación electoral.

Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley para la Pensión Universal para las Personas de Setenta Años de Edad o Más.

Artículo Único. Se crea la Ley para la Pensión Universal para las Personas de Setenta Años de Edad o Más, para quedar como sigue:

Ley de Pensión Universal para las Personas de Setenta Años de Edad o Más

Título Primero Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1. Esta ley es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto, normar el otorgamiento de una pensión universal para las personas de setenta años de edad o más.

Artículo 2. La Pensión Universal es aquella que el Estado asegura a los adultos mayores de setenta años de edad o más residentes en el territorio nacional y su monto mensual no podrá ser inferior a 50 por ciento de un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en los términos y condiciones que establece la presente ley y su reglamento.

Artículo 3. La organización, administración y entrega de la Pensión Universal, estará a cargo del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud y de las entidades Federativas de conformidad con las disposiciones de esta ley.

Artículo 4. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Pensión Universal: prestación monetaria asignada a las personas de setenta años de edad o más.

II. Pensionado o beneficiario asegurado: las personas de setenta años de edad o más beneficiarias de la Pensión Universal.

III. Padrón de Beneficiarios de la Pensión Universal: aquella conformada por la información individual de cada pensionado que integra el padrón de beneficiarios para el control, vigilancia, entrega y vigencia de derechos de los pensionados o beneficiarios.

IV. Representante acreditado: el familiar o la persona autorizada por el beneficiario para realizar trámites y cobros ante la Secretaría con motivo del otorgamiento y la vigencia de la pensión.

V. Secretaría: la Secretaría de Salud.

VI. Entidades Federativas: Los organismos públicos de salud de los 31 estados y el Distrito Federal.

Artículo 5. Toda persona mayor de setenta años de edad o más residente en el territorio nacional tiene derecho a recibir del gobierno federal, por conducto de las Entidades Federativas, una pensión, en los términos y condiciones que establece la presente ley y su reglamento.

Artículo 6. La Pensión Universal se otorgará de manera mensual a través de pagos directos en efectivo o transferencias monetarias por medios electrónicos, según resulte más accesible y oportuno para el pensionado o beneficiario, de acuerdo con los mecanismos reglamentarios que la Secretaría determine.

Artículo 7. El otorgamiento de la pensión materia de esta ley, es compatible con el disfrute de otras pensiones, subsidios o ayudas otorgadas por instituciones de seguridad social y de asistencia social, así como por gobiernos estatales o municipales.

Título Segundo De la Pensión Universal

Capítulo Primero De los Pensionados o Beneficiarios Asegurados

Artículo 8. Para ser sujeto de aseguramiento a la Pensión Universal, el adulto mayor deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Tener setenta años de edad cumplidos o más, al momento de solicitar la inscripción al padrón de beneficiarios;

II. Haber residido como mínimo tres años en el territorio nacional;

III. Aceptar las obligaciones establecidas en esta ley y su reglamento con motivo del otorgamiento de la Pensión Universal.

Capítulo segundo El procedimiento de inscripción

Artículo 9. Las personas que reúnan los requisitos establecidos en esta Ley, deberán acudir a los centros de salud más cercanos a la localidad donde habiten para solicitar su inscripción en el Padrón de Beneficiarios de la Pensión Universal.

Artículo 10. Una vez que la Entidad Federativa haya corroborado el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la Pensión Universal, remitirá la información a la Secretaría, para que esta proceda a registrar al adulto mayor en el padrón de beneficiarios y, en un periodo no mayor a tres meses, iniciar la vigencia de la pensión.

Artículo 11. Durante la vigencia, la Secretaría y las Entidades Federativas, podrán realizar visitas de verificación, seguimiento y evaluación del otorgamiento de la pensión. Los servidores públicos que realicen estas visitas deberán contar con una identificación oficial expedida por la institución que representan, la que deberá mostrar al pensionado, a su representante y a sus familiares al momento de la visita.

Artículo 12. Las visitas a que se refiere el artículo anterior tendrán como objeto verificar la residencia, el disfrute de la Pensión Universal, la sobrevivencia y atender dudas o problemas relacionados con la entrega de la pensión. Asimismo, durante las visitas se podrá recopilar la información necesaria para implementar acciones y estrategias orientadas a mejorar el otorgamiento de la pensión.

Artículo 13. El rechazo a la inscripción en el padrón de beneficiarios o la baja del mismo podrán ser impugnadas por el beneficiario por sí o por su representante mediante los mecanismos jurídicos, administrativos y reglamentarios previstos en la Ley General de Desarrollo Social, así como en la legislación común o directamente al Órgano Interno

de Control de la Secretaría. La respuesta que al efecto emita la autoridad competente deberá estar debidamente fundada y motivada.

Capítulo Tercero De la Suspensión y Cancelación de la Pensión Universal

Artículo 14. La suspensión y, en su caso, cancelación de la pensión universal tendrá lugar por las siguientes causas:

I. Cuando después de al menos tres visitas domiciliarias consecutivas en días y horarios diferentes, la persona adulta mayor no sea localizada en el domicilio reportado como residencia del mismo;

II. Cuando se compruebe la duplicidad del beneficiario en el padrón;

III. Cuando se compruebe que el beneficiario no cumple con los requisitos de edad y residencia establecidos en el artículo 8 de esta ley;

IV. Cuando el domicilio señalado por el solicitante o beneficiario como lugar de residencia no exista; y,

V. Cuando el adulto mayor haya fallecido.

Artículo 15. La cancelación de la pensión deberá notificarse por escrito al beneficiario o a su representante acreditado, fundando y motivando la causa y señalando los plazos y medios de defensa que tendrá el afectado para defender sus derechos.

Título Tercero De la Concurrencia, la distribución de competencias y el Presupuesto

Capítulo Primero De la Concurrencia

Artículo 16. La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las disposiciones de esta ley, coadyuvarán en la identificación, incorporación, supervisión, vigilancia, control, fiscalización y evaluación de la pensión, tomando en cuenta las particularidades de la población de cada ámbito. Al efecto, cuando las disposiciones de esta ley comprendan materias y acciones que incidan en las atribuciones de la Federación, las entidades federativas o los municipios,

se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos que suscriban las partes interesadas.

La anterior disposición se hará extensiva a los organismos descentralizados del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios.

Artículo 17. Las entidades federativas y municipios podrán efectuar aportaciones para ampliar el universo de beneficiarios, el monto de la pensión o para otorgar servicios sociales a los adultos mayores de 70 años y más inscritos en el Padrón de beneficiarios.

Estos mecanismos complementarios de la pensión serán establecidos mediante convenios con la Federación, donde se precisarán el objeto, el tipo de aportaciones, los mecanismos de coordinación, control, vigilancia y evaluación.

Las entidades federativas y en su caso los municipios informarán a la Secretaría del alcance de las acciones complementarias, para que ésta remita dicha información al Congreso de la Unión de conformidad con esta Ley.

Artículo 18. Las entidades federativas, deberán entregar toda la información que requiera la Secretaría para la actualización, control y verificación del padrón y la comprobación del ejercicio del presupuesto ejercido en la Pensión.

Artículo 19. Para la integración del padrón de pensionados o beneficiarios, la Secretaría, en coordinación con las entidades federativas y con base en la información oficial más reciente, informará de la cantidad de personas de 70 años y más por entidad federativa, municipio y localidad.

Capítulo segundo Del Presupuesto

Artículo 20. Los recursos presupuestarios para el financiamiento de los compromisos derivados de esta Ley, serán incluidos por el Ejecutivo Federal en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente, en una partida específica destinada a este fin, integrada en el Ramo administrativo 12, Salud. La partida deberá ser suficiente para cumplir con las obligaciones contraídas por el Ejecutivo federal en los términos de esta ley.

Los gastos de administración, operación, verificación, manejo del Padrón de Beneficiarios de la Pensión Universal,

entrega de la pensión, no podrán ser mayores a dos por ciento del total de la partida a que señalada en el párrafo anterior.

Las erogaciones que realicen las dependencias para cumplir con las responsabilidades operativas establecidas por esta Ley serán con cargo a sus presupuestos.

Artículo 21. La Secretaría, de conformidad con los registros actualizados del padrón de pensionados, transferirá a las entidades federativas los recursos presupuestarios para el pago de la pensión universal a los adultos mayores beneficiarios.

Para tal efecto, a más tardar el 1 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, publicará en el Diario Oficial de la Federación, la distribución de los recursos que correspondan a cada entidad federativa y el calendario de gasto autorizado.

La Secretaría y las entidades federativas no podrán afectar, reducir o transferir de ninguna forma los recursos que le sean transferidos por la Secretaría para el pago de la Pensión Universal a los beneficiarios de la misma. El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado por de conformidad con la Ley.

Capítulo Tercero Distribución de competencias

Artículo 22. Corresponde al gobierno federal, a través de la Secretaría:

I. Expedir las disposiciones administrativas y reglamentarias necesarias para normar, controlar, evaluar la entrega de la Pensión Universal a las personas de setenta años de edad o más;

II. Administrar y actualizar, en coordinación con las entidades federativas, el en el Padrón de Beneficiarios de la Pensión Universal que integra el padrón de pensionados o beneficiarios asegurados;

III. Transferir a las Entidades Federativas los recursos para el pago de la pensión a los adultos mayores de 70 años y más.

IV. Verificar los procesos de incorporación y pago de la Pensión.

V. Realizar estudios e investigaciones, con apoyo de instituciones públicas y de los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para mejorar las políticas de atención a las personas de setenta años de edad o más;

VI. Establecer convenios de colaboración con instituciones y organismos públicos, federales, estatales y municipales, así como con organizaciones civiles y privadas, para la mejor entrega de esta pensión y en general para la atención a las necesidades de las personas de setenta años de edad o más; Evaluar las políticas, procedimientos y aplicación relativos al pago de la pensión.

VII. Rendir un informe anual al Congreso de la Unión en el mes de junio de cada año, en que detalle la situación financiera de la entrega de la pensión, el ejercicio del gasto administrativo relacionado con la misma, el número total de beneficiarios, su distribución por entidad federativa y las altas y bajas del en el Padrón de Beneficiarios de la Pensión Universal y los mecanismos complementarios suscritos con las entidades federativas y municipios.

VIII. Evaluar la suficiencia de la Pensión Universal y los criterios de cobertura, a fin de proponer al Congreso de la Unión las adecuaciones que considere pertinentes para garantizar la suficiencia y la ampliación de la cobertura de la pensión así como la inclusión de otros riesgos por cubrir cuyo propósito sea lograr la universalización de los beneficios de la seguridad social.

IX. Las demás que le señale la presente ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 23. Corresponde a las Entidades Federativas:

I. Atender las solicitudes de inscripción al padrón de pensionados o beneficiarios, de asesoría y orientación a los solicitantes y beneficiarios, las peticiones de información pública y la resolución de recursos de quejas e impugnación;

II. Verificar el cumplimiento de los requisitos de los solicitantes, de los pensionados o beneficiarios asegurados, conforme a lo establecido en la presente ley y requerir a la Secretaría su registro en el padrón;

III. Convenir con la Secretaría acciones complementarias, con cargo a sus presupuestos, para el fortalecimiento o ampliación de la Pensión;

IV. Efectuar los pagos a de conformidad con los dispuesto por esta Ley y las disposiciones reglamentarias y administrativas que emita la Secretaría;

V. Instalar centros de atención en las instituciones públicas de salud bajo su cargo para la realización de trámites,

VI. Atender los requerimientos de información que le formule la Secretaría.

VII. Las demás que señale expresamente esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 24. Corresponde a los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal:

I. Coadyuvar con la Secretaría y las entidades federativas en la identificación de las personas que reúnan los requisitos señalados esta Ley.

II. Convenir con las Entidades Federativas y la Secretaría, acciones complementarias de la Pensión Universal.

III. Formular propuestas y sugerencias para mejorar los mecanismos operativos de la pensión.

IV. Las demás que señale expresamente esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Título Quinto De las Responsabilidades

Capítulo Único

Artículo 25. Los servidores públicos responsables de la aplicación de los procedimientos de la presente ley deberán cumplir sus actividades observando los principios de respeto a la dignidad humana, imparcialidad, apego a derecho y veracidad.

Artículo 26. La falta de cumplimiento de los principios mencionados en el artículo anterior será sancionada, según sea el caso, por el Código Penal Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Artículo 27. La información contenida en el Padrón de beneficiarios de la Pensión Universal no podrá ser destinada a otro fin que el establecido en la presente ley y sus disposiciones reglamentarias, por lo que queda prohibida su utilización para fines políticos, electorales, de lucro o cualquier otro ajeno al objeto de esta ley.

Artículo 28. La publicidad y la información relativa al otorgamiento de la Pensión Universal para las personas de setenta años de edad o más, deberán identificarse con el escudo nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la leyenda siguiente: “Esta pensión es de carácter público, no es patrocinada ni promovida por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta pensión será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

Transitorios

Primero. Esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2009.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal expedirá el reglamento de esta ley en un plazo no mayor de noventa días naturales a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Durante el primer año de la entrada en vigor de este decreto se incorporará a los adultos mayores de 70 años y más que habiten en localidades de 1 hasta 99 mil 999 habitantes. A partir del segundo año, de manera acumulativa se incorporarán al Padrón de la Pensión Universal hasta el equivalente a 14.62 por ciento de las personas susceptibles de nueva incorporación, hasta alcanzar el 100 por ciento de cobertura en el año 2012.

Para la incorporación de adultos mayores de 70 años y más en localidades con una población mayor a los 100 mil habitantes, se dará prioridad a las personas que habiten en localidades con mayores índices de rezago social, de conformidad con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Para tal efecto, la Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 1 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, la relación de localidades y la cantidad de personas que serán incluidas durante ese año, por

entidad federativa, municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.

Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal posterior a la entrada en vigor del presente deberán incluir los recursos necesarios para cumplir lo dispuesto en este artículo.

Cuarto. Los recursos del Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años y Más contenidos en el Ramo administrativo 20 Desarrollo Social del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, serán transferidos a la Secretaría de Salud para financiar las obligaciones referidas en esta ley.

Quinto. Las personas beneficiarias del Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años y Más a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social serán incorporadas al padrón de la Pensión Universal regulada en esta ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.— Diputado Víctor Gabriel Varela López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«149. Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Queda claro, que somos un país expuesto a diversos tipos de desastres, las experiencias históricas y recientes así lo

confirman. La ubicación del país lo hace particularmente vulnerable a la actividad sísmica y volcánica, mientras que su localización en la región intertropical propicia que en las costas del mar Caribe, del océano Pacífico y del Golfo de México, los ciclones tropicales ocasionen de forma recurrente daños a las poblaciones, tanto por la acción de los vientos como de las precipitaciones pluviales y las consiguientes inundaciones.

De igual manera las sequías, los incendios forestales y las epidemias entre otros fenómenos, colocan a nuestro territorio en un nivel de alarma permanente que debemos combatir a través de instrumentos legales e institucionales eficaces.

Como se ha mencionado en diversas ocasiones, la magnitud de los desastres naturales provocados por el calentamiento global ha puesto en evidencia la debilidad institucional y el marco legal vigente para enfrentar futuras adversidades. El siglo XXI estará marcado, sin duda, por los impactos que tendrá para el desarrollo y la economía, para la salud pública y la estabilidad social, los desastres naturales.

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por las dependencias del Ejecutivo federal, en el lapso de 1991 al 2000 los desastres naturales fueron causa de la muerte de 665 mil 598 personas, lo que representa el 88 por ciento de las ocasionadas durante la última década.

Mientras que el número de desastres geofísicos ha permanecido estable, el número de desastres hidrometeorológicos se ha más que duplicado. Durante la pasada década más del 90 por ciento de las personas que fallecieron debido a desastres naturales, perdieron la vida en eventos meteorológicos tales como sequías, tormentas e inundaciones.

Anualmente, penetran al territorio nacional 4 ciclones, produciendo lluvias intensas con sus consecuentes inundaciones y deslaves. La falta de regulación de los asentamientos humanos y la degradación ambiental se suman a los retrasos en acciones de ordenamiento hidrológico y de obras de protección, incrementando el riesgo en la población. Las fuertes precipitaciones pluviales pueden generar intensas corrientes de agua en ríos y flujos con sedimentos en las laderas de las montañas que pueden destruir infraestructura económica y social como viviendas, hospitales, escuelas y vías de comunicación.

Las granizadas producen afectaciones en las zonas de cultivo, obstrucciones del drenaje y daños a estructuras en las zonas urbanas. Las sequías provocan fuertes pérdidas económicas a la ganadería y la agricultura por periodos de meses o años.

En México, la mayor pérdida de suelo se produce por la lluvia, cuyos efectos son los volúmenes de material que deben dragarse en ríos y puertos, la pérdida de capacidad de embalses y los flujos de escombros cada vez más frecuentes.

Los estados más afectados por erosión hídrica son México, Tlaxcala y Oaxaca.

Las siguientes cifras dan una idea de la gravedad del problema:

- a) Son dragados aproximadamente 300 millones de metros cúbicos al año en ríos y puertos.
- b) En un año se pierden 1.1 billones de metros cúbicos de capacidad en los embalses.
- c) Se estima que se producen daños por más 270 millones de dólares con la erosión de las márgenes de los ríos.
- d) Los daños generados por fenómenos hidrometeorológicos en el periodo 1980-1999 ascendieron a 4,560 millones de dólares y 2,800 decesos.

Por otro lado, existen regiones con muy alto riesgo en el campo ecológico aunado a la gran densidad de población. Las principales industrias generadoras de desechos industriales son las de alimentos, textiles, maderera, imprenta, química orgánica e inorgánica, no metálica y metálica básica, además de las ensambladoras.

México carece de un número suficiente de centros de procesamiento y confinamiento de desechos industriales, así como de plantas de tratamiento para los solventes y aceites.

Sin duda, en nuestro país los desastres han contribuido a elevar los niveles de pobreza y desigualdad, ya que impactan particularmente a los grupos más pobres de la sociedad, debido a que son los menos capaces de responder a los choques repentinos que destruyen sus activos y reducen drásticamente sus ingresos.

Las consecuencias de los desastres sobre las principales variables macroeconómicas en el país, han llegado a ser significativas por el incipiente desarrollo de instrumentos financieros y el insignificante peso relativo de los seguros que protegen a la población, así como a la infraestructura económica y social frente al riesgo.

Los desastres naturales y antropogénicos han causado un número importante de víctimas fatales y cuantiosas pérdidas materiales. Estos efectos han significado retrocesos importantes en las regiones o estados directamente afectados.

En los últimos 25 años, México ha experimentado aproximadamente 80 desastres de magnitud significativa, los cuales han causado más de 10,000 muertos y centenas de miles de damnificados. Los daños directos calculados en el mismo lapso rebasan los 10 mil millones de dólares, con un monto medio anual de cerca de 500 millones de dólares. Si a lo anterior, se añaden los efectos indirectos de los desastres, es decir, la interrupción de flujos de producción de bienes y servicios, habrá que agregar como mínimo, 200 millones de dólares anuales.

Lo anterior, nos lleva desde luego a imprimir una orientación preventiva; articular congruentemente las políticas y acciones de las dependencias, entidades, organismos y sectores involucrados; promover la implantación de mecanismos que permitan detectar, pronosticar e informar con oportunidad a la ciudadanía sobre la presencia de fenómenos que amenacen su seguridad e integridad, así como generar una conciencia de autoprotección y una actitud responsable por parte de la población expuesta a los efectos de un fenómeno perturbador. En síntesis entender en los tres poderes y niveles de gobierno que la prevención de desastres y la protección civil, forman parte inseparable de la seguridad nacional y por lo tanto se requiere una visión de Estado.

Lo anterior queda más o menos claro en la Ley de Seguridad Nacional la cual mandata las acciones destinadas a mantener la unidad, integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, así como sus instituciones, con la finalidad de proteger al país frente a las amenazas y riesgos que enfrentamos, preservar la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; mantener el orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas del gobierno; mantener la unidad de las partes integrantes de la Federación; defender al Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacio-

nal; y preservar la democracia fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes, así como la defensa del desarrollo sustentable y la protección de nuestros recursos naturales.

Al considerar que la seguridad nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, el Estado mexicano ha depositado en las Fuerzas Armadas la responsabilidad de ser garantes del resguardo y vigilancia del territorio, espacio aéreo e instalaciones estratégicas del país, para preservar la seguridad nacional y coadyuvar en la protección de la vida, la salud, la integridad física y el patrimonio de los mexicanos. Por ello, las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina han otorgado apoyo inmediato a la población en casos de desastre por fenómenos meteorológicos, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Como integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, las Fuerzas Armadas han mantenido una estrecha coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, para la ejecución oportuna de sus planes de auxilio a la población civil en casos y zonas de emergencia o desastre, a fin de proporcionar una atención inmediata y auxilio a la población civil, ante la presencia de cualquier desastre provocado por agentes de origen natural o antropogénico. En este sentido la Secretaría de la Defensa Nacional ha establecido cada vez mejores estrategias que definen con mayor precisión la participación del personal militar, en relación la naturaleza y magnitud del incidente.

A pesar de los esfuerzos realizados, es necesaria la adopción de nuevos paradigmas en materia de protección civil, derivado de situaciones actuales hacen urgente diseñar los mecanismos que nos permitan transitar de un sistema “reactivo” a uno “preventivo”.

Es evidente que de una u otra manera aunque no con la claridad y precisión necesarias, se considera el tema de los desastres naturales un asunto ligado a la seguridad nacional, de ahí lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional, la participación de las fuerzas armadas y la ubicación del Sistema Nacional de Protección en la Secretaría de Gobernación, sin embargo para que el tema sea considerado como de seguridad nacional es necesario realizar una serie de precisiones legales y constitucionales en la idea de colocar la prevención de desastres y la protección civil en el centro de la agenda nacional, pues sería lamentable que debido a

la falta de normatividad adecuada y del andamiaje institucional que de ahí se derive, se pusiera en riesgo al país y su desarrollo.

Bajo el anterior orden de ideas, se propone hacer una adición al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de lo cual se somete a consideración del Pleno la siguiente Iniciativa con Proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4o. ...

...
...
...
...
...
...
...

La prevención de desastres naturales y la protección civil son parte integral de la Seguridad Nacional. El estado deberá impulsar políticas públicas que promuevan el desarrollo sustentable, la protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la salud pública con el objeto de prevenir desastres naturales, pandemias y fenómenos meteorológicos y climáticos que puedan poner en riesgo a la población.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2008.— Diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

«150. Que reforma y adiciona los artículos 34 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal por el estado de Baja California a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la fracción II del artículo 55, artículo 56 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que reforma y adiciona los artículos 34 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose subsecuentemente los numerales siguientes bajo el de tenor de la presente

Exposición de Motivos

A lo largo de la historia de nuestro Poder Legislativo nos hemos enfrentado a diversos vacíos que existen en la legislación mexicana; nuestra labor principal como legisladores es brindar las herramientas necesarias para dotar de certeza jurídica para que este Poder de la Unión sea eficiente y nuestro trabajo sea lo más eficiente posible, para lograr abatir el rezago legislativo.

Una de las lagunas que ha prevalecido en nuestro marco jurídico es precisamente la ausencia prolongada de las presidentas y los presidentes de comisiones y comités, ya que actualmente no existe restricción alguna en nuestro ordenamiento interno que obligue a los coordinadores de los grupos parlamentarios a nombrar la suplencia de presidentes que se ausenten por un periodo determinado, lo cual, entorpece el trabajo legislativo al interior de las comisiones y comités.

Cuando se emplea la palabra “comisión” se tiene presente su origen etimológico que deriva del término latino *commissio-comissionis*, que según informa el *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española*, significa encargar o encomendar a otro el desempeño o ejecución de algún servicio o cosa. Facultad que se da o concede a una persona para ejercer, durante cierto tiempo, una función. También con esta palabra se alude a un conjunto de personas, que por nombramiento o delegación de terceros, o asumiendo por sí el carácter colectivo, formula una petición,

prepara una resolución, realiza un estudio o asiste a actos honoríficos.

Al respecto se dice: “por comisión se refiere la integración de un grupo reducido de miembros pertenecientes a las cámaras, quienes, por especial encargo de ésta, estudian con amplitud y en detalle los asuntos para preparar los trabajos, informes o dictámenes que servirán de base al pleno para resolver la definitiva”.

Una de las formas de acepción del término comisión es la que refiere a ser “formas internas de organización que asumen las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, con el fin de atender los asuntos de la competencia constitucional y legal de éstas, para el mejor y más expedito desempeño de sus funciones”.

Suele utilizarse también como sinónimo de comisión el vocablo “comité”, el cual deriva del latín *committere*, que algunos países utilizan preferentemente, por atribuirle a ésta palabra mayor estabilidad, más jerarquía, composición más heterogénea y menor carácter ejecutivo, partiendo de la base que con ella se designa a un grupo de personas que se nombran o constituyen para una tarea o gestión por el común transitorio y de carácter administrativo, consultivo, político, legislativo u otro.

En el *Diccionario universal de términos parlamentarios*, Francisco Berlín Valenzuela comenta que las comisiones parlamentarias son expresión de los privilegios colectivos que corresponden a las asambleas, independientemente de los personales que sus miembros poseen y los cuales se encuentran contenidos en los reglamentos internos por considerarlos básicos para el cumplimiento de sus tareas.

Difícil sería para un parlamento cumplir con sus funciones si no contara con estas formas de organización, las cuales son reducidas por el número de miembros que las componen, pero amplias por la importancia de las tareas que realizan, en las que generalmente participan representantes de los diversos grupos parlamentarios que conforman el pleno de este órgano legislativo, lo que se puede traducir en que las comisiones parlamentarias son de desprendimiento del propio cuerpo legislativo, que en virtud del privilegio colectivo de toda asamblea de base popular para darse su reglamento o dictar las normas de su funcionamiento, designase, ya sea de modo permanente o transitorio, o para misiones determinadas, con el objeto que asesoren al cuerpo mediante tareas específicas, fiscalicen funciones administrativas de la rama parlamentaria o investiguen hechos y

circunstancias que el cuerpo ha considerado necesario para adoptar medidas ya en el plano de la responsabilidad de los funcionarios o en el ámbito de la legislación.

Es entonces que de lo anterior se puede concluir que las comisiones son órganos internos por las cámaras de un congreso o parlamento, ya sea de forma individual (unicamaral) o colegiada (bicamarales, mixtas o conjuntas), de carácter permanente o transitorio, cuyo objeto es coadyuvar en el cumplimiento de sus funciones, legislativas, administrativas, fiscalizadoras o de investigación.

En los inicios del régimen constitucional, el parlamento se organizó de acuerdo con la idea de asamblea única (colegio único), pero esta forma organizativa presentó muchos inconvenientes desde el punto de vista funcional y operativo. El trabajo era lento, el análisis superficial y la deliberación era difícil; es por ello que el principio de división del trabajo tuvo, necesariamente, que llegar al parlamento a efecto de contribuir a que la institución fuese más dinámica y funcional; fue entonces cuando la mayor parte de los parlamentos se organizaron en secciones o comisiones.

El sistema de secciones, de origen francés, que durante el siglo XIX tuvo su época de esplendor, era una división del trabajo realmente elemental. Consistió en dividir al parlamento en dos, tres, cuatro o más sesiones, integradas cada una de ellas por igual número de miembros, cuya asignación a una o a otra sección se hacía por un procedimiento objetivo, es decir, sin relevancia política.

Simultáneamente, todas las secciones estudiaban los asuntos que se trataban en el orden del día, y, después de la deliberación cada una de ellas, nombraba un relator de mayoría y otro de minoría; la deliberación del parlamento se iniciaba con la exposición de las relaciones de las distintas secciones.

En un intento por conciliar dos principios importantes en la organización parlamentaria, como son la agilidad funcionan y el principio de igualdad. Desde finales del siglo XIX, e incluso ya entrado el siglo XX, el sistema de secciones fue sustituido por el régimen de comisiones, que surgiría en el parlamento inglés.

La autora del libro titulado *Las comisiones parlamentarias de investigación como órganos de control político*, Cecilia Judith Mora Donato, la creación de las comisiones supone en cierta medida la quiebra del principio de igualdad en aras del principio de división del trabajo, esto es especiali-

zación. Las comisiones no son, como las secciones, simples divisiones para la organización del trabajo con el fin de hacer más fácil el análisis en común de los textos o incluso un primer debate sobre ellos, sino estructuras diferenciadas en razón de la tarea realizada. Todas las secciones hacían lo mismo, aunque lo hicieran simultáneamente y con resultados distintos; las comisiones tienen por el contrario tareas diferenciadas, son órganos especializados, con independencia de que sean o no permanentes.

Como bien sabemos, no obstante a la teoría sobre la naturaleza de las comisiones y de las funciones que desempeñan en el sistema parlamentario, nuestra normatividad aún tiene fallas y vacíos que deben ser resueltos, entre ellas se encuentra la normatividad que faculta de varias atribuciones específicas a los presidentes de comisiones y comités; entre estas funciones se puede prever que bajo la ausencia de los presidentes, el trabajo legislativo se ve paralizado, recayendo funciones inapropiadas hacia los integrantes de las juntas directivas, ya que si bien es cierto las comisiones pueden funcionar con la mayoría de sus integrantes, cierto es también que existen facultades y responsabilidades exclusivas del presidente de comisión o comité.

El sustento sobre las obligaciones del presidente se encuentra en el artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos; entre estas obligaciones destacan el abrir y el cerrar las sesiones, declarar aprobadas o desechadas las mociones o las proposiciones a que éstas se refieran, firmar las actas de las sesiones luego que estén aprobadas, así como también los proyectos que pasen a la otra cámara y las que vayan hacia el ejecutivo, citar a sesiones extraordinarias cuando ocurra algo grave, entre otras.

Como se percibe, entre estas funciones del presidente radica la importancia de guardar los archivos de las comisiones a su cargo; por ello, se sujetan a una responsabilidad conferida en el propio artículo 83 sin del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de igual forma, el artículo no es facultativo a transferir dicha responsabilidad hacia alguno de los miembros de la mesa directiva de la comisión, ni tampoco hacia el personal de ésta, ya que la responsabilidad de es a través de la firma autógrafa de los presidentes y no del personal o de algún otro miembro de la comisión, esta responsabilidad concluye con el expediente es devuelto o concluye el trámite del mismo.

Por otra parte, y como bien sabemos, la parte central del trabajo legislativo en comisiones son las reuniones o sesiones de las mismas, ya que se establece dentro de nuestro marco jurídico que ningún proyecto o dictamen podrá pasar al Pleno sin que antes se discuta en las comisiones; es entonces que la célula del trabajo legislativo empieza en comisiones, ya que en estos órganos internos del Congreso de la Unión están representados los grupos parlamentarios, presuponiendo que el principio de los acuerdos que llegan al Pleno empiezan al interior del trabajo de las comisiones, las cuales, al carecer de un presidente, por ende se frena el avance del trabajo legislativo en la materia de la comisión o comisiones que fuere.

Así, en el artículo 85 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso de los Estados Unidos Mexicanos se especifica que el presidente de cada comisión tiene que coordinar el trabajo de los miembros de ésta, así como citarlos cuando lo considere necesario durante los periodos de receso.

Es entonces que este artículo faculta a los presidentes de las comisiones a fungir como el eje rector, incluso en periodo de receso del trabajo legislativo; es aquí donde radica la importancia en cualquier periodo en que las comisiones no posean presidentes.

No es una iniciativa menor, ya que la ausencia de los presidentes de comisión necesariamente se ve traducida en el entorpecimiento del trabajo legislativo, en la práctica parlamentaria. Cuando falta el presidente el encargado y responsable de la presidencia y del funcionamiento operativo de la comisión son los secretarios técnicos, asumiendo una responsabilidad que no se les ha conferido dentro de nuestro marco jurídico ni en los acuerdos parlamentarios.

Si bien es cierto que la práctica parlamentaria rige lo que no está establecido en nuestros ordenamientos internos, cierto es también que no podemos dejar que las comisiones funcionen teniendo sin tener una cabeza que cumpla con las funciones de lo establecido en la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; no es loable seguir permitiendo que parte de las funciones, aunque sean administrativas, de los presidentes de comisión y comités sean adoptadas por el personal de la misma. Debemos reconocer la gran labor que el personal desarrolla al interior de las comisiones, pero es necesario reformar nuestro marco interno para que las comisiones funcionen con quienes son los

responsables de los documentos y de la conducción de estos órganos fundamentales en el trabajo parlamentario.

En Acción Nacional estamos comprometidos con los encargos que la nación nos ha brindado, es por ello que este no debe ser un tema menor, ya que somos los responsables por dotar de certeza jurídica a nuestro sistema legal. Es nuestra responsabilidad velar por los grandes vacíos que aún prevalecen en nuestro marco jurídico del Congreso Mexicano. La práctica parlamentaria es un uso que debe ser el último de los recursos por los que nuestro trabajo se guíe, ya que situaciones tan importantes como la que se propone en la presente iniciativa deben ser atendidas y fortalecer nuestras instituciones empezando por el Poder Legislativo, ya que reza un dicho popular muy cierto que establece que “el buen juez por su casa empieza”.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se reforma y adiciona el inciso c) del numeral 1 del artículo 34 así como, un numeral 5 al artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose subsecuentemente los numerales siguientes

Artículo Único. Se reforma y adiciona el inciso C) del numeral 1 del artículo 34, y se adiciona el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 34.

1. ...

a) y b)...

...

c) Proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de las respectivas mesas directivas **y la sustitución de los presidentes, que se ausenten por más de 45 días naturales de su encargo**, así como la designación de delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter multilateral; con respecto a estas reuniones, en los recesos la Junta de Coordinación Política podrá hacer la designación a propuesta de su presidente;

d) ...

Artículo 44

1. Los miembros de las comisiones están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones y sólo podrán faltar por causa justificada y debidamente comunicada. **En caso de ausencia temporal o permanente de los presidentes de comisión o comité, mayor a los 45 días naturales, la Junta de Coordinación Política propondrá al Pleno el nombramiento de un presidente sustituto, respetando su designación por el mismo grupo parlamentario al que le pertenecía.**

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.— Diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

«151. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Silvia Oliva Fragoso diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 173 y se adiciona el artículo 211-1 del Código Penal Federal y se deroga y modifica diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

La sustracción de correspondencia y paquetería es un problema añejo, que en la actualidad se ha incrementado, este hecho ilícito se agrava cuando se trata de documentos cobrables, cuando la información contenida es revelada y es utilizada en otros delitos, como el secuestro y la extorsión que son nuevas modalidades que se desprenden de estos hechos.

Es conocido y frecuente que en edificios de departamentos, en predios y unidades habitacionales donde el empleado postal o trabajador de empresas de paquetería y mensajería no tienen acceso a cada una de las viviendas, se procede a que dicho envío se deposite en un solo lugar o se le encargue a una persona, en esta se encuentran revistas, cartas personales, tarjetas personales, que en ocasiones es violada o robada por algunos de los vecinos evitando que llegue a su destino dicho correo, mensajería o paquetería. También se tienen informes de que algunos vecinos, empleados postales o de mensajería y paquetería, les agrada cierta correspondencia, como postales, tarjetas personales, propaganda, revistas, entre otras, por la simple curiosidad de conocer el contenido, es violada o robada.

Los casos más graves son la complicidad entre los trabajadores y funcionarios del Servicio Postal Mexicano, Sepomex, y de los correspondientes de empresas privadas de mensajería y paquetería en la sustracción de correspondencia y de valores es alta, como ejemplo tenemos que en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 1 de diciembre del 2007, durante un recorrido de vigilancia, elementos de la policía de Guadalajara, sorprendieron a Rita Espadas Contreras, de 45 años; a María de Lourdes Ramírez Flores, de 40 y a Marco César Berumen Orozco de 20, trabajadores del Centro Operativo Regional de Jalisco del Sepomex, en posesión de 67 piezas de correspondencia y fueron presentados ante la Procuraduría General de la República. Además, Juan Manuel Padilla Rivera, de 40 años y María Luisa Ávila, de 37, fueron detenidos también por haber sido señalados por las tres primeras personas como sus cómplices y de haberse apoderado de la correspondencia que sustrajeron de las oficinas de Sepomex.¹

Por estos hechos, los indiciados quedaron a disposición del representante social de la federación, quien inició la averiguación previa en donde la correspondencia quedó como elemento de prueba.

En otro caso similar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, un cartero de Sepomex, hurtó 10 toneladas de cartas provenientes de Estados Unidos a lo largo de varios años para buscar cheques o dólares en efectivo enviados por mexicanos radicados en Estados Unidos a sus familiares, sospechándose que hay más personal implicado en el escandaloso suceso. La delegación estatal de la PGR en Ciudad Juárez, Chihuahua, inició un acta circunstanciada y posteriormente varios afectados e incluso empleados de Sepomex presentaron las querellas correspondientes radicadas en las agencias séptima, sexta y quinta federales. El titular de la PGR en el estado, Rolando Alvarado Navarrete, dijo que el caso es investigado desde que se dio a conocer y deberán establecer qué fue lo sustraído, las cantidades y al parecer también se habla de documentos cobrables. El 1 de febrero del año 2008, una veintena de elementos de la Agencia Federal de Investigación entraron a la vivienda, del empleado postal en busca de la correspondencia robada, sin embargo esta fue recogida por empleados de Sepomex. Por su parte, el portavoz de la PGR en Ciudad Juárez, Ángel Torres, dijo que Sepomex presentó una denuncia en contra de un grupo de empleados y confirmó el rescate de miles de cartas robadas desde hace casi 10 años, y explicó que este es el caso más escándalo de robo de correspondencia de que se tenga memoria.²

En cuanto a las empresas privadas de paquetería y mensajería, de acuerdo a un comunicado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante los 12 meses de 2007, la Profeco recibió 755 quejas contra proveedores del servicio de mensajería y paquetería, de las cuales, fueron conciliadas 354 y están en trámite 213. Los principales motivos de reclamación fueron por pérdida o deterioro de los paquetes y la negativa de las empresas responsables a realizar cambios, devoluciones y bonificaciones por los malos manejos de estas.³

Ante esta problemática, no se cuenta con una regulación nacional adecuada para sancionar este acto ilícito; tampoco se cuenta con una norma oficial mexicana respecto a las medidas preventivas que debería de asumir Sepomex y las empresas privadas de mensajería y paquetería, por lo que creemos conveniente establecer una sanción a estos actos.

De acuerdo a la Ley del Servicio Postal Mexicano en donde versa:

Artículo 80. La correspondencia estará libre de todo registro y no deberá ser violada.

Artículo 9o. Queda prohibido a quienes intervengan en la prestación del servicio de correos y de los servicios diversos, proporcionar informes acerca de las personas que los utilizan.

Está claramente definido que la correspondencia no deberá ser violada y que esta prohibido proporcionar informes de las personas que utilizan el servicio postal.

Lo anterior es en el servicio que ofrece Sepomex, por lo que creemos conveniente que este acto ilícito sea sancionado por la legislación penal y no sólo en relación a la correspondencia postal, sino también a los servicios de mensajería y paquetería tanto público como privados.

Es importante señalar que las empresas privadas de mensajería en México es una industria que ofrece servicios de envío de documentos y paquetes, además de distribuir, importar, exportar, almacenar y gestionar todo tipo de mercancías que cuenta con más de 2 mil empresas que ofrecen estos servicios.

Por eso, resulta necesario que se modifique el artículo 173 del Código Penal Federal, para que se sancione a quien sustraiga, intercepte, oculte, utilice o inutilice ilícitamente correspondencia postal, mensajería y paquetería ya sea por sí o por interpósita persona; para que se cambie de la sanción actual de jornadas de trabajo a favor de la comunidad a una pena mayor, y se aumenta esta cuando se trate de sujetos que laboren en Sepomex o los que presten el servicio en empresas privadas.

En cuanto a la revelación del contenido en correspondencia postal, mensajería y paquetería proponemos añadir el artículo 211-1 al capítulo de revelación de secretos para que se sancione a quien revele o divulgue la información contenida, aumentando la pena si es realizado por empleados o funcionarios de Sepomex o de empresas privadas de correspondencia postal, mensajería o paquetería.

En la actualidad la violación de correspondencia se encuentra regulada en el artículo 173 del Código Penal Federal en donde versa:

Artículo 173. Se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I. Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y

II. Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido.

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela.

En este artículo se está tomando el acto ilícito como una simple “travesura” sancionando con jornadas de trabajo a favor de la comunidad, las cuales no se aplican y son insuficientes; también considera solamente a las comunicaciones escritas. Con esta iniciativa se está tomando en cuenta tanto a la correspondencia postal como a la mensajería y paquetería. Con ella no se excluye los delitos como el fraude, el robo, entre otros, sin menoscabo de que pudiera existir un concurso ideal o real de delitos, sino se fortalece otorgando una mayor seguridad jurídica en donde el bien jurídico a proteger es la seguridad de los bienes en donde nadie podrá ser privado de los mismos, al igual que proteger derecho a la intimidad que se debe de dar en la prestación de los servicios de correo postal, mensajería o paquetería.

En la presente iniciativa se derogan los artículos 576, 577 y se modifica el artículo 578 de la Ley de Vías Generales de Comunicación que abarcaban la sanción que proponemos pero de una manera escueta, dejando únicamente sancionando a las comunicaciones eléctricas transfiriendo el ámbito postal al capítulo de revelación de secretos; con la adición y modificación correspondiente al Código Penal Federal, se están tomando en cuenta la esencia de los artículos derogados, fortaleciéndolos y actualizándolos a las necesidades de la sociedad actual.

En tal virtud, y toda vez que resulta imperioso adoptar medidas legislativas al respecto y cumplir con los compromisos que tenemos con la sociedad se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 173 y adiciona el artículo 211-1 del Código Penal Federal y deroga los artículos 576, 577 y modifica el artículo 578 del Libro Séptimo, Capítulo Único de la Ley de Vías Generales de Comunicación, al tenor de la siguiente redacción

Artículo Primero. Se modifica el artículo 173 del Título Quinto, capítulo II y se adiciona el artículo 211-1 del Título Noveno, capítulo primero, para quedar como sigue

Título Quinto
Delitos en materia de vías
de comunicación y correspondencia

Capítulo II
Violación de correspondencia

Artículo 173. A quien por sí o interpósita persona, abra, sustraiga, intercepte, oculte, utilice o inutilice ilícitamente correspondencia postal, mensajería o paquetería se le impondrá la pena de 6 meses a 1 año de prisión.

La sanción que corresponde se aumentará una tercera parte cuando sea cometido por empleados o funcionarios de Sepomex o de la empresa privada a cargo de la correspondencia, mensajería o paquetería.

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela.

Título Noveno
Revelación de secretos y acceso ilícito
a sistemas y equipos de informática

Capítulo I
Revelación de secretos

Artículo 211-1. A quien revele o divulgue información contenida en correspondencia postal, mensajería o paquetería por sí o por interpósita persona será castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años.

La sanción que corresponde se aumentará en una tercera parte cuando sea cometido por empleados o funcionarios de Sepomex o de empresas privadas de correspondencia, mensajería o paquetería.

Artículo Segundo. Se derogan los artículos 576, 577 y se modifica el artículo 578 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue

Libro Séptimo
Sanciones

Capítulo Único

Artículo 576. (Se deroga).

Artículo 577. (Se deroga).

Artículo 578. A los empleados de comunicaciones eléctricas que indebidamente proporcionen informes acerca de las personas que sostengan relaciones por este medio de comunicación, se les aplicarán de 10 días a tres meses de prisión y quedarán, además, destituidos de su cargo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1) Sala de prensa de la Procuraduría General de la República, "Por robo de correspondencia, AMPF ejercita acción penal contra tres empleados de correos", www.pgr.gob.mx/prensa/prensa.asp?page_no=2&tRcd=2&day=&month=12&year=2007&st=jal

2) Síntesis vespertina "Procuraduría General de la República" <http://dgcs.pgr.gob.mx/Sintesis/Vespertina/Vespertina2007/Febrero2007/sinves020207.htm>

3) Procuraduría Federal del Consumidor, "La Profeco recibió más de 700 quejas contra proveedores de mensajería y paquetería", <http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa08/ene08/bol09.pdf>

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.—
Diputada Silvia Oliva Fragoso (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Comunicaciones.

«152. Que adiciona un artículo 10 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 10 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La posibilidad de que los más de 10 mil indígenas presos en las cárceles de todo el país tengan un proceso justo se encuentra aún lejana. La falta de procesos justos es más evidente en las grandes ciudades, donde esta garantía se viola constantemente, debido a la falta de defensores públicos que permitan a los indígenas llevar un proceso judicial justo y claro.

Acusados de delitos como homicidio y robo del fuero común, tráfico de drogas y secuestro, decenas de indígenas pertenecientes a alguna de las 62 etnias del país ingresan a prisión sin conocer el motivo por el que son encarcelados ni entender las acusaciones en su contra.

Estos casos ejemplifican una conducta típica de los grupos indígenas, cuyos integrantes trasladan sus usos y costumbres al lugar al que emigran y, por desconocimiento del derecho, cuando se ven involucrados en hechos delictivos, no tienen el apoyo y la asistencia legal que les permita contar con la ayuda indicada que les permita no ser encarcelados de manera injusta.

Con esto no queremos decir que todos sean inocentes, sabemos que algunos incurrir en delitos y en ese caso, deben recibir la pena a la que se hacen acreedores, siempre y cuando estén en condiciones equitativas que les permitan entender las acusaciones y los términos jurídicos de su proceso.

Dada la situación que guarda actualmente la Ley Federal de Defensoría Pública, en la cual se prevé que las personas indígenas solamente tienen derecho a recibir asesoría jurídica en asuntos de orden no penal y no defensoría pública en asuntos penales, es por lo que proponemos adicionar un artículo 10 Bis, con el objetivo de evitar que existan lagunas en dicha ley, asegurando que los indígenas cuenten con defensores públicos que atiendan los asuntos en los que estén implicados en la comisión de algún delito del orden federal.

Los defensores deberán brindar asistencia de oficio desde el momento en que sea presentado ante el Ministerio Público, sin necesidad de una solicitud formulada por el indi-

ciado o inculcado, tal como lo prevé el artículo 10 de la ley Federal de Defensoría Pública. Asimismo, dichos defensores deberán estar especializados y hablar las diferentes lenguas y dialectos de la región, a fin de asesorar a los indígenas en su propio idioma, así como presentar dictámenes culturales y lingüísticos como medios de defensa.

En otras ocasiones, por la carga peyorativa y la discriminación, los mismos indígenas niegan su origen y son sometidos a proceso, sentenciados y hasta ejecutoriados sin haber tenido acceso a un defensor público que les informe sobre sus derechos. Por este motivo, ni las autoridades penitenciarias saben con precisión cuántos indígenas están presos en las cárceles del país.

Cada año, decenas de indígenas en todo el país denuncian casos de abuso de autoridad cuando son parte de un proceso judicial; entre las constantes quejas se encuentra la de no contar con un defensor público que les permita conocer todos los procedimientos.

En este sentido, resulta evidente que “la procuración de justicia en nuestro país dista de ser justa y equitativa ya que mantiene a los pueblos indígenas sujetos a un sistema desigual que refuerza la discriminación. A este problema histórico se le han aplicado políticas gubernamentales precipitadas, que sólo en apariencia atienden los conflictos sociales, pero con prácticas antidemocráticas que llevan a la impunidad, a la falta de justicia y a la presencia de grupos en el poder que actúan ilegítima e ilegalmente.”¹

Si bien, en el ámbito de la jurisprudencia, de la procuración y administración de la justicia, existen defensores públicos estos no tienen la facultad, de acuerdo a la Ley de Defensoría, de asistir en asuntos del orden penal a los indígenas, lo cual deja en evidencia las enormes deficiencias que presenta el sistema judicial en materia de equidad en lo que respecta a la procuración de justicia para los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas del país.

Por otro lado, es evidente la falta de conocimiento y capacidad de las agencias del Ministerio Público para garantizar el respeto del derecho indígena.

En este sentido, resulta importante consolidar un proyecto que garantice la responsabilidad del gobierno de contar con un defensor público certificado en los procesos judiciales para los indígenas, con la finalidad de disminuir los altos índices de discriminación y abuso que sufren los mismos durante el proceso judicial.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Único. Se adiciona un artículo 10 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública, para quedar como sigue:

Artículo 10 Bis. En caso de que el indiciado o inculcado sea indígena, el Instituto Federal de Defensoría Pública le asignará un defensor público, sin necesidad de solicitud previa por parte del inculcado.

Dicho defensor deberá hablar la lengua del inculcado.

El Ministerio Público no podrá tomar la declaración preparatoria del inculcado sin la presencia del defensor público.

Notas:

1) <http://www.jornada.unam.mx/2003/09/22/oja77-chiapas.html>

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2008.— Diputada Elda Gómez Lugo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia.

«153. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Alejandro Delgado Oscoy, del Grupo Parlamentario del PAN

Alejandro Enrique Delgado Oscoy, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La rendición de cuentas se ha vuelto una exigencia ubicua en el mundo de la política democrática. Todos estamos de acuerdo en que democracia implica rendición de cuentas. En México, en lo particular, coincidimos en que después de décadas de gobierno irresponsable, el establecimiento de instituciones y prácticas efectivas de rendición de cuentas representa una de las primeras aspiraciones de la joven democracia. Existe entonces, un consenso notable acerca de la relevancia democrática de la rendición de cuentas. Sin embargo, es necesario preguntarse si se entiende el alcance, si se comprende a plenitud sus límites y características como elemento legitimador del ejercicio del poder político.

En este sentido destaca la importancia del acceso a la información y la transparencia como pilares fundamentales del proceso de rendición de cuentas; y más aún, después de las recientes reformas constitucionales al artículo 6o. con las que se establecen principios y mecanismos uniformes observables por los diversos ámbitos de gobierno.

Ahora bien, toda vez que un aspecto fundamental de la reforma al artículo 6o. fue delimitar a los sujetos obligados a transparentar sus acciones y permitir el acceso a la información. En este sentido, observamos con claridad que el Constituyente Permanente fue muy claro referente a los sujetos obligados a la transparencia y al acceso a la información, cuyo listado limitativo se centra en los órganos públicos.

No obstante lo anterior, en la reforma electoral también aprobada por esta legislatura se establecieron en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, ciertas obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia. Tomando en cuenta que serán sujetos obligados indirectamente, en virtud de no ser propiamente un órgano de Estado.

En palabras de Giovanni Sartori, podemos encontrar una justificación de por qué sujetar a los partidos a reglas de transparencia, cuando dice: “El financiamiento de la política constituye tal vez, la demanda central en las democracias modernas... saber cuánto reciben y quien financia a los partidos, por lo que lo hacen y a qué intereses se deben, constituye un elemento de información clave para conformar la decisión pública y definir el voto”.

Así pues, podemos determinar que a través de reglas de transparencia, tendremos la posibilidad de tener un voto

mejor razonado, por parte del electorado, ya que al estar informada la ciudadanía se encuentra en posibilidad de tener un visión más global de los institutos políticos, en lugar de visualizar un partido gris que impide conocerlo más allá de las propuestas de sus candidatos en tiempos de campaña.

Así las cosas, podemos concluir que la noción de la rendición de cuentas para estos entes de interés público tiene dos dimensiones, de acuerdo con el pensamiento de Andreas Schedler, por un lado la obligación de los partidos políticos y sus funcionarios de informar sobre sus decisiones y justificarlas en público y, por otro lado, se incluye la posibilidad de sancionarlos en caso de que hayan violados sus deberes públicos.

Por todos estos motivos podemos justificar que los partidos al tener un carácter especial dentro del marco jurídico mexicano, deben tener una regulación especial, pues no que son entes eminentemente públicos o exclusivos de naturaleza privada.

Esta iniciativa pretende únicamente reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a fin de que se establezca en la misma, el carácter de sujetos obligados indirectamente de los partidos políticos y que se regirán por las disposiciones contenidas en el Cofipe y en su caso por el reglamento que en dicha materia apruebe el Consejo General del IFE.

Por todo lo anterior, esta iniciativa toma en cuenta tanto la autonomía deliberativa y el derecho de autodeterminarse de los partidos, pero a su vez reconoce que el acceso a la información pública es una herramienta fundamental para las organizaciones sociales y los ciudadanos en un sistema democrático.

Por las anteriores consideraciones se presenta el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el primer párrafo y se deroga el segundo del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Para quedar como sigue:

Artículo 11. **Los partidos políticos harán pública su información de conformidad con lo previsto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y**

las que, en lo conducente resulten aplicables conforma al reglamento que expida el Instituto Federal Electoral.

Segundo párrafo se deroga.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2008.— Diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de la Función Pública.

«154. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Ramón Félix Pacheco Llanes y Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Ramón Pacheco Llanes y Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que les conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin importar la antigüedad que tenga una injusticia, se debe luchar contra ella. Por más natural que parezca una injusticia, va contra los derechos humanos y debe ser suprimida.

La lucha por el predominio de los derechos humanos, se ha ido dando en todos los espacios sociales. Baste tomar en

cuenta los importantes avances obtenidos en relación a las fuerzas armadas y el clero.

Desafortunadamente, la esfera de la actividad médica ha quedado a la zaga, lo que es inadmisibles ya que en ella se forman lo futuros profesionistas que tendrán en sus manos la vida y salud de todos los mexicanos; ahí se ejerce una profesión que tutela los más altos valores humanos.

Por una mal entendida e ilegal tradición, los médicos de alta jerarquía se protegen unos a otros sin importar la gravedad de los hechos que se les imputen a alguno de ellos. Esto que es un grito a voces, tan sólo va en demérito de credibilidad social sobre la profesión médica.

En este sentido, los médicos que realizan sus residencias, desde siempre han denunciado el trato cruel y explotación de que son víctimas. Los médicos "con mayor experiencia" en la profesión contestan a estos jóvenes médicos, que este inencomiable trato es normal, y que el aceptarlo es parte de su capacidad para ejercer la medicina. Esto es una burla a la lógica y a los más elementales principios del humanismo, y de la eficiencia en los servicios médicos.

Esta deleznable situación se da no sólo en los servicios de salud privados, sino en los de carácter público, incluidos el IMSS y el ISSSTE.

Las médicas y médicos residentes, señalan que son víctimas de todo tipo de violencia psicológica, son sometidos a castigos como impedirles ingerir sus alimentos, tenerlos todo el día de pie e impedirles acudir a sus necesidades fisiológicas, por citar algunos tormentos.

Las mujeres son objeto de humillaciones y obstáculos por su sola calidad de mujeres. Y no sólo son agredidas por los médicos que actúan como profesores sino por los residentes varones.

Sumado a lo anterior, estos trabajadores viven una carga insoportable de trabajo, pésimos salarios y, en general viven una sobre explotación de parte de los empresarios de la salud contraria a la Constitución y a la LFT. Lo que provoca constantes y legítimos actos de protesta de los médicos residentes que pueden poner en riesgo la salud de la población en general.

Para poner fin a lo anterior, en esta iniciativa se establece que estos médicos residentes tendrán derecho a una jornada dentro de los máximos legales, por lo que todo servicio

en exceso se les deberá pagar como tiempo extraordinario; igualmente por concepto de salario percibirán un mínimo de 6 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal y, además dentro de sus percepciones tendrán derecho al pago de pasajes, a que se les proporcione alimentación y, en su caso, a un hospedaje digno e higiénico. Igualmente a un pago adicional por prácticas de riesgo.

Pero especialmente tendrán derecho a un ambiente libre de hostigamiento sexual y en general de violencia laboral, de lo contrario accederán al pago de daños y perjuicios por el equivalente, por lo menos, a cuatro meses del salario que perciben. Pero igualmente los médicos residentes quedan obligados a no llevar a cabo tales actos de hostigamiento en el marco de esta relación de trabajo, de lo contrario será causa de despido justificado.

Igualmente, los médicos residentes accederán a asesoría jurídica en caso de demandas por terceros derivadas del desempeño de la residencia; y, contrario a lo que actualmente suele suceder, si un residente se incapacita durante su jornada tendrá derecho a suspender sus labores, debiendo dar aviso a su jefe de servicio o de guardia.

En suma, los doctores, como el resto de mexicanos, están sometidos al estado de derecho y deben de respetarlo; los médicos residentes son trabajadores y deben acceder a los mínimos derechos humanos laborales.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversos preceptos de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos:

Ley Federal del Trabajo

Título Sexto Trabajos Especiales

Capítulo XVI Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad

Artículo 353-C. Son derechos especiales de los médicos residentes, que deberán consignarse en los contratos que se otorguen, a más de los previstos en esta ley, los siguientes:

I. y II. ...

III. Cumplir con una jornada de trabajo dentro de los máximos legales que establece esta ley. Por lo que todo exceso se les cubrirá como tiempo extraordinario, además de que no será obligatorio el desempeño de éste;

IV. A percibir por concepto de salario, un mínimo de seis salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal;

V. Obtener de manera adicional un veinte por ciento sobre el salario en caso de prácticas de riesgos como enfermedades infectocontagiosas, radiología, entre otros.

VI. A disfrutar de un ambiente laboral libre de hostigamiento sexual y violencia laboral. En caso contrario tendrán derecho al pago de daños y perjuicios por el equivalente a cuatro meses de su salario y a ser reubicado en otra unidad médica receptora de residentes, con independencia de cualquier otra consecuencia jurídica prevista en esta ley;

VII. A que en la programación del servicio social profesional el patrón incluya sin discriminación alguna a los residentes extranjeros;

VIII. A que se les cubra de manera adicional a sus salarios el pago de pasajes y alimentos correspondientes a su jornada de trabajo, éstos deberán ser higiénicos, balanceados, suficientes y de buena calidad. Si sus servicios los desempeña fuera de su lugar de residencia, tendrá derecho a un hospedaje digno e higiénico;

IX. A recibir la protección necesaria en materia jurídica, especialmente tratándose de responsabilidad civil o penal, proporcionando los medios para la tutela integral de los médicos residentes como asesoría jurídica, fianzas requeridas y, demás; y

X. A suspender sus labores si se incapacitan durante la jornada de trabajo y, salvo imposibilidad, deberá dar aviso de este hecho a su jefe de servicio o de guardia, al reanudar sus labores exhibirá el certificado de incapacidad respectivo.

Artículo 353-D. Son obligaciones especiales del Médico Residente, las siguientes:

I. ...

II. Acatar, **salvo causa justificada**, las órdenes de las personas designadas para impartir el adiestramiento o para dirigir el desarrollo del trabajo, en lo concerniente a aquél, y a éste;

III. a VI. ...

VII. Abstenerse de realizar hostigamiento sexual, y en general todo tipo de violencia laboral contra cualquier persona.

Artículo 353-G. Son causas especiales de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón, además de las que establece el artículo 47, las siguientes:

I. El incumplimiento de las obligaciones a que aluden las fracciones I, II, III, VI y **VII del artículo 353 D**;

II. y III. ...

Artículo 353-G Bis. Es causa especial de rescisión de la relación de trabajo, además de las que establece el artículo 51, sin responsabilidad para el médico residente, ser víctima de hostigamiento sexual, y violencia laboral.

Artículo 353-G Ter. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar a los médicos residentes el debido respeto absteniéndose del maltrato de palabra o de obra, y crear un ambiente libre de riesgos y violencia laboral, evitando el abuso, el hostigamiento sexual, entre otros.

II. A ingresar por especialidad a un mínimo de treinta por ciento de mujeres, aplicando al efecto las acciones afirmativas que sean necesarias.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.— Diputados: Ramón Pacheco Llanes y Daniel Dehesa Mora (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

«155. Que reforma y adiciona el artículo 60 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Patricia Villanueva Abraján, diputada federal de la LX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en las facultades que le confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presenta ante esta honorable asamblea una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el segundo párrafo del artículo 60 del Código Penal Federal, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Para el sistema penal mexicano las acciones u omisiones delictivas solo pueden realizarse en forma dolosa o culposa, en este sentido los códigos sustantivos expresan que obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley; por otro lado, se entiende que obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales.

Asimismo, el artículo 60 del Código Penal Federal, establece un catalogo de delitos por cuya comisión podrían aplicarse las sanciones que en este mismo numeral se establecen, en él se observa la ausencia del tipo penal del aborto, previsto y sancionado por los artículos 329 al 334 del ordenamiento antes citado, ello implica que el delito de aborto culposo no se encuentra previsto en el ámbito federal.

Lo anterior representa un problema que debe resolverse en forma inmediata, pues desafortunadamente una conducta en que ha incurrido el personal del sector salud, tanto del privado como del público, es precisamente la comisión del aborto culposo; en la especie se busca sancionar al personal médico del sector público que por laborar en entidades de la administración pública federal, adquieren la calidad de empleados federales y por ello consecuentemente, en términos de lo que disponen tanto la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las conductas delictivas en que incurran con motivo del ejercicio de sus

funciones, son competencia de los órganos de procuración y administración de justicia del ámbito federal.

Consecuentemente la jurisdicción del orden común no tiene competencia alguna para conocer de este delito en las hipótesis ya planteadas, y si bien es cierto que en términos de los criterios jurisprudenciales el ministerio público del orden común podría conocer e investigar estos delitos, también cierto es que quien necesariamente debe ejercitar la acción penal tratándose de delitos del orden federal, lo es al agente del ministerio público de la federación ante los tribunales federales, lo que nos ubica nuevamente ante la problemática citada.

En esta tesitura resulta apremiante establecer el tipo penal de aborto en grado culposo en nuestra legislación federal, y así brindar a la sociedad los instrumentos jurídicos necesarios para fincar responsabilidad penal a quienes incurran en la hipótesis ya señalada, por ello me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se modifica el texto del párrafo segundo del artículo 60 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 60. ...

Las sanciones por delitos culposos sólo se impondrán en relación con los delitos previstos en los siguientes artículos: 150, 167, fracción VI, 169, 199 Bis, 289, parte segunda, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 323, **330**, 397, 399, 414, primer párrafo y tercero en su hipótesis de resultado, 415, fracciones I y II y último párrafo en su hipótesis de resultado, 416, 420, fracciones I, II, III y V, y 420 Bis, fracciones I, II y IV de este Código.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.— Diputada Patricia Villanueva Abraján (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia.

«156. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Dolores María del Carmen Parra Jiménez, diputada de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne al Consejo de Política Interna, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la siguiente disposición a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con decreto que reforma el artículo 3o., párrafo LVI; orientado a establecer en forma más clara la definición de uso domestico para la aplicación de agua nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El uso del agua es y será un instrumento vital que permite a los ciudadanos vivir en una forma saludable, y es imprescindible para el funcionamiento tanto de la sociedad como de las personas, su uso es tan variado que va desde el uso en el hogar para cubrir las necesidades naturales como son: el aseo personal y familiar, el uso externo necesario para la salud de la persona y el hogar, la higiene personal, el uso interno refiriendo este al consumo, marcando con lo anteriormente expuesto una gran diferencia entre el agua que se usa para necesidades externas y la que se requiere para consumo humano, las cuales son necesidades que se requieren solventar con agua de características totalmente diferentes en cada uno de los casos.

El agua apta para uso humano es una parte muy pequeña del total que se usa en el hogar, la escasez del agua para consumo se debe a las condiciones naturales de determinadas regiones y también tiene mucho que ver con el aumento de la población, el mal uso, la contaminación y una infinidad de factores. La situación de escasez de agua para consumo humano es preocupante y debemos considerar que la cuestión del agua es uno de los desafíos más importante a valorar en el siglo XXI. Además del agua para con-

sumo humano, la agricultura, la industria, la higiene, la salud, así como la calidad ambiental y las posibilidades de desarrollo tanto de un territorio como de su población dependerán en gran medida de este líquido, de su calidad, de su consumo y uso racional.

La necesidad de elaborar esta iniciativa de reforma nos lleva a la necesidad de dividir los tipos de agua necesarios para uso domestico, debido que el artículo hace una división muy superficial de esta y no se apega a las necesidades reales de la sociedad actual.

Los altos índices de contaminación, el cambio climático, el calentamiento global, el crecimiento poblacional y la explosión demográfica, que han llevado la contaminación de las aguas en todos los aspectos. Lo anterior hace necesaria una división específica de la calidad del agua dependiendo el uso, ya que las características físicas y químicas del agua para uso en el hogar que distribuyen los municipios en el país cumple con las necesidades propias de su uso domestico como el aseo del hogar pero dista completamente de ser agua potable o más en específico, agua para consumo humano.

El fin de considerar el agua para consumo humano dentro del agua para **uso doméstico** es primordial ya que esta se encuentra dentro de la política hídrica nacional como lo marca el artículo 14 Bis 5, y en su fracción XXII, lo considera preferente en relación con cualquier otro uso, esto considerando la propia naturaleza del agua para consumo humano es prioridad en cualquier situación, ya que el agua para consumo humano es base para la vida de todo ser humano, y debe de considerarse parte de la seguridad nacional debido al impacto que esta tiene en la salud pública, ya que su consumo es general en todos los niveles socioeconómicos del país. Las personas de pocos ingresos o en pobreza extrema no tienen acceso a agua embotellada e ingieren cualquier agua que esta a su alcance, no precisamente apta para el consumo humano y por ello es necesario primero considerarla esta dentro de la ley para poder proteger a este sector de la población y poder brindarle este recurso básico e indispensable para la salud y el desarrollo del país.

El agua potable debe tener un estricto control en su composición como lo marca la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 en donde se establecen los límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano que deben cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados o cualquier

persona física o moral que distribuya el agua en todo el territorio nacional,

El agua que se consume repercute directamente en la salud del individuo, y por consiguiente en la familia y en la sociedad, el que la ley de aguas nacionales la contemple en sus diferentes tipos es primordial para la salud y necesidades de la sociedad.

El uso actual de agua para consumo humano, los altos niveles de extracción de esta para procesarla y hacerla propicia para el consumo en la actualidad es considerable para el impacto en los mantos friáticos, manantiales y otras diversas fuentes de extracción.

Como representantes populares sensibles a la demanda social, a los retos que el país y el mundo enfrenta en materia de abastecimiento, gestión, administración y protección de los sistemas de agua, en mi cargo como diputada federal considero necesario evitar confusiones en la Ley de Aguas Nacionales, a fin de evitar controversias que vayan en perjuicio de nuestros representados.

En la actualidad, debido a las necesidades de la sociedad ha proliferado el comercio del agua embotellada para consumo humano, debido a que la calidad de agua que se suministra por las entidades públicas no tiene la calidad suficiente para que la población la beba, tanto en las pequeñas como en las grandes urbes de nuestra nación. Ya que el servicio público no suministra agua con la calidad para ser apta para consumo humano, la iniciativa privada se a dedica a ello sin control alguno.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de

Decreto que reforma el artículo 3o., fracción LVI, para quedar de la siguiente forma

Artículo LVI. Uso domestico. La aplicación de agua nacional para el uso particular de las personas para consumo humano y su aseo personal, uso del hogar, riego de sus jardines y de árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de animales domésticos que no constituya una actividad lucrativa, en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 29 de abril de 2008.— Diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

«157. Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rafael Villicaña García, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Rafael Villicaña García, diputado federal de esta LX Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El municipio, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concibe como la base de la división política y administrativa gubernamental del Estado mexicano; el ejercicio de ésta área del poder público se puede considerar como la primera y la más cercana instancia de gobierno que más interactúa con los gobernados, quienes acuden a ella en busca de soluciones a una gran diversidad de problemas que se suscitan en la dinámica social.

Le corresponde a esta persona moral de orden público, la prestación de los servicios públicos con los que debe necesariamente contar la población para su mejor desarrollo económico y social: agua potable, seguridad pública, calles, alumbrado público, etcétera.

Para que los ayuntamientos, en lo posible, cumplan con todas estas obligaciones, deben tener recursos económicos y, como sabemos, estos dineros son finitos, limitados en mu-

chos municipios ubicados en zonas marginadas y pobres de nuestra geografía nacional, encontrando ahí poblaciones con poco o nulo avance en la construcción en su infraestructura, en la ministración de servicios, de programas de desarrollo social y económico, y de todo aquello en lo que la autoridad local debe proporcionar y ser factor de mejoramiento en la condición de vida de las personas.

Cuando hay un manejo irresponsable de las finanzas gubernamentales, cuando no se práctica el ahorro, la austeridad, la transparencia, la optimización de los recursos, aunado a lo restringido de lo que ingresa para gastar, trae como resultado que, al final, a la gente le llegue casi nada, es decir, que se siga caminando por calles sin pavimento, se lleve el agua en cubetas para uso domestico, con escuelas en estado deplorable y sin espacios para el esparcimiento y práctica del deporte.

La presente iniciativa pretende evitar que a la población de un municipio le lleguen menos recursos de los que ya de por sí son pocos, que presidentes, síndicos y regidores municipales, teniendo la encomienda de servir, administrando bien, manipulen, para aprovechamiento personal, el dinero público, asignándose sueldos y toda clase de compensaciones elevadas, desproporcionadas y asignadas de manera unilateral.

Son sueldos y compensaciones elevadas en virtud de que su monto está por encima del ingreso promedio que tiene el grueso de la sociedad; son elevadas porque se van aumentando en mayor porcentaje en relación a los salarios mínimos para los trabajadores; son elevadas porque, además del sueldo quincenal o mensual, se atribuyen el derecho a pago de gastos médicos, viáticos, vacaciones, compensaciones de fin de año, compensaciones de fin de "trienio" y otras tantas que se inventan.

Son desproporcionadas porque existen presidentes municipales que incluso ganan un sueldo mayor al de un gobernador del estado; municipios que, en relación con otros de la misma entidad federativa, manejan ingresos menores, pero a los integrantes de sus cabildos se les paga más; municipios que tienen deficiencias en la prestación de servicios públicos y sus autoridades ganan más que otros en donde se presenta un mayor desarrollo económico y social.

Esto se explica debido a que son asignados de manera unilateral, en virtud de que no existe una norma o un órgano superior de orden público que establezca su monto; son compensaciones asignadas unilateralmente sin que los ciudadanos sepan, ¿quien dice cuales sí y cuales no?; están a

expensas a la discrecionalidad de los mismos que las van a recibir y ejercer, no de los principios de responsabilidad, honestidad, transparencia y vocación de servicio que debieran regir las decisiones de quienes administran los recursos de la hacienda municipal.

Quien accede a ocupar algún cargo, de los que me he venido refiriendo, tienen la investidura de autoridad que la ley les otorga, tienen facultades y atribuciones, se conducen y hacen cumplir sus determinaciones al amparo de la justificación en el derecho y, por ese motivo, los demás ciudadanos como gobernados, deben cumplir tales determinaciones; la retribución que tales autoridades reciben por realizar este trabajo, debe ser digno y acorde a la capacidad de quien lo paga.

Los hechos nos han planteado la necesidad y la urgencia de establecer medios de control, en virtud de que, cuando se puede ganar lo que se quiere, pocas veces se toma en cuenta el daño al erario que es de todos; es decir, debe ser un ente ajeno a la autoridad municipal quien fije y evite los excesos que desafortunadamente tienen lugar en muchos de los ayuntamientos de la geografía nacional.

Considero que son los miembros que integran las legislaturas locales, quienes conocen las condiciones económicas y sociales de los municipios que integran dichas entidades federativas, quienes, en una relación más cercana, conocen los montos de los presupuestos que administran los ayuntamientos, quienes conocen las condiciones y las carencias en infraestructura educativa, salud, alumbrado público, manejo de agua potable, saneamiento, seguridad pública y demás servicios que legalmente deben prestar a la ciudadanía; por otro lado, conocen los excesos en que muchos integrantes de los ayuntamientos incurrir al asignarse sueldos y compensaciones excesivos.

En razón de ello, propongo en la presente iniciativa que las legislaturas locales, al inicio de cada ejercicio administrativo municipal anual, determine el monto de los sueldos y demás compensaciones que recibirán en este periodo los multicitados integrantes de los ayuntamientos, lo que contribuiría a transparentar mejor este aspecto de las finanzas gubernamentales, y dejar bien en claro a quienes aspiran a ocupar estos cargos que no van a poder establecer a su antojo y a costa del pueblo su retribución.

Urge poner límites, establecer normas que, tomando en cuenta la situación de cada municipio, dicten los montos de los sueldos y las compensaciones a que deben hacerse acreedores tales gobernantes y no dejarlo a su consideración.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y del artículo 135, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se modifica el párrafo quinto recorriéndose el actual párrafo quinto, para ser un sexto párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. a III. ...

IV. ...

a)

b)

c) ...

...

...

...

Las legislaturas de los estados determinarán los montos máximos de los sueldos y compensaciones, que percibirán los presidentes, síndicos y regidores municipales, en cada año de ejercicio administrativo; debiendo tomar en cuenta, la situación económica, demográfica, territorial, de cada uno de los municipios.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos de forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen, conforme a la ley;

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.—
Diputado Rafael Villicaña García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

«158. Que reforma y adiciona los artículos 250 Bis del Código Penal Federal, y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Patricia Villanueva Abraján, diputada federal de la LX Legislatura, con base en las facultades que me confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Federal y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presento ante esta honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 250 Bis al Código Penal Federal y el inciso 36) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho es un instrumento de control social, su eficacia tiene que ver con su constante transformación; ello hace necesario que estemos atentos a los problemas que tiene la sociedad mexicana en su convivencia.

El combate a la delincuencia organizada es uno de los ejes centrales del gobierno federal y gobiernos estatales, y se refleja en el diseño de las políticas públicas en materia de seguridad, así observamos que en “la estrategia integral para la prevención del delito y combate a la delincuencia” del actual gobierno federal se pondera la coordinación de los tres ordenes de gobierno para la concentración y armonización de la información que permita estructurar un mapa de la delincuencia en todo el país, con el cual se prevé combatir con eficiencia a las organizaciones criminales; estas acciones se robustecen con aquellas a las que en el ámbito internacional México se ha sumado, como por ejemplo la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo).

Uno de los actos concurrentes de la delincuencia organizada y que debemos atender, es el de la usurpación de la personalidad, que tiende a defraudar financieramente a entidades bancarias, casas comerciales, con cargo al patrimonio de los usuarios. De este hecho, el ofendido se da cuenta cuando le es negado un crédito, se le requiere un pago por incumplimiento, aparezca su nombre un día cualquiera en el buró de crédito, o le es requerido el cumplimiento de un acto contractual, en esa tesitura, puede pasar mucho tiempo antes de que este, tome conocimiento del perjuicio del que ha sido víctima.

La obtención de los datos personales de un ciudadano es relativamente fácil para la delincuencia, pues basta con una llamada telefónica donde el activo del delito se haga pasar por un ejecutivo de banco o cualquier otra empresa, con el objeto de verificar datos de un usuario; o de una manera sofisticada utilizando el Internet; una vez hecho lo anterior, para el activo le es sencillo obtener un beneficio ya que existen empresas que para la aprobación de un crédito requieren solamente una identificación y un comprobante de domicilio, proponiendo incluso aprobación inmediata y el uso instantáneo de la tarjeta correspondiente, esta permisividad, sin duda incrementa la comisión de este acto delictivo.

La usurpación de la personalidad se materializa cuando una persona usa el nombre, domicilio, nacionalidad y estado civil de otra, para sí, con el objeto de obtener un beneficio, que puede ser desde tener el acceso a un determinado lugar, ser parte de un acto contractual, hasta obtener y ejercer un crédito financiero; este acto ilícito reviste la comisión de otros delitos como el fraude y la falsificación de documentos.

El robo de identidad como se conoce a lo que en estricto derecho es la usurpación de la personalidad, es un delito que se comete con más regularidad en los países donde el uso del Internet es el medio común para realizar transferencias, compras, pagar impuestos, en los Estados Unidos de América, cada cuatro segundos es robada una identidad y se afecta alrededor de 10 millones de personas por año, generando un perjuicio aproximado de 50 billones de dólares a los pasivos de este delito; la restauración de la identidad de una persona cuesta 8 mil dólares y se pierden 600 horas aproximadamente para realizar los tramites correspondientes.

La compañía de seguridad en Internet Symantec, estableció que en los Estados Unidos de Norte América se encuentran más de la mitad de los servidores de la economía ilegal que son utilizados para vender información confidencial y datos personales interceptados en la red, esto indica que la delincuencia se esta fijando como objetivo atentar contra usuarios individuales. Según datos de la Asociación Mexicana de Internet, AMIPCI, AC, hasta el año 2007 existían 2.7 millones de usuarios de Internet, en tal virtud, nuestro país no esta ajeno a este novedoso delito, y no obstante que no existen cifras oficiales al respecto, es de atenderse que durante el año de 2004 se reportaron un total de 557 casos, según datos de la Asociación Internacional para la Investigación de Fraudes Electrónicos; la Condusef por su parte,

ha señalado que el 70 por ciento de las reclamaciones de tarjetas de crédito en México están relacionadas con cargos indebidos.

En merito de lo expuesto y en virtud de que el Código Penal Federal no prevé como conducta ilícita la usurpación de la personalidad, que esta creciendo de manera alarmante en nuestro país, es necesario adicionar a la legislación un tipo penal, que sancione la conducta de la persona que utilice el nombre de otra o cualquiera de los atributos de la personalidad de esta, con el objeto de obtener un beneficio.

Asimismo, este tipo penal por ser doloso debe ser sancionado con severidad, consecuentemente no se debe permitir que quienes cometan esta conducta alcancen su libertad bajo caución, por ello se propone agregar este tipo penal al catalogo de delitos graves previsto en la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

En atención a los argumentos señalados, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adiciona al Código Penal Federal el artículo 250 Bis, para quedar como sigue:

Artículo 250 Bis. Se impondrá de 3 a 6 años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo, al que utilice el nombre de otra persona para sí, o cualquiera de los datos inherentes a su personalidad, con el objeto de obtener algún beneficio.

Artículo Segundo. Se adiciona un inciso 36) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1). ...

36). Usurpación de la personalidad, previsto en el artículo 250 Bis.

Artículos Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2008.— Diputada Patricia Villanueva Abraján (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia.

«159. Que expide la Ley Agraria que reforma la del 26 de febrero de 1992, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputadas y diputados federales, miembros de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LX Legislatura; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Agraria que reforma la del 26 de febrero de 1992, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El tema de la tierra, desde el origen de nuestra nación y aún antes, ha sido parte esencial de nuestra historia. La lucha campesina por la tierra y por el acceso a la justicia social, ha sido una constante.

A partir de la conquista y durante la colonia, el despojo de las tierras y la asimilación forzosa a las formas de propiedad y al orden jurídico impuesto por los conquistadores, trajeron consigo complejos procesos de concentración de la tierra en pocas manos, en detrimento de la mayoría de la población rural; situación que, aunada a otras formas de injusticia social, provocó la rebelión de los campesinos, primero a través de la guerra de independencia y un siglo después en la revolución agraria de 1910-1917.

La cuestión agraria ha sido hilo conductor de nuestra historia y motor de los principales movimientos sociales que nos definen como nación y que se consolidaron a través de la Constitución de 1917.

El artículo 27 constitucional estableció las bases para la reorganización de la propiedad agraria, limitar la concentración de la tierra, prohibir el latifundio, restituir a los campesinos, pueblos y comunidades indígenas las tierras de que habían sido despojados; y repartir la gran hacienda entre los campesinos que carecían de tierras.

En el siglo XX, México realizó dos grandes y trascendentes reformas al orden jurídico que regula las relaciones en el campo. La primera, a partir de la revolución de 1917, con la que se dio origen y vigencia jurídica a la propiedad social, el ejido y la comunidad, régimen dentro del cual quedó incluida más de la mitad del territorio nacional. La otra, en 1992, con el objeto de dar por concluido el reparto agrario y promover la incorporación del ejido y la comunidad a la recirculación de la tierra. Con esta última reforma se pretendió además, otorgar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra y establecer las bases para superar las recurrentes crisis del sector agrícola, a través de la atracción de capital privado al campo, mejorar sustancialmente la productividad y la producción agropecuarias, generar empleo, aumentar el ingreso y mejorar su distribución, logrando con ello el acceso de la población rural al bienestar social y a mejores estándares de vida.

Han transcurrido 16 años de la reforma al artículo 27 constitucional y a la legislación agraria secundaria, y en términos muy generales podemos decir que, aunque en algunos aspectos hubo avances importantes respecto de los objetivos propuestos, en muchos otros los resultados distan mucho de lo esperado: para la mayoría de los campesinos de nuestro país, no mejoraron sus condiciones de vida, ni su producción, ni sus ingresos. Lo que aumentó fue la migración, principalmente de los jóvenes de nuestro campo, hacia el vecino país en busca de mejores oportunidades de vida.

La esperada recirculación de la tierra casi no se dio. Los ejidatarios y comuneros (excepto en zonas urbanas, turísticas o altamente rentables) han permanecido en la propiedad social. Actualmente la propiedad social sigue siendo la mayoritaria en México: Se conservan 29 mil 609 núcleos agrarios, 27 mil 469 ejidos y 2 mil 140 comunidades que incluyen a 3 millones 844 mil 601 sujetos de derechos agrarios, 3 millones 236 mil 234 ejidatarios y 608 mil 367

comuneros; que ocupan 101 millones 428 mil 726 hectáreas, 84 millones 569 mil 982 en ejidos y 16 millones 854 mil 744 en comunidades; lo cual representa un 51.6 por ciento de la tenencia de la tierra del país en propiedad social, 42.9 por ciento ejidal y 8.7 por ciento comunal. Asimismo, arraigados a la tierra de propiedad social tenemos actualmente a más de 500 mil posesionarios y 900 mil avecindados.

En cuanto a la inversión privada que se buscaba atraer hacia el campo, tampoco hay resultados halagüeños. La inversión privada y el crédito, no solo no crecieron, sino que disminuyeron significativamente.

Por otra parte, la acumulación de antiguos y nuevos conflictos agrarios, que incluso ha llevado a la Cámara de Diputados a asignar en los últimos años mayores recursos al Ejecutivo para que pueda dar atención a los llamados focos rojos y focos amarillos, denota que tampoco en este rubro se logró satisfactoriamente lo esperado con la reforma de 1992.

Asimismo, en la realidad actual del campo mexicano, sobresalen procesos como el envejecimiento de los titulares de los derechos: el 63 por ciento es mayor de 50 años y el 31 por ciento de 65 años; aunado a la falta de verdaderas e impactantes acciones para que los jóvenes puedan acceder a la tierra y con ello propiciar el arraigo de éstos, el relevo generacional y la reducción de la emigración.

En cuanto al minifundio y la pulverización de la tierra que también se contemplaba revertir; el crecimiento poblacional y la falta de alternativas de empleo en actividades distintas a la tierra provocaron que la posesión de la tierra social se fragmentara. Más de la mitad de los ejidatarios poseen predios menores de 5 hectáreas, con una superficie promedio de 2.7 hectáreas.

Otro rasgo característico de estos procesos ha sido la desarticulación de las formas tradicionales de organización y representación de los núcleos agrarios que trajo consigo la reforma y que no ha podido superarse mediante estrategias de fortalecimiento y refuncionalización de las asambleas de ejidos y comunidades y sus órganos de representación, así como de genuinos procesos de organización alternativa para el impulso de la producción y comercialización que generen empleo, ingreso, combate a la pobreza y acceso al bienestar para los campesinos y productores pobres de nuestro país.

Adicionalmente, la promesa de una mejor, pronta y expedita justicia agraria para ejidatarios y comuneros, con la creación de la Procuraduría Agraria y sobre todo de los Tribunales Agrarios, sigue siendo, en mucho, una deuda pendiente del Estado con los hombres y mujeres del campo.

Asimismo, la aplicación de las reformas al marco legal de 1992, trajeron consigo una serie de fenómenos, procesos y prácticas que, por una parte, transformaron la problemática agraria y por otra, generaron nuevos problemas derivados de lagunas, oscuridad o deficiencias de la ley, no previstas por la legislación de 1992 y que es necesario regularizar.

Ante esta situación y atendiendo las función principal que tenemos como legisladores, en la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados de la LX legislatura, nos hemos propuesto, como una de las tareas centrales, la adecuación y actualización del marco jurídico que rige las relaciones agrarias en el campo de nuestro país. Consecuentemente, realizamos las siguientes acciones:

1. Revisión y análisis de los resultados de los foros de consulta popular para la actualización del marco jurídico agrario que se realizaron tanto en la LVIII como en la LIX legislaturas.
2. Estudio y análisis de los proyectos que, con los mismos objetivos de actualización del marco jurídico agrario, se realizaron en la legislatura anterior.
3. Realización de un foro nacional de "Actualización del Marco jurídico Agrario" el 5 de diciembre de 2007, con diputados de la comisión de todos los grupos parlamentarios representados en ella, los titulares de las instituciones del Sector Agrario, de otras dependencias y de los Tribunales Agrarios, así como del Consejo Nacional Agropecuario y del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados; donde se expusieron y se recibieron las respectivas propuestas.
5. Convocatoria a través de los medios masivos de comunicación y apertura de un espacio a los campesinos y público en general, para recibir sus opiniones y propuestas, durante los meses de noviembre y diciembre de 2007 y hasta el 6 de enero de 2008.
6. Estudio y análisis de la agenda legislativa de la Comisión y de su vinculación y posible incorporación al

proceso general de revisión y actualización del marco jurídico agrario.

La riqueza cualitativa y cuantitativa contenida en todo el material antes descrito, constituyó la base sobre la cual hemos trabajado, y este proceso nos condujo a la necesidad de realizar modificaciones a la ley vigente que implican un 31.5 por ciento de reformas, 31.5 por ciento de adiciones y un 22 por ciento en derogaciones; que en conjunto implican modificaciones en un ochenta y cinco por ciento de su articulado; las cuales hemos integrado en la presente iniciativa, con el claro propósito de actualizar la legislación agraria y con ello contribuir a solucionar los problemas de la gente del campo.

El conjunto de reformas, adiciones y derogaciones que se proponen en la presente iniciativa con proyecto de decreto, están orientadas fundamentalmente a los siguientes objetivos:

I. Certeza jurídica en la tenencia de la tierra y en los derechos agrarios. Una de las observaciones más recurrentes que tanto los sujetos agrarios como los propietarios privados han hecho, es la relacionada con las diferentes formas en que, a pesar de los avances a este respecto de la legislación agraria derivada de la reforma de 1992, se sigue obstaculizando la inversión y las vías de acceso al financiamiento y al crédito para la realización de operaciones que impulsen el dinamismo de la economía, el empleo y el incremento de valor a la tierra de propiedad social. Se trata, entre otros factores, de un problema de inseguridad jurídica tanto para los posibles inversionistas como para los ejidatarios y comuneros.

Esta iniciativa establece y reforma diversas disposiciones tendientes, en general, a otorgar mayor certidumbre jurídica en los derechos agrarios derivados de la propiedad social; como en los casos de transmisión y enajenación de derechos, o diversas formas contractuales de comprometer los derechos agrarios de ejidatarios, comuneros y posesionarios entre sí o con pequeños propietarios; y en el caso de la expropiación de bienes agrarios, para garantizar el pago de la indemnización, determinar su monto y reglamentar la reversión de los bienes en caso de que no se destinen a la causa de utilidad pública para la que fueron expropiados.

Es de resaltarse la inclusión de preceptos que establecen la creación y organización del "Servicio Nacional de Fe Pública Agraria", con el explícito propósito de apoyar a los sujetos agrarios, individuales o colectivos, poniendo a su

disposición de manera optativa, gratuita, accesible y segura, un instrumento público que se encargará de certificar los hechos, actos y documentos que constituyan, modifiquen o extingan derechos y obligaciones derivados de la aplicación de la legislación agraria. La trascendencia de este servicio estriba en el hecho de que actualmente existe enorme índice de incertidumbre en las operaciones y ejercicio cotidiano de los derechos de los ejidatarios y comuneros, precisamente por lo inaccesible, costoso y lejano que resulta para ellos un notario público que cubra esta necesidad.

II. Promoción del desarrollo rural en el sector agrario.

Uno de los ejes fundamentales sobre los cuales se integró la presente iniciativa fue el de promoción del desarrollo rural y fortalecimiento de las instituciones agrarias encargadas de promoverlo en el ámbito de su competencia. Partimos de la idea de que, la mejor alternativa para avanzar en el combate a la pobreza y mejorar los niveles de vida en el ámbito rural es la de propiciar, desde la ley, como obligación del Estado, la promoción del desarrollo rural, a través de su participación en la realización de obras de infraestructura, mejorar las condiciones de producción en los núcleos agrarios, aprovechamiento de la diversidad, potencialidad y multifuncionalidad de las tierras, canalización de recursos de inversión y de crédito, compactación y aprovechamiento conjunto de tierras en unidades económico-productivas, incremento de la productividad en la transformación, comercialización y oferta de servicios, asesoría y capacitación para las actividades productivas y de servicios; y la formulación de programas de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo del campo, con objetivos, metas, cobertura y responsables de su ejecución.

Por ello, en el presente proyecto se incluyen disposiciones enfocadas a lograr lo descrito en el párrafo anterior y además, a cimentar el aprovechamiento de los bienes agrarios, e incluso de éstos con tierras de propiedad particular o privada, mediante contrato, para mejorar la productividad de la tenencia y explotación de la tierra e implementar proyectos productivos, y responder así a las actuales necesidades del desarrollo del sector.

III. Fortalecer y ampliar las funciones de la Secretaría de la Reforma Agraria e instituciones del sector.

Hace unos años, después de que, desde la reforma de 1992 se concluyó el reparto agrario y últimamente se dieron por concluidos también tanto el Programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos (PROCEDE) como el de los conflictos agrarios de mayor trascen-

dencia; la justificación de la necesidad de la Secretaría de la Reforma Agraria, estaba cuestionada y por tanto en entredicho. No obstante, derivado de compromisos entre los campesinos y el Gobierno mexicano establecidos principalmente en el Acuerdo Nacional para el Campo y de que la Cámara de Diputados autorizó incrementos sustantivos a los recursos presupuestales de la SRA, direccionándolos al fortalecimiento y ampliación de programas productivos a cargo de ésta, como el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos (FAPPA) y Programa de la Mujer del Sector Agrario (Promusag), establecimiento de nuevos programas como los de Fondo de Tierras, Joven Emprendedor Rural y “Fomento y organización Agraria”; se han estabilizado y ampliado las tareas de la SRA y de las Instituciones del sector agrario.

Por ello, y en relación con lo señalado en el punto anterior, para eficientar la promoción del desarrollo en el sector agrario, en la presente iniciativa se consideró como aspecto fundamental el fortalecimiento institucional del sector agrario.

Al efecto, la iniciativa contiene, disposiciones que amplían las facultades y tareas de la Secretaría en lo relativo al desarrollo productivo y social del sector agrario, en materia de promoción de la organización y capacitación de los sujetos agrarios, fomento de la inversión, de la investigación científica agraria y del aprovechamiento conjunto de predios y parcelas. Asimismo con esta iniciativa se crea, a cargo de la SRA, el Servicio Nacional de Fe Pública Agraria. Por otra parte, se amplían también las facultades de la Procuraduría Agraria en la defensa de los derechos de los sujetos agrarios; del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) como conducto de la participación financiera del Estado en las actividades económicas del medio agrario, y del Registro Agrario Nacional.

IV. Medidas para ampliar y fortalecer la Organización Social en el sector agrario. Uno de los requerimientos básicos para el impulso al desarrollo rural referido en los puntos anteriores, es la organización social en el sector agrario, entendida como el proceso a través del cual los sujetos agrarios, individuales o colectivos, suman sus voluntades, esfuerzos y recursos, en la creación de empresas, unidades, sociedades o asociaciones, constituidas conforme a la ley, para la realización de objetivos productivos, de transformación, de servicios, de comercialización y en general de acceso al empleo, al ingreso y al bienestar de los socios. Es a través de este tipo de organización, como alternativa di-

ferente a los órganos internos del ejido o la comunidad, que se pretende fortalecer uno de los soportes fundamentales en que se basa el desarrollo social y productivo del sector rural.

La iniciativa busca contribuir a eliminar los viejos vicios en que han caído gran parte de las organizaciones de productores, como la perpetuación de las dirigencias, el manejo discrecional y en ocasiones arbitrario que éstas hacen de los bienes y derechos de la organización, la falta de información y transparencia hacia los socios, la falta de verdadera y democrática participación de todos los socios en las decisiones y actividades del grupo, la ausencia de reglas claras y la existencia de conflictos internos que obstaculizan la sana y adecuada evolución de las organizaciones.

Por ello, y en virtud de la escasa reglamentación que las figuras asociativas agrarias tienen en la ley actual, estamos introduciendo disposiciones en las que: se definen las organizaciones agrarias con personalidad jurídica; se establecen los principios organizativos con base en los cuales han de integrarse y funcionar, los requisitos de constitución, estructuras, normas internas o estatutos, derechos y obligaciones de los socios y formas superiores de integración de las figuras básicas en sociedades de segundo y de tercer nivel.

Especial mención merece la atención que, en este aspecto, estamos dando a una antigua e insistente demanda de las mujeres campesinas: dotar de personalidad jurídica propia a la “Unidad Agrícola Industrial de la Mujer campesina” (UAIM) la cual, si bien ya se encuentra prevista en la Ley Agraria vigente, se reduce a una parcela ejidal subordinada al ejido. Con la reforma, se crea una nueva figura asociativa agraria, de género, con personalidad jurídica y patrimonio propios, definiéndose sus requisitos de constitución, objeto social, alcances y posibilidad de integrarse en una sociedad rural de carácter regional y de segundo nivel, denominada “Unión de Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer”. A través de estas formas organizativas, las mujeres del ejido sin distinción, podrán asociarse para impulsar proyectos productivos, comerciales, sociales o comunitarios, propios de la mujer campesina.

V. Apoyo a la mujer y a la familia campesina. Además de lo señalado en la última parte del punto anterior, la iniciativa incluye medidas para ampliar y proteger los derechos de la mujer y de la familia campesina, en lo concerniente a los derechos patrimoniales y sucesorios fundamentalmente.

En materia de sucesiones y de derecho del tanto (en caso de venta de los derechos) se establece un orden de preferencia orientado a favorecer a la cónyuge, concubina y a la familia, y se incluye el derecho de los ejidatarios de formular una lista de sucesión por cada derecho agrario que detente, sin violentar la indivisibilidad de la parcela. Esto, a partir del reconocimiento de uno de los aspectos de la nueva realidad del campo, caracterizado por la tendencia hacia la feminización de la población y de las actividades agrícolas y productivas en general, al interior de los núcleos agrarios, como consecuencia de la emigración principalmente de los varones.

VI. Fortalecimiento de la vida orgánica y funcional de los núcleos agrarios. Una de las consecuencias que trajo consigo la reforma de 1992, entre otras causas por la escasa regulación, ha sido la confusión y dispersión, orgánica y funcional de la asamblea general como máximo órgano de autoridad, del comisariado ejidal como órgano de representación y del consejo de vigilancia como órgano de control, al interior de los núcleos agrarios.

Para contribuir a superar estas deficiencias, la iniciativa incluye y modifica preceptos que fortalecen y delimitan las funciones y facultades de la asamblea general y de los órganos de representación y vigilancia, clarificando el procedimiento del cambio de éstos, en caso de que llegado el plazo, el comisariado ejidal sea omiso en convocar a la correspondiente asamblea, otorgándose esa facultad al consejo de vigilancia, y en su caso a la Procuraduría Agraria, a solicitud del veinticinco por ciento de los ejidatarios, o de oficio. Asimismo se clarifican disposiciones tendientes, en general a dinamizar y fortalecer la vida interna del ejido y la comunidad para que tengan, en todo momento sus órganos de autoridad y representación integrados, vigentes y funcionando adecuadamente.

VII. Atención a la demanda de los pueblos y comunidades indígenas. En el año 2001 se realizó una trascendente reforma Constitucional en materia indígena, a través de la cual se atendieron, en lo fundamental, los reclamos planteados por los pueblos y comunidades indígenas. A partir de ésta, los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos; elegir a sus autoridades de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales; preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y elementos que constituyen su cultura e identidad; acceder plena-

mente a la jurisdicción del Estado considerando sus costumbres y especificidades culturales respetando la Constitución Federal y, en caso de juicio, ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Asimismo, desde 1990 México había suscrito el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, en el que se establece que, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras que ocupan o utilizan, que deberán reconocérseles los derechos de propiedad o posesión sobre las tierras que ocupan y el acceso para la realización de sus actividades tradicionales.

Por lo anterior y a efecto de continuar con la adecuación del orden jurídico agrario, actualizarlo y hacerlo concorde con las normas superiores, la presente iniciativa introduce disposiciones, reglamentando lo establecido en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 27 Constitucional, para la protección de los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas.

VIII. Eficientar la procuración de justicia agraria. La fracción XIX del artículo 27 Constitucional dispone la creación de un órgano para la procuración de la justicia agraria, la Procuraduría Agraria. Surge con la encomienda de procurar la justicia social agraria, asesorar y representar a los campesinos cuando sus derechos se vean vulnerados. Sin embargo, casi desde su origen la Procuraduría Agraria, aunque se ha ocupado de esta función, ha tenido que involucrarse en la realización de tareas que mas bien corresponden a la Secretaría de la Reforma Agraria, como son la regularización y certificación de la propiedad social, la capacitación agraria y la organización de los productores, lo que la ha distraído de su función fundamental de procuración de la justicia agraria, consecuencia de lo cual, el compromiso del Estado con los campesinos a este respecto, en mucho sigue siendo una deuda.

Por ello, en esta iniciativa regresamos a la idea original, estableciendo preceptos que replantean como función fundamental de la Procuraduría Agraria, la de procuración de la administración de la Justicia agraria, y por lo tanto las atribuciones de asesorar y en su caso representar legalmente a los sujetos agrarios no solo ante autoridades agrarias, administrativas y jurisdiccionales, sino también ante otras autoridades administrativas: laborales, civiles, medioambientales y de otras materias, y jurisdiccionales federales y del

fueo común, cuando se afecten bienes o derechos agrarios, inclusive ante el Ministerio Público en asuntos penales que deriven de los bienes o la calidad agraria de los sujetos; Asesorar y representar legalmente a los núcleos agrarios en la regularización de los excedentes de tierras que posean derivado de la ejecución inexacta de la resolución o sentencia correspondiente y asesorar a los ejidatarios y comuneros en la gestión o conciliación de intereses en los procesos de división y fusión de ejidos y comunidades.

IX. Adecuación del procedimiento judicial agrario seguido ante los tribunales, para eficientar la justicia social agraria. Uno de los reclamos campesinos mas recurrentes en relación con la justicia agraria ha sido el de que, los Tribunales Agrarios, ante la exigua reglamentación, oscuridad o lagunas de la ley vigente en el procedimiento jurisdiccional agrario, con mucha frecuencia tienen que recurrir, a veces arbitrariamente, a la supletoriedad del derecho social agrario por el derecho privado, es decir, del Código Federal de Procedimientos Civiles. La inconformidad con esta situación, la hicieron valer, a principios del año 2003, las principales organizaciones campesinas de carácter nacional y regional en las movilizaciones que realizaron y que culminaron con el “Acuerdo Nacional para el Campo”, documento en cuyo numeral 239 se estableció como compromiso del Estado Mexicano “la expedición de un código de procedimientos agrarios” a fin de preservar y mejorar las instituciones adjetivas del proceso social agrario y evitar distorsiones por la aplicación supletoria de leyes ajenas al derecho social.

Para atender la necesidad real, cumplimiento el compromiso con los campesinos, y sobre todo, con el propósito de profundizar en lo estipulado en la fracción XIX del artículo 27 constitucional en el sentido de que “...el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos”; estamos, en la presente iniciativa, creando un libro segundo, “De la Justicia agraria”, en el que se regula el procedimiento jurisdiccional agrario, conservando su naturaleza y sus principios sociales.

Las adecuaciones principales en materia procesal consisten fundamentalmente en: definición y precisión de las autoridades agrarias; obligatoriedad de los principios que rigen el proceso social agrario; concordancia con el derecho sustantivo en lo relativo a las medidas de protección a pueblos y comunidades indígenas; suplencia de la deficiencia en los

planteamientos de derecho de los sujetos agrarios; facultar a los tribunales agrarios a imponer correcciones y medidas de apremio; regulación de las causas por las que puede interrumpirse el juicio agrario justificadamente; ampliación de la competencia de los tribunales agrarios; medidas procesales de protección a ejidos y comunidades; requisitos de la demanda, su admisión, contestación y en su caso reconvencción; regulación del desarrollo de la audiencia; mayor regulación en lo relativo a las pruebas y a la sentencia; previsión de la figura de jurisdicción voluntaria, y de los medios alternativos de solución de conflictos fuera de la sede del tribunal, la conciliación y el arbitraje.

En este libro segundo, por razones de técnica legislativa, quedan integradas como parte adjetiva o procedimental de la Ley Agraria, las disposiciones que, en su forma y contenido, como tales, constituyen un verdadero “Código de Procedimientos Agrarios”, con lo cual estamos dando cumplimiento tanto al mandato Constitucional como al acuerdo del Estado con los campesinos.

En relación con la Ley Agraria vigente, la presente iniciativa crea: 2 libros, uno de la parte sustantiva y otro de la parte adjetiva; 4 títulos, 14 capítulos; 11 secciones y 135 artículos; con lo cual, como ya dijimos, se modifica la ley vigente en un 85 por ciento.

Por ello, aunque el presente proyecto no pretende dar una reorientación, redefinición o cambio de rumbo en los ejes fundamentales de la actual política agraria del Estado mexicano; se consideró más adecuado, abrogar la Ley Agraria vigente, rescatando los preceptos que quedaron intactos, incorporando los reformados y los que se adicionan y quitando los que se derogan; para integrar todo en un solo ordenamiento que se seguirá denominando Ley Agraria; por razones de técnica legislativa, con el claro propósito de darle a este cuerpo de normas, mayor congruencia y estructuración lógica y temática; así como para facilitar la interpretación y aplicación de las normas sustantivas y procesales que conforman el marco jurídico secundario agrario, que habrá de otorgar mayor certeza y seguridad jurídica en el campo mexicano.

Por lo antes expuesto, los abajo firmantes, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, LX Legislatura de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Agraria que reforma la del 26 de febrero de 1992

Artículo Único. Se expide la Ley Agraria que reforma la del 26 de febrero de 1992, en los siguientes términos:

Ley Agraria

**Libro Primero
Del Régimen Agrario**

**Título Primero
Disposiciones Preliminares**

Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia agraria y de observancia general en toda la República. **Su aplicación corresponde a la Secretaría de la Reforma Agraria y a las instituciones del sector coordinado por ella, conforme a sus respectivas competencias.**

Artículo 2o. En lo no previsto por esta ley, se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso, la mercantil, según la materia de que se trate.

Se aplicarán asimismo, en lo que no se oponga a la presente ley, los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas.

El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes aplicables.

Artículo 3o. El Ejecutivo federal, **a través de la Secretaría de la Reforma Agraria y de las demás instituciones del sector**, promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de **los estados, del Distrito Federal** y de los municipios, en el ámbito de sus correspondientes atribuciones, para la debida aplicación de esta ley.

**Título Segundo
Del Desarrollo y Fomento Agrario**

Artículo 4o. El Ejecutivo federal, **a través de la Secretaría de la Reforma Agraria y de otras dependencias y entidades del sector rural**, promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento

de las actividades de producción, transformación y comercialización de bienes y servicios, así como de acciones sociales, para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional.

Las organizaciones de productores podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo, las cuales serán concertadas con el Ejecutivo Federal para su aplicación.

Artículo 5o. La Secretaría de la Reforma Agraria y las demás dependencias y entidades de la administración pública federal competentes en el sector rural, deberán:

I. **Fomentar** el cuidado y la conservación de los recursos naturales, **así como promover** su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico;

II. **Propiciar** el mejoramiento de las condiciones de producción **en los núcleos agrarios, y**

III. **Promover** y, en su caso, **participar en la realización** de obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial, aptitud y **multifuncionalidad** de las tierras, en beneficio de los **sujetos agrarios.**

Artículo 6o. La Secretaría de la Reforma Agraria será la responsable de coordinar a las demás dependencias y entidades competentes de la administración pública federal, para promover las condiciones que permitan:

I. Canalizar recursos de inversión y **de crédito para** la capitalización del campo;

II. Fomentar **el aprovechamiento conjunto** de predios y parcelas en unidades productivas **económicas;**

III. **Fomentar la organización y asociación, con fines productivos, en los términos de los artículos 111 al 121 de esta ley** entre ejidatarios, comuneros, **poseionarios**, pequeños propietarios y cualquiera de éstos entre sí; **o con terceros, así como asesorar a sus miembros para incrementar su productividad en la transformación, comercialización y oferta de servicios;**

IV. **Fortalecer** la investigación científica y técnica **en materia agraria** y la transferencia de sus resultados entre todos los productores rurales;

V. Apoyar la capacitación **para las actividades organizativas, productivas y de servicios que fortalezcan el desarrollo agrario;**

VI. Llevar a cabo acciones que propicien el desarrollo agrario sustentable, social y regionalmente equilibrado, así como la interacción del sector rural con el sector urbano;

VII. Asesorar a los trabajadores rurales **sobre los distintos usos del suelo para su mejor aprovechamiento, y**

VIII. **Con el objeto de coadyuvar en el fomento de las actividades económicas en el medio rural, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal promoverá el desarrollo de las actividades productivas de ejidos y comunidades.**

Artículo 7o. Corresponderá a la Secretaría de la Reforma Agraria instituir y organizar el Servicio Nacional de la Fe Pública Agraria, a efecto de proporcionar a los sujetos agrarios, de manera accesible y segura, la certificación de los actos, hechos y documentos que constituyan, modifiquen o extingan derechos y obligaciones derivados de la aplicación de esta ley y sus reglamentos. Este servicio será gratuito, con excepción del pago de contribuciones de acuerdo con la legislación aplicable.

Será optativo para los sujetos agrarios acudir al Servicio Nacional de la Fe Pública Agraria, ante fedatarios públicos o ante servidores públicos habilitados para este efecto por disposición de la ley.

Artículo 8o. El Ejecutivo Federal promoverá y realizará acciones que protejan la vida en comunidad, propicien su libre desarrollo y mejoren sus posibilidades de atender y satisfacer las demandas de sus integrantes.

Artículo 9o. De conformidad con la Ley de Planeación, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria y demás dependencias y entidades competentes, con la participación de las organizaciones representativas de los productores y pobladores del campo, formulará programas de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo integral del campo. Estos programas fijarán los objetivos, metas, estimación de los recursos, propuesta de distribución geográfica, instituciones responsables y plazos de ejecución.

Título Tercero De los Ejidos y Comunidades

Capítulo I De los Ejidos

Sección Primera Disposiciones Generales

Artículo 10. Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título.

Artículo 11. Los ejidos **operarán** de acuerdo con su reglamento interno y sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley. **El reglamento interno de cada ejido será expedido por la asamblea y contendrá cuando menos:**

I. Las bases generales para la organización económica y social del ejido;

II. Las causas de suspensión temporal de ejidatarios;

III. Las causas de remoción de los integrantes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia;

IV. Las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común;

V. Las bases para la constitución de una junta de pobladores, como órgano de participación de la comunidad, cuando así lo determine el ejido, las bases para proceder a la fusión y división del ejido, cuando sea procedente;

VI. La asignación de las parcelas de destino específico y el nuevo señalamiento o dotación de estas parcelas en la superficie que hubiere sido utilizada en obras de beneficio común;

VII. Las estipulaciones que cada ejido considere pertinentes, y

VIII. Las demás disposiciones que conforme a esta Ley deban formar parte del mismo.

No serán válidas las disposiciones del reglamento que vayan en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de esta ley.

El reglamento interno que haya sido aprobado por la asamblea con las formalidades inherentes, será inscrito en el Registro Agrario Nacional y el comisariado ejidal será responsable de darlo a conocer entre los miembros del núcleo.

Artículo 12. La explotación colectiva de las tierras ejidales puede ser adoptada por un ejido cuando su asamblea así lo resuelva, en cuyo caso deberán establecerse previamente las disposiciones relativas a la forma de organizar el trabajo y la explotación de los recursos del ejido, así como los mecanismos para el reparto equitativo de los beneficios, la constitución de reservas de capital, de previsión social o de servicios y las que integren los fondos comunes.

Los ejidos colectivos ya constituidos como tales o que adopten la explotación colectiva podrán modificar o concluir el régimen colectivo mediante resolución de la asamblea, en los términos del artículo 25 de esta ley.

Sección Segunda

De los Ejidatarios, Posesionarios y Vecindados

Artículo 13. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales.

Artículo 14. Son posesionarios quienes sean reconocidos por la asamblea, por sucesión o por cesión y cumplan con los siguientes requisitos:

I. Ser mexicanos, hombre o mujer, mayores de edad, o menores con familia a su cargo;

II. Que hayan trabajado directamente tierras parceladas, durante dos años anteriores a su solicitud de reconocimiento;

III. Que no tenga simultáneamente la misma calidad en otro núcleo agrario, y

IV. Los que señale esta Ley.

En caso de que la asamblea se niegue a reconocer al poseedor la calidad de posesionario el interesado podrá acudir al tribunal agrario a deducir sus derechos.

Una vez otorgado el reconocimiento por la asamblea o en su caso, hayan sido beneficiados por sucesión o emitida la resolución judicial, el Registro Agrario Nacional expedirá el certificado correspondiente.

No se considerarán como posesionarios a las personas que hayan invadido tierras ejidales o comunales.

Los posesionarios tendrán los mismos derechos que los ejidatarios sobre sus tierras.

Artículo 15. Son vecindados del ejido, quienes sean reconocidos como tales por la asamblea, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

I. Ser mexicanos, hombre o mujer, mayores de edad, o menores con familia a su cargo;

II. Haber residido permanentemente, al menos por un año inmediato anterior a su solicitud de reconocimiento en el núcleo ejidal;

III. Que no tenga simultáneamente la misma calidad en otro núcleo agrario, y

IV. Los que señale esta Ley.

En caso de que la asamblea se niegue a reconocer la calidad de vecindado, o el comisariado ejidal omita presentar a la misma la solicitud correspondiente, dentro del plazo de sesenta días, el interesado podrá acudir ante el tribunal agrario competente a deducir sus derechos.

No se considerarán como vecindados a quienes se asienten en forma irregular o quienes hayan invadido terrenos ejidales o comunales.

Artículo 16. Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, y aquellos otros que legalmente les correspondan. Los ejidatarios tendrán, además, los derechos que el reglamento interno les otorgue sobre las demás tierras y bienes ejidales.

Artículo 17. Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere:

I. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario; y

II. Ser **avecindado o posesionario** del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un **sucesor de ejidatario, y**

III. Cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno, sin contravenir lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 18. La calidad de ejidatario se acredita con:

I. Con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente;

II. Con el certificado parcelario o de derechos comunes; o

III. Con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario;

IV. Constancia de vigencia de derechos expedida por el Registro Agrario Nacional, y

V. Acta de asamblea inscrita en el Registro Agrario Nacional en la que se reconozca la calidad al interesado.

Artículo 19. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela, **los de aguas, y en su caso, los de uso común** y los demás inherentes a la calidad de ejidatario, para lo cual bastará con que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación del derecho a su fallecimiento. **Los derechos sobre la parcela son indivisibles, por lo que su titular sólo podrá designar a una persona entre el cónyuge, la concubina o concubinario, uno de sus hijos, uno de sus ascendientes o, en su defecto, a cualquier otra persona.**

En el caso de que un ejidatario sea titular de dos o más derechos parcelarios, podrá formular una lista de sucesión por cada uno de ellos; determinándose claramente a cual sucesor hereda los derechos inherentes a su calidad de ejidatario.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público, **quien dará aviso a dicho órgano registral en la entidad que corresponda dentro de los 30 días naturales siguientes.** Con las mismas formalidades podrá ser modifi-

cada por el propio ejidatario, en cuyo caso, será válida la de fecha **más reciente.**

El sucesor designado como preferente que no se encuentre en posesión de la parcela, deberá reclamar su derecho en un plazo no mayor de cinco años siguientes al fallecimiento del titular. Después de dicho plazo prescribirá su derecho y podrá reclamarlo quien tenga legitimación para ello.

Artículo 20. Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de **sucesión** pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

I. Al cónyuge, **concubina o concubinario;**

II. A uno de los hijos del ejidatario;

III. A uno de sus ascendientes;

IV. A cualquier otra persona de las que dependen económicamente de él; y

V. Cualquier otra persona que trabaje y dependa del producto de la parcela al momento del fallecimiento del ejidatario.

En los casos a que se refieren las fracciones II, III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con el mismo derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir de forma unánime quién o quiénes gozarán de la titularidad de los derechos a que se refiere el artículo 57 de esta ley, y quién, de entre ellos, conservará los derechos inherentes a la calidad de ejidatario. En caso de que no se pusieran de acuerdo, los derechos correspondientes regresarán al ejido, teniendo éste, la obligación de darle un destino específico de uso social y de beneficio común.

Artículo 21. Cuando no existan sucesores **la asamblea determinará que los derechos se le adjudiquen al propio ejido para los fines sociales descritos en el artículo anterior.**

Artículo 22. La calidad de ejidatario se pierde:

I. Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes;

II. Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población;

III. Por prescripción negativa, en su caso, cuando otra persona adquiriera sus derechos en los términos del artículo 50 de esta ley.

IV. Por el abandono injustificado de la parcela por más de dos años;

V. Por la transmisión legal de sus derechos parcelarios y comunes, y

VI. Por renuncia expresa de sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población.

Sección Tercera De los Órganos del Ejido

Artículo 23. Son órganos de los ejidos:

I. La asamblea;

II. El comisariado ejidal; y

III. El consejo de vigilancia.

Artículo 24. El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios.

El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo.

Artículo 25. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:

I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido;

II. Aceptación de ejidatarios y **suspensión de sus derechos agrarios, hasta por dos años, salvo los que tengan sobre su parcela, el agua y el solar urbano;**

III. El reconocimiento y desconocimiento de posesionarios y vecindados;

IV. Recepción, discusión, modificación y aprobación, en su caso, de los informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, cuentas y balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos;

V. Elección y remoción de los miembros del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia;

VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido;

VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, **zona de urbanización y su reserva de crecimiento y desarrollo**, parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización;

VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho;

IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 76 de esta ley;

X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación;

XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos;

XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia;

XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal o viceversa;

XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva;

XV. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común;

XVI. Autorización para el cambio de destino sobre las parcelas con destino específico que se asignen a obras de utilidad y servicios públicos prestados por la federación, estados, Distrito Federal y municipios;

XVII. Allanamiento o desistimiento de un juicio agrario o de un juicio de amparo que afecte al interés colectivo;

XVIII. Aprobación de los convenios judiciales que impliquen la afectación de los derechos colectivos del núcleo sobre sus tierras, bosques y aguas, y

XIX. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.

Artículo 26. La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos el **veinticinco** por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea.

Artículo 27. La asamblea deberá celebrarse dentro del ejido o en el lugar habitual, salvo causa justificada. Para ello, deberá expedirse convocatoria con no menos de ocho días de anticipación ni más de quince, por medio de cédulas fijadas en los lugares más visibles del ejido. En la cédula se expresarán los asuntos a tratar y el lugar y fecha de la reunión. El comisariado ejidal será responsable de la permanencia de dichas cédulas en los lugares fijados para los efectos de su publicidad hasta el día de la celebración de la asamblea.

La convocatoria para tratar cualquiera de los asuntos señalados en las fracciones **VII** a la **XVIII** del artículo **25** de esta ley, deberá ser expedida por lo menos con un mes de anticipación a la fecha programada para la celebración de la asamblea.

Si el día señalado para la asamblea no se cumplieran las mayorías de asistencia requeridas para su validez, se expedirá de inmediato una segunda convocatoria. En este caso, la asamblea se celebrará en un plazo no menor a ocho ni mayor a treinta días contados a partir de la expedición de la segunda convocatoria.

Artículo 28. Para la instalación válida de la asamblea, cuando ésta se reúna por virtud de primera convocatoria, deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios, salvo que en ella se traten los asuntos señalados en las fracciones **VII** a **XVIII** del artículo **25** de esta ley, en cuyo caso deberán estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios.

Cuando se reúna por virtud de segunda convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente cualquiera que sea el número de ejidatarios que concurra, salvo **cuando** la asamblea **deba conocer** de los asuntos señalados en las fracciones **VII** a **XVIII** del artículo **25** de la presente Ley, **susuesto en el** que quedará instalada únicamente cuando se reúna la mitad más uno de los ejidatarios.

Cuando una asamblea debidamente instalada haya sido suspendida, sin haber tratado todos los asuntos incluidos en el orden del día, los acuerdos tomados tendrán plena validez, siempre y cuando se haya levantado un acta con la razón de las causas que motivaron la suspensión ratificando los acuerdos tomados, hasta antes de la suspensión.

Los puntos pendientes de ser desahogados, deberán ser incluidos en el orden del día de la asamblea inmediata posterior.

La asamblea legalmente constituida podrá declararse en sesión permanente cuando no sea posible tratar todos los asuntos para la cual fue convocada y sea necesario prolongarla, debiéndose acordar el día y hora en que se continuarán los trabajos.

Artículo 29. Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el Presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad.

Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones **VII** a la **XVIII** del artículo **25** de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea.

Artículo 30. En la asamblea que trate los asuntos detallados en las fracciones **VII** a la **XVIII** del artículo **25** de la presente ley, deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público. Al

efecto, quien expida la convocatoria deberá notificar a la Procuraduría Agraria sobre la celebración de la asamblea, con la misma anticipación requerida para la expedición de aquella y deberá proveer lo necesario para que asista el fedatario público. La Procuraduría verificará que la convocatoria que se haya expedido para tratar los asuntos a que se refiere este artículo, se haya hecho con la anticipación y formalidades que señala el artículo 25 de esta ley.

Serán nulas las asambleas que se reúnan en contravención de lo dispuesto por este artículo, **así como los acuerdos tomados por la asamblea sobre asuntos que no hayan sido incluidos en la convocatoria respectiva.**

La nulidad de los acuerdos tomados en asamblea, que afecten el interés colectivo, podrá ser demandada ante el tribunal agrario por el veinticinco por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal.

Cuando se trate de acuerdos que afecten intereses individuales, la nulidad sólo podrá ser demanda por el sujeto que tenga interés jurídico.

Artículo 31. Cuando la asamblea resuelva terminar el régimen ejidal, el acuerdo respectivo será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación en la localidad en que se ubique el ejido.

Previa liquidación de las obligaciones subsistentes del ejido, las tierras ejidales, con excepción de las que constituyan el área necesaria para el asentamiento humano, serán asignadas en pleno dominio a los ejidatarios de acuerdo a los derechos que les correspondan, excepto cuando se trate de bosques o selvas tropicales.

Tratándose de las tierras a que se refieren los artículos 71 a 73 de esta ley, cuando se pretenda dar por terminado el régimen ejidal, la asamblea podrá otorgarlas en dominio pleno, en forma onerosa o gratuita, preferentemente en beneficio de las instituciones u organizaciones públicas o privadas a cuya disposición se encuentren destinadas, o bien aportarlas en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 65 de esta ley.

La superficie de tierra asignada a cada ejidatario no podrá rebasar los límites señalados a la pequeña propiedad. Si después de la asignación hubiere excedentes de tierra o se tratara de bosques o selvas tropicales, pasarán a propiedad de la nación.

Artículo 32. Para la asistencia válida de un mandatario a una asamblea, bastará una carta poder debidamente suscrita **por el titular** ante dos testigos que sean ejidatarios **del mismo núcleo, o ante fedatario público.** El ejidatario mandante **que** no pueda firmar, imprimirá su huella digital en la carta y solicitará a un tercero que firme la misma y asiente el nombre de ambos. **El mandatario sólo podrá representar a un ejidatario en la asamblea para la cual se le confirió el poder.**

En el caso de asambleas que se reúnan para tratar los asuntos señalados en las fracciones **V y de la VII a la XVIII** del artículo **25** de esta ley, el ejidatario no podrá designar mandatario.

Artículo 33. De toda asamblea se levantará el acta correspondiente, **misma que después de leída ante la asamblea,** será firmada **en la fecha de su realización** por los miembros del, comisariado ejidal y del consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo de donde esté escrito su nombre.

Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos establecidos en las fracciones **VII a la XVIII** del artículo **25** de esta ley, el acta deberá ser pasada ante la fe del fedatario público y firmada por el representante de la Procuraduría Agraria que asista a la misma e inscrita en el Registro Agrario Nacional.

Artículo 34. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.

El comisariado ejidal podrá contar con las comisiones y los secretarios auxiliares que se señalen en el reglamento interno, en el que se establecerán sus facultades y obligaciones. Si el reglamento nada previene sobre el particular, los integrantes del comisariado ejidal funcionarán colegiadamente, salvo cuando esta ley o su reglamento establezca lo contrario.

Artículo 35. Son facultades y obligaciones del comisariado:

I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas;

II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios;

III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas;

IV. Dar aviso a la asamblea de las notificaciones a que se refiere el artículo 81, y

V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.

Artículo 36. Cuando se afecte el interés colectivo del ejido y el comisariado sea omiso en ejercitar su defensa, conforme a las atribuciones señaladas en el artículo anterior, el veinticinco por ciento de los ejidatarios podrán ejercer la representación substituta del núcleo.

Artículo 37. Los miembros del comisariado ejidal que se encuentren en funciones estarán incapacitados para adquirir tierras u otros derechos ejidales, **con excepción de los que adquieran por sucesión.**

Los servidores públicos agrarios que durante el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas adquieran por si o por interpósita persona, tierras u otros derechos ejidales, serán sancionados en los términos de las disposiciones aplicables y dicha adquisición que se hiciera en contravención de la ley, será nula de pleno derecho. Quedan exceptuadas las tierras que el servidor público adquiera por sucesión o que deriven de su previa calidad de ejidatario, posesionario o avcindado.

Artículo 38. El consejo de vigilancia estará constituido por un Presidente y dos Secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno; si éste nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.

Artículo 39. Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia:

I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea;

II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades

Artículo 40. Los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia, así como sus suplentes, serán electos en asamblea. El voto será secreto y el escrutinio público e inmediato. En caso de que la votación se empate, se repetirá ésta y si volviere a empatarse se asignarán los puestos por sorteo entre los individuos que hubiesen obtenido el mismo número de votos.

En la celebración de las asambleas a que se refiere este artículo deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria quien firmará el acta correspondiente, la que deberá ser inscrita en el Registro Agrario Nacional.

La nulidad de la asamblea en que se haya elegido a los órganos de representación, sólo podrá ser demandada ante los tribunales agrarios por un mínimo del veinticinco por ciento de los ejidatarios del núcleo.

Artículo 41. Para ser miembro del comisariado o del consejo de vigilancia se requiere ser ejidatario del núcleo de población de que se trate, **con una antigüedad mínima de dos años como ejidatario**, haber trabajado en el ejido durante los últimos seis meses, estar en pleno goce de sus derechos y no haber sido sentenciado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad. Asimismo, deberá trabajar en el ejido mientras dure su encargo.

Artículo 42. Los integrantes **del comisariado y del consejo** de vigilancia durarán en sus funciones tres años **improrrogables.**

Los titulares del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, no podrán ser electos para ningún cargo dentro del ejido, sino hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquél en que estuvieron en ejercicio. Los suplentes podrán ser electos como titulares para el periodo inmediato, salvo el caso de que hayan entrado en funciones.

La ausencia hasta por seis meses de los miembros titulares del comisariado ejidal o del consejo de vigilancia, será cubierta de manera automática por sus respectivos

suplentes. Si la ausencia es de ambos, la asamblea elegirá a quienes deban cubrir tales ausencias.

Cuando se trate de la ausencia definitiva de un miembro titular, el suplente concluirá la gestión del miembro ausente. Si la ausencia definitiva es de ambos la asamblea elegirá a quienes deban concluir la gestión. Es ausencia definitiva la que exceda de seis meses.

Si al término del periodo para el que fueron electos el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, no se han celebrado elecciones, sus miembros titulares serán automáticamente sustituidos por los suplentes. El consejo de vigilancia deberá convocar a elecciones en un plazo no mayor de sesenta días contado a partir de la fecha en que concluyan las funciones de los miembros titulares.

Todo cambio en la integración del comisariado ejidal o en la del consejo de vigilancia, deberá ser comunicado por escrito al Registro Agrario Nacional y éste realizará las inscripciones correspondientes en un término no mayor de quince días naturales a fin de que los cambios surtan efectos frente a terceros.

Artículo 43. La remoción de los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia será acordada por la asamblea en votación secreta, respetándoles las garantías de audiencia y legalidad.

Para la emisión de la convocatoria correspondiente se seguirán las reglas previstas en el artículo 26 de esta ley, expresando las causas que motiven su petición.

La solicitud a que se refiere el párrafo anterior, se formulará por lo menos, por el veinticinco por ciento de los ejidatarios del núcleo.

La nulidad de la asamblea en que se haya removido a uno o varios integrantes de los órganos del ejido, sólo podrá ser demandada por los afectados ante los tribunales agrarios.

Capítulo II De las Tierras Ejidales

Sección Primera Disposiciones Generales

Artículo 44. Son tierras ejidales y por tanto están sujetas a las disposiciones relativas de esta ley las que han sido do-

tadas al núcleo de población ejidal o incorporadas al régimen ejidal.

Artículo 45. Para efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, se dividen en:

I. Tierras para el asentamiento humano y parcelas con destino específico;

II. Tierras de uso común; y

III. Tierras parceladas.

Artículo 46. Las tierras ejidales, de uso común y parceladas, podrán ser objeto de cualquier contrato agrario celebrado por el núcleo de población ejidal, por los ejidatarios o poseionarios correspondientes.

Son contratos agrarios los que involucren derechos o bienes de naturaleza agraria, y podrán ser verbales o escritos. En ambos casos, deberán ser formulados cuando menos ante dos testigos. Los que sean escritos podrán ser otorgados o ratificados ante fedatario público.

Serán siempre escritos, los que impliquen la transmisión o enajenación de derechos ejidales; los que involucren un proyecto de desarrollo o inversión productiva; o los que tengan una vigencia mayor de cinco años. En estos casos además, deberán ser inscritos en el Registro Agrario Nacional. Los contratos que se celebren en contravención de estas disposiciones, serán nulos.

Los contratos escritos deberán contener, cuando menos:

I. Nombre de los contratantes;

II. Naturaleza y objeto del contrato;

III. Derechos y obligaciones de cada una de las partes; y en su caso, las garantías para su cumplimiento;

IV. Plazos para el cumplimiento de las obligaciones contraídas;

V. Revisión periódica de las contraprestaciones pactadas, y en su caso, del porcentaje de la participación de utilidades, en los casos en que proceda por la naturaleza del contrato;

VI. Vigencia;

VII. Causas de terminación o de rescisión; así como las penas convencionales para el caso de incumplimiento parcial o total; y

VIII. Las demás que convengan las partes, siempre y cuando no sean contrarias a los principios del derecho social agrario.

Serán nulas de pleno derecho, las cláusulas que contravengan las modalidades y limitaciones establecidas en esta ley a las diferentes formas de propiedad; así mismo serán nulos los contratos que impliquen actividades que dañen el equilibrio ecológico, o que no se ajusten a las normas de planeación del desarrollo urbano, de acuerdo a la legislación de la materia.

Los contratos que involucren el aprovechamiento de tierras ejidales o comunales por terceros, tendrán una duración acorde al proyecto productivo. **Su duración no podrá ser mayor a treinta años, prorrogables. La contraprestación que se convenga a favor del núcleo agrario será revisable cada año. Será causa de rescisión de estos contratos, que los ejidatarios o comuneros no reciban la contraprestación pactada.**

Todos los contratos que impliquen el aprovechamiento de tierras de uso común por terceros, deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional.

Los contratos escritos cuya inscripción no sea obligatoria en términos de esta ley, también podrán ser inscritos en el Registro Agrario Nacional, a conveniencia de las partes.

La Procuraduría Agraria deberá autorizar la celebración de estos contratos para proteger los derechos de los sujetos agrarios.

Artículo 47. La permuta de derechos parcelarios, entre sus titulares, no requerirá la autorización de la asamblea y no estará sujeta al derecho de preferencia.

Cuando se permuten parcelas de distinto valor o calidad, los contratantes podrán pactar un pago adicional en moneda o en especie.

El contrato de permuta deberá ser ratificado ante fedatario público e inscrito en el Registro Agrario Nacional,

el que expedirá los nuevos certificados parcelarios. Con base en estos certificados, el comisariado ejidal realizará la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

La permuta de parcelas a que se refiere este artículo, no implica el cambio de calidad agraria de los permutantes.

Artículo 48. El núcleo de población ejidal, por resolución de la asamblea, y los ejidatarios o posesionarios en lo individual podrán otorgar en garantía el usufructo de las tierras de uso común y de las tierras parceladas, respectivamente. Esta garantía sólo podrán otorgarla en favor de instituciones de crédito o de aquellas personas con las que tengan relaciones de asociación o de carácter comercial y, **asimismo, deberá ser constituida ante fedatario público, revisada previamente por la Procuraduría Agraria y ser inscrita en el Registro Agrario Nacional.**

En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, el acreedor, por resolución del tribunal agrario o mediante el mecanismo pactado por los contratantes para tales efectos, podrá hacerla efectiva hasta por el plazo pactado, a cuyo vencimiento volverá el usufructo al núcleo de población ejidal o al ejidatario, según sea el caso.

Artículo 49. Dentro de un mismo ejido, ningún ejidatario podrá ser titular de derechos parcelarios sobre una extensión mayor que la equivalente al cinco por ciento de las tierras ejidales, ni de más superficie que la equivalente a la pequeña propiedad. Para efectos de cómputo, las tierras ejidales y las de dominio pleno serán acumulables.

La Secretaría de la Reforma Agraria, previa audiencia, ordenará al ejidatario de que se trate, la enajenación de los excedentes dentro de un plazo de un año contado a partir de la notificación correspondiente. Si el ejidatario no hubiere enajenado en el plazo indicado, la Secretaría fraccionará, en su caso, los excedentes y enajenará los derechos correspondientes al mejor postor entre los miembros del núcleo de población, respetando en todo caso los derechos de preferencia señalados en el artículo 81 de esta ley.

Artículo 50. Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un período de cinco años si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela.

El poseedor podrá acudir ante el tribunal agrario para que, previa audiencia de los interesados, del comisariado ejidal y de los colindantes, en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resolución sobre la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicará al Registro Agrario Nacional, para que éste expida de inmediato el certificado correspondiente.

La demanda presentada por cualquier interesado ante el tribunal agrario o la denuncia ante el Ministerio Público por despojo, interrumpirá el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo hasta que se dicte resolución definitiva.

Artículo 51. Los núcleos de población ejidales o comunales y los titulares de derechos agrarios que hayan sido o sean privados ilegalmente de sus tierras o aguas, **que les fueron materialmente entregadas en la ejecución de una resolución presidencial o sentencia de los tribunales agrarios**, podrán acudir ante el tribunal agrario para **demandar** la restitución de sus bienes.

Artículo 52. El núcleo de población, y los ejidatarios **en lo individual** podrán constituir, **por sí o en forma conjunta con los gobiernos Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal**, fondos de garantía para hacer frente a las obligaciones crediticias que contraigan. **Estos fondos** se crearán y organizarán de conformidad con los **montos y lineamientos** que dicte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **cuando intervengan instituciones públicas o se aporten recursos públicos federales.**

Sección Segunda De las Aguas del Ejido

Artículo 53. El uso o aprovechamiento de las aguas ejidales o comunales corresponde a los propios ejidos y **comunidades**, a los ejidatarios, **comuneros y posesionarios**, según se trate de tierras **de uso común** o parceladas.

Artículo 54. La distribución, servidumbres de uso y de paso, mantenimiento, contribuciones, tarifas, transmisiones de derechos y demás aspectos relativos al uso de volúmenes de agua de los ejidos estarán regidas por lo dispuesto en las leyes y normatividad de la materia.

Artículo 55. Los núcleos de población ejidal beneficiados con aguas correspondientes a distritos de riego u otros sis-

temas de abastecimiento están obligados a cubrir las tarifas aplicables.

Artículo 56. Los aguajes comprendidos dentro de las tierras ejidales, siempre que no hayan sido legalmente asignados individualmente, serán de uso común y su aprovechamiento se hará conforme lo disponga el reglamento interno del ejido o, en su defecto, de acuerdo con la costumbre de cada ejido, siempre y cuando no se contravena la ley y normatividad de la materia.

En los casos de transferencia de derechos individuales de agua, deberá otorgarse previo acuerdo de la asamblea y respetando el derecho del tanto, de conformidad con el orden de prelación dispuesto por el artículo 81 de esta ley.

Sección Tercera De la delimitación y destino de las tierras Ejidales

Artículo 57. La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos **26 a 30 y 33** de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios o **posesionarios**. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue:

I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del ejido;

II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos; y

III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo, **lo cual deberá explicarse en el acta correspondiente.**

En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido y proveerá a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El Registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los certificados parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional.

Artículo 58. Para proceder a la asignación de derechos sobre las tierras a que se refieren la fracción **II** del artículo anterior, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia:

I. Ejidatarios;

II. Posesionarios y avecindados **reconocidos legalmente**, cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate;

III. Hijos de ejidatarios, **posesionarios** y avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más, y

IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea.

Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia asamblea, a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal.

Artículo 59. La asignación de parcelas por la asamblea, se hará siempre con base en la superficie identificada en el plano general del ejido y, cuando hubiere sujetos con derechos iguales conforme al orden de prelación establecido en el artículo anterior, la hará por sorteo. A la asamblea en que se lleve a cabo el sorteo deberá asistir un fedatario o un representante de la Procuraduría Agraria que certifique el acta correspondiente.

Artículo 60. Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques, selvas tropicales y **en tierras en las que sea evidente la existencia de yacimientos de recursos no renovables, que puedan ser aprovechados en beneficio directo de los núcleos de población ejidales o comunales.**

Si con posterioridad a la asignación de parcelas se descubre en éstas un yacimiento de recursos no renovables, de los que trata el párrafo anterior, regresarán al núcleo agrario y el ejidatario tendrá derecho a una contraprestación que se fijará de común acuerdo entre éste y la asamblea. De no existir acuerdo entre las partes, el tribunal agrario fijará el monto de la contraprestación mencionada.

Será igualmente nula, la asignación de parcelas sobre superficies con asentamientos humanos irregulares, y en superficies destinadas a parcelas con destino específico.

Artículo 61. La cesión de los derechos sobre tierras de uso común por un ejidatario, a menos que también haya cedido sus derechos parcelarios, no implica que éste pierda su calidad como tal, sino sólo sus derechos al aprovechamiento o beneficio proporcional sobre las tierras correspondientes.

Artículo 62. La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente por el **veinticinco** por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio por la **Procuraduría Agraria**, cuando a juicio de ésta se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves que puedan perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal **agrario** dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses.

Cualquier perjudicado en sus derechos por virtud de la asignación de tierras, **podrá** acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir su **derecho**, sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras.

Será firme y definitiva la asignación de tierras que no haya sido impugnada dentro de los noventa días naturales posteriores a la resolución de la asamblea.

Artículo 63. A partir de la asignación de parcelas, corresponderán a los ejidatarios y **posesionarios** beneficiados, los derechos sobre uso y usufructo de las mismas, en los términos de esta ley.

Cuando la asignación se hubiere hecho a un grupo de ejidatarios o **posesionarios**, se presumirá, salvo prueba en contrario, que gozan de dichos derechos en partes iguales y serán ejercidos conforme a lo convenido entre ellos o, en su defecto, a lo que disponga el Reglamento Interno o la re-

solución de la asamblea y, supletoriamente, conforme a las reglas de copropiedad que dispone el Código Civil Federal.

Sección Cuarta De las Tierras del Asentamiento Humano

Artículo 64. Las tierras destinadas al asentamiento humano integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido que está compuesta por los terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su **reserva de crecimiento y desarrollo.**

Artículo 65. Las tierras ejidales destinadas por la asamblea al asentamiento humano conforman el área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo lo previsto en el último párrafo de este artículo. Cualquier acto que tenga por objeto enajenar, prescribir o embargar dichas tierras será nulo de pleno derecho.

Se dará la misma protección a las parcelas con destino específico: parcela escolar, unidad agrícola industrial de la mujer, unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud; y a las demás áreas reservadas para el asentamiento.

Las autoridades federales, estatales, **del Distrito Federal** y municipales, y en especial, la Procuraduría Agraria, vigilarán que quede protegida **la zona de urbanización y su reserva de crecimiento y desarrollo.**

A los solares de la zona de urbanización del ejido no les es aplicable lo dispuesto en este artículo.

El núcleo de población podrá aportar tierras del asentamiento que no hayan sido asignadas, tierras con destino específico o parte de ellas, con la aprobación de cuando menos el voto de las dos terceras partes de los ejidatarios presentes en la asamblea respectiva, a las dependencias o entidades de la Federación, estados, Distrito Federal o municipios, para dedicarlas a obras públicas de beneficio común, con la intervención de la Procuraduría Agraria, la cual se cerciorará de que efectivamente dichas tierras sean destinadas a tal fin. Éstas pasarán al dominio pleno de las dependencias o entidades referidas.

Artículo 66. Cuando el poblado ejidal esté asentado en tierras ejidales, la asamblea podrá resolver que se delimite la zona de urbanización en la forma que resulte más conveniente, respetando la normatividad aplicable y los derechos parcelarios. Igualmente, la asamblea podrá resolver que se

delimite la reserva de crecimiento del poblado, conforme a las leyes de la materia.

Artículo 67. Para la localización, deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización y su reserva de crecimiento **y desarrollo**, se requerirá la intervención de las autoridades **federales, estatales, del Distrito Federal** y municipales correspondientes, **en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de dar cumplimiento a los ordenamientos legales de desarrollo urbano, así como a los planes y programas vigentes en la materia.**

En el caso de asentamientos humanos irregulares, ubicados en tierras ejidales, el núcleo podrá, por sí o a petición de la parte interesada, incorporarlas a la zona de urbanización y adjudicarlas en propiedad a sus pobladores o solicitar a la dependencia encargada de la regularización de la tenencia de la tierra su intervención para que obtenga la regularización de dichos asentamientos.

Artículo 68. Cuando la asamblea constituya la zona de urbanización y su reserva de crecimiento **y desarrollo**, separará las superficies **de donación** necesarias para los servicios públicos de la comunidad, **las que quedarán desincorporadas del régimen ejidal al momento de ser entregadas para ese fin a las dependencias o entidades de los diferentes niveles de gobierno.**

En caso de que la superficie donada no sea utilizada para el servicio público previsto, el núcleo podrá demandar la reversión ante los tribunales agrarios.

Artículo 69. Los solares serán de propiedad plena de sus titulares. Todo ejidatario tendrá derecho a recibir gratuitamente un solar al constituirse, cuando ello sea posible, la zona de urbanización. La extensión del solar se determinará por la asamblea, con la participación del municipio correspondiente, de conformidad con las leyes aplicables en materia de fraccionamientos y atendiendo a las características, usos y costumbres de cada región.

La asamblea hará la asignación de solares a los ejidatarios, determinando en forma equitativa la superficie que corresponda a cada uno de ellos. Esta asignación se hará en presencia de un representante de la Procuraduría Agraria y de acuerdo con los solares que resulten del plano aprobado por la misma asamblea e inscrito en el Registro Agrario Nacional. El acta respectiva se inscribirá en dicho Registro y los certificados que éste expida de cada solar constituirán los títulos oficiales correspondientes.

Una vez satisfechas las necesidades de los ejidatarios, los solares excedentes podrán ser arrendados o enajenados por el núcleo de población ejidal a personas que deseen vecindarse.

Cuando se trate de ejidos en los que ya esté constituida la zona de urbanización y los solares ya hubieren sido asignados, los títulos se expedirán en favor de sus legítimos poseedores.

Artículo 70. La propiedad de los solares se acreditará con el documento señalado en el artículo anterior y los actos jurídicos subsecuentes serán regulados por el derecho común. Para estos efectos los títulos se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad de la entidad correspondiente.

Artículo 71. En cada ejido la asamblea podrá resolver sobre el deslinde de las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la investigación, enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido. El reglamento interno del ejido normará el uso de la parcela escolar.

Artículo 72. La asamblea podrá reservar igualmente una superficie en la extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, que será destinada al establecimiento de una granja agropecuaria o de industrias rurales aprovechadas por las mujeres mayores de dieciséis años del núcleo de población. En esta unidad se podrán integrar instalaciones destinadas específicamente al servicio y protección de la mujer campesina.

Artículo 73. En cada ejido y comunidad podrá destinarse una parcela para constituir la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud, en donde se realizarán actividades productivas, culturales, recreativas y de capacitación para el trabajo, para los hijos de ejidatarios, comuneros y vecindados mayores de dieciséis y menores de veinticuatro años. Esta unidad será administrada por un comité cuyos miembros serán designados exclusivamente por los integrantes de la misma. Los costos de operación de la unidad serán cubiertos por sus miembros.

Sección Quinta De las Tierras de Uso Común

Artículo 74. Las tierras ejidales de uso común constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas.

Artículo 75. La propiedad de las tierras de uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo los casos previstos en el artículo 76 de esta ley.

El reglamento interno regulará el uso, aprovechamiento, acceso y conservación de las tierras de uso común del ejido, incluyendo los derechos y obligaciones de ejidatarios y vecindados respecto de dichas tierras.

Los derechos sobre las tierras de uso común se acreditan con el certificado a que se refiere el artículo 57 de esta ley.

Artículo 76. En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios conforme al siguiente procedimiento:

I. La aportación de las tierras deberá ser resuelta por la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 26 a 30 y 33 de esta ley;

II. El proyecto de desarrollo y de escritura social respectivos serán sometidos a la opinión de la Procuraduría Agraria, la que habrá de analizar y pronunciarse sobre la certeza de la realización de la inversión proyectada, el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales y la equidad en los términos y condiciones que se propongan. Esta opinión deberá ser emitida en un término no mayor a treinta días hábiles para ser considerada por la asamblea al adoptar la resolución correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que, para los efectos de esta fracción, el ejido pueda recurrir a los servicios profesionales que considere pertinentes.

III. En la asamblea que resuelva la aportación de las tierras a la sociedad, se determinará si las acciones o partes sociales de la sociedad corresponden al núcleo de población ejidal o a los ejidatarios individualmente con-

siderados, de acuerdo con la proporción que les corresponda según sus derechos sobre las tierras aportadas.

IV. El valor de suscripción de las acciones o partes sociales que correspondan al ejido o a los ejidatarios por la aportación de sus tierras, deberá ser cuando menos igual al precio de referencia que establezca la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito.

V. Cuando participen socios ajenos al ejido, éste o los ejidatarios, en su caso, tendrán el derecho irrenunciable de designar un comisario que informe directamente a la asamblea del ejido, con las funciones que sobre la vigilancia de las sociedades prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el ejido o los ejidatarios no designaren comisario, la Procuraduría Agraria, bajo su responsabilidad, deberá hacerlo.

Las sociedades que conforme a este artículo se constituyan deberán ajustarse a las disposiciones previstas en el Título Sexto de la presente ley.

En caso de liquidación de la sociedad, el núcleo de población ejidal y los ejidatarios, de acuerdo a su participación en el capital social, y bajo la estricta vigilancia de la Procuraduría Agraria, tendrán preferencia, respecto de los demás socios, para recibir tierra en pago de lo que les corresponda en el haber social.

En todo caso el ejido o los ejidatarios, según corresponda, tendrá derecho de preferencia para la adquisición de aquellas tierras que aportaron al patrimonio de la sociedad.

Sección Sexta De las Tierras Parceladas

Artículo 77. Corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas.

Artículo 78. En ningún caso la asamblea ni el comisariado ejidal podrán usar, disponer o determinar la explotación colectiva de las tierras parceladas del ejido sin el previo consentimiento por escrito de sus titulares.

Artículo 79. Los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditarán con sus correspondientes certificados de derechos agrarios o certificados parcelarios, los cuales ostentarán los datos básicos de identificación de la parcela.

Los certificados parcelarios serán expedidos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de esta ley.

En su caso, la resolución correspondiente del tribunal agrario hará las veces de certificado para los efectos de esta ley.

Artículo 80. El ejidatario o posesionario puede aprovechar su parcela directamente o conceder su uso o usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad.

Los derechos parcelarios podrán también ser aportados para la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles, en cuyo caso se deberá informar a la asamblea por conducto del comisariado ejidal. Estos actos deberán ser inscritos en el Registro Agrario Nacional, siendo aplicable en lo conducente lo previsto en la fracción IV del artículo 76 de la presente ley.

Artículo 81. Los ejidatarios o poseionarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios, poseionarios o vecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

- a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público;
- b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y a los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento **precluirá** tal derecho. **Surtirá los mismos efectos** la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional; y
- c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.

Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

Artículo 82. Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios

en los términos del artículo 57, la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto por los artículos 26 a 30 y 33 de esta ley, podrá resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por esta ley.

Artículo 83. Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho Registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad.

A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común.

Artículo 84. La adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales no implica cambio alguno en la naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales, ni significa que se altere el régimen legal, estatutario o de organización del ejido.

La enajenación a terceros no ejidatarios tampoco implica que el enajenante pierda su calidad de ejidatario, a menos que no conserve derechos sobre otra parcela ejidal o sobre tierras de uso común, en cuyo caso el comisariado ejidal deberá notificar la separación del ejidatario al Registro Agrario Nacional, el cual efectuará las cancelaciones correspondientes.

Artículo 85. En caso de que se presente ejercicio simultáneo del derecho del tanto con posturas iguales, el comisariado ejidal, ante la presencia de fedatario público, realizará un sorteo para determinar a quién corresponde la preferencia.

Artículo 86. La primera enajenación a personas ajenas al núcleo de población de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, será libre de impuestos o derechos federales para el enajenante y deberá hacerse cuando menos al precio de referencia que establezca el **Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales** o cualquier institución de crédito.

Sección Séptima

De las Tierras Ejidales en Zonas Urbanas

Artículo 87. Cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras. En todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos humanos.

Artículo 88. Queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se ubiquen en **zonas de alto riesgo para la población; de uso ceremonial por los pueblos y comunidades indígenas, con vestigios arqueológicos, culturales o históricos, lo mismo que** en áreas naturales protegidas, incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros de población.

Artículo 89. En toda enajenación de terrenos ejidales ubicados en las áreas declaradas reservadas para el crecimiento de un centro de población, de conformidad con los planes de desarrollo urbano municipal, en favor de personas ajenas al ejido, se deberá respetar el derecho de preferencia de los gobiernos de los estados y municipios establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos.

Sección Octava

De las Tierras Ejidales y Comunes Pertencientes a Pueblos y Comunidades Indígenas

Artículo 90. Las tierras **ejidales y comunales** que corresponden a los **pueblos y comunidades indígenas** deberán ser protegidas por las autoridades, en los términos de los artículos 20 y 27, fracción VII, párrafo segundo, **de la Constitución Federal.**

Se reconocen como pueblos indígenas a las poblaciones que descienden de aquellas que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Se entiende como comunidades de un pueblo indígena a aquellas que forman una unidad socioeconómica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos, usos y costumbres.

Para los efectos de este artículo, se entiende como tierras de los pueblos y comunidades indígenas, ejidales o

comunales, las que han sido dotadas, reconocidas, restituidas o incorporadas a su propiedad en el régimen ejidal o comunal.

La identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones de este artículo.

Son propiedad de los ejidos y comunidades a que se refiere este numeral, los recursos naturales que se encuentren en dichas tierras, salvo aquellos que corresponden al dominio directo de la Nación.

El aprovechamiento de dichos recursos, sólo podrá hacerse por los ejidos o comunidades o sus integrantes. Cuando exista una manifiesta utilidad para el núcleo, podrá realizarse por terceros, previo consentimiento que para ello sea otorgado mediante asamblea.

Artículo 91. Los ejidos y comunidades que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas podrán acudir a los tribunales agrarios para solicitar que:

I. Se restrinjan las actividades de terceras personas en sus tierras, cuando se contrapongan con sus valores culturales y de identidad, y

II. Se permita el acceso a los lugares sagrados o centros ceremoniales de los pueblos o comunidades, que hayan sido previamente declarados como tales por autoridad competente y que se encuentren fuera de su ejido o comunidad.

Capítulo III De la Constitución de Nuevos Ejidos

Artículo 92. Para la constitución de un ejido bastará:

I. Que un grupo de veinte o más individuos participen en su constitución;

II. Que cada individuo aporte una superficie de tierra;

III. Que el núcleo cuente con un proyecto de reglamento interno que se ajuste a lo dispuesto en esta ley; y

IV. Que tanto la aportación como el reglamento interno consten en escritura pública y se solicite su inscripción en el Registro Agrario Nacional.

Será nula la aportación de tierras en fraude de acreedores.

Artículo 93. Podrán constituirse nuevos ejidos cuando, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo anterior, exista:

I. La determinación de un grupo de ejidatarios que haya obtenido de su ejido la división con su asignación de tierras correspondiente, tanto las individuales como las de explotación colectiva, designación de sus autoridades ejidales y elaboración de su reglamento correspondiente, cumpliendo los requisitos legales respectivos, y

II. Que varios ejidos colindantes determinen fusionarse en uno solo para lo cual aporten sus tierras, bosques y aguas, elijan a sus nuevas autoridades y elaboren su reglamento correspondiente, en términos de la presente ley.

Artículo 94. A partir de la inscripción a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, el nuevo ejido quedará legalmente constituido y las tierras aportadas se registrarán por lo dispuesto por esta ley para las tierras ejidales.

Artículo 95. El ejido podrá convertir las tierras que hubiere adquirido bajo el régimen de dominio pleno al régimen ejidal, en cuyo caso el comisariado ejidal tramitará las inscripciones correspondientes en el Registro Agrario Nacional, a partir de lo cual dicha tierra quedará sujeta a lo dispuesto por esta ley para las tierras ejidales.

Capítulo IV De la Expropiación de Bienes Ejidales y Comunales

Artículo 96. Los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna o algunas de las siguientes causas de utilidad pública:

I. El establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función públicos;

II. La realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano como la vivienda y la industria;

III. La realización de acciones para promover y ordenar el desarrollo y la conservación de los recursos agropecuarios, forestales y pesqueros;

IV. Explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación de otros elementos naturales pertenecientes a la Nación y la instalación de plantas de beneficio asociadas a dichas explotaciones;

V. Regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural;

VI. Creación, fomento y conservación de unidades de producción de bienes o servicios de indudable beneficio para la comunidad;

VII. La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, así como aquellas sujetas a la Ley de Vías Generales de Comunicación y líneas de conducción de energía, obras hidráulicas, sus pasos de acceso y demás obras relacionadas; y

VIII. Las demás previstas en la Ley de Expropiación y otras leyes.

Artículo 97. La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Deberá hacerse por decreto presidencial que **justifique** la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización; el monto de la indemnización será determinado por el **Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, atendándose como mínimo** al valor comercial de los bienes expropiados.

Cuando se trate de expropiaciones que afecten a pueblos y comunidades indígenas se tomará en cuenta la importancia especial de sus territorios en el desarrollo de sus costumbres y especificidades culturales.

En el caso de la fracción V del artículo anterior, para la fijación del monto, se atenderá a la cantidad que se cobrará por la regularización.

El decreto **correspondiente** deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población **afectado**.

En los casos en que la Administración Pública Federal sea promovente, lo hará por conducto de la dependencia o en-

tididad paraestatal que corresponda, según las funciones señaladas por la ley.

El decreto expropiatorio sólo podrá ser ejecutado y ocuparse las tierras objeto de la expropiación, previo pago del importe total de la indemnización a los afectados; en caso de que éstos se nieguen a recibirlo sin causa justificada, el pago será depositado en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, surtiendo los mismos efectos.

Si al ocuparse la tierra no se ha pagado la indemnización, será causa de nulidad del decreto.

Así mismo el decreto expropiatorio que no se ejecute en el término de un año será nulo.

Artículo 98. Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación.

Artículo 99. La indemnización se pagará a los ejidatarios atendiendo a sus derechos. Si dicha expropiación sólo afecta parcelas asignadas a determinados ejidatarios, éstos recibirán la indemnización en la proporción que les corresponda. Si existiere duda sobre las proporciones de cada ejidatario, la Procuraduría Agraria intentará la conciliación de intereses y si ello no fuera posible, se acudirá ante el tribunal agrario competente para que éste resuelva en definitiva.

Artículo 100. Cuando los bienes expropiados se destinen a un fin distinto del señalado en el decreto respectivo, o si transcurrido un plazo de cinco años, **contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación**, no se ha cumplido con la causa de utilidad pública, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercerá la acción de reversión **dentro del término de dos años, contados a partir de la fecha en que sea exigible.**

Dicha acción podrá ser parcial o total sobre los bienes expropiados, según corresponda, incorporándose a su patrimonio.

Transcurridos los términos señalados en el primer párrafo de este artículo, el núcleo agrario podrá solicitar la reversión a su favor, ésta deberá realizarse mediante devolución de la cantidad que resulte entre el pago re-

cibido por la indemnización, menos el cálculo del monto que dejaron de percibir por la falta de explotación de las tierras.

El cálculo de monto a que se refiere el párrafo anterior, deberá realizarlo un perito.

Capítulo V De las comunidades

Artículo 101. El reconocimiento como comunidad a los núcleos agrarios deriva de los siguientes procedimientos:

- I. Una acción agraria de restitución para las comunidades despojadas de su propiedad;
- II. Un acto de jurisdicción voluntaria promovido por quienes guardan el estado comunal cuando no exista litigio en materia de posesión y propiedad comunal;
- III. La resolución de un juicio promovido por quienes conserven el estado comunal cuando exista litigio u oposición de parte interesada respecto a la solicitud del núcleo; o
- IV. El procedimiento de conversión de ejido a comunidad.

De estos procedimientos se derivará el registro correspondiente en los registros Públicos de la Propiedad y Agrario Nacional.

Artículo 102. Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son:

- I. La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra;
- II. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre;
- III. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 103 de esta ley; y
- IV. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal.

Artículo 103. La comunidad determinará el uso de sus tierras, su división en distintas porciones según distintas finalidades y la organización para el aprovechamiento de sus bienes. Podrá constituir sociedades civiles o mercantiles, asociarse con terceros, encargar la administración o ceder temporalmente el uso y disfrute de sus bienes para su mejor aprovechamiento. La asamblea, con los requisitos de asistencia y votación previstos para la fracción IX del artículo 25 podrá decidir transmitir el dominio de áreas de uso común a estas sociedades en los casos de manifiesta utilidad para el núcleo y en los términos previstos por el artículo 76.

Artículo 104. La comunidad implica el estado individual de comunero y, en su caso, le permite a su titular el uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos sobre la misma en favor de sus familiares y avecindados, así como el aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común en los términos que establezca el estatuto comunal. El beneficiado por la cesión de derecho de un comunero adquirirá la calidad de comunero.

Cuando no exista litigio, se presume como legítima la asignación de parcelas existentes de hecho en la comunidad.

Artículo 105. En los casos en que no exista asignación de parcelas individuales se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, los derechos correspondientes a los comuneros.

Artículo 106. Los ejidos que decidan adoptar el régimen de comunidad podrán hacerlo con los requisitos de asistencia y votación previstos para la fracción XIII del artículo 25 de esta ley. La asignación parcelaria de los ejidos que opten por la calidad comunal será reconocida como legítima.

A partir de la inscripción de la resolución respectiva en el Registro Agrario Nacional, el ejido se tendrá por legalmente transformado en comunidad.

Cuando los inconformes con la conversión al régimen comunal formen un número mínimo de veinte ejidatarios, éstos podrán mantenerse como ejido con las tierras que les correspondan.

Artículo 107. Las comunidades que quieran adoptar el régimen ejidal podrán hacerlo a través de su asamblea, con los requisitos previstos en los artículos 26 a 30 y 33 de esta ley.

A partir de la inscripción de la resolución respectiva en el Registro Agrario Nacional, la comunidad se tendrá por legalmente transformada en ejido.

Cuando los inconformes con la conversión al régimen ejidal formen un número mínimo de veinte comuneros, éstos podrán mantenerse como comunidad con las tierras que les correspondan.

Artículo 108. Para su administración, las comunidades podrán establecer grupos o subcomunidades con órganos de representación y gestión administrativa, así como adoptar diversas formas organizativas sin perjuicio de las facultades de los órganos generales de la asamblea. Esta podrá establecer el régimen de organización interna de los grupos comunales o subcomunidades.

Artículo 109. Las tierras de las comunidades agrarias que corresponden a pueblos y comunidades indígenas, tendrán la protección y derechos a que se refieren los artículos 90 y 91 de esta ley.

Artículo 110. Son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley, en lo que no contravengan lo dispuesto en este capítulo.

Título Cuarto

De las Asociaciones y Sociedades Agrarias

Artículo 111. El ejido y la comunidad son unidades sociales, económicas y productivas, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y constituyen las figuras asociativas básicas agrarias. Cuentan con la capacidad para ser sujetos de crédito y de otras formas de financiamiento, realizar todas las actividades inherentes a su objeto, recibir los beneficios y apoyos que los programas que los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales, aprueben para su desarrollo colectivo y el de sus integrantes, de acuerdo al artículo 60. de esta Ley.

Igualmente y con las mismas prerrogativas que establece el párrafo anterior para los ejidos y las comunidades, se reconocen como figuras asociativas agrarias:

I. La Sociedad de Producción Rural;

II. La Unidad Agrícola Industrial de la Mujer;

III. La Unión de Ejidos y Comunidades, o entre estas;

IV. La Unión de Sociedades de Producción Rural;

V. La Unión de Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer, y

VI. La Asociación Rural de Interés Colectivo

Las figuras asociativas reguladas por otras leyes, cuyo objeto social se relacione con las actividades agrarias y productivas en el campo, se reconocerán como tales y gozarán de los derechos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, siempre que se integren por sujetos o bienes agrarios previstos en esta ley.

Artículo 112. Las asociaciones y sociedades agrarias se regirán por los siguientes principios: Adhesión voluntaria, gestión democrática, participación económica, autonomía, promoción del desarrollo comunitario y social, integración entre organizaciones, libertad de afiliación política y credo religioso, y promoción de la cultura ecológica.

El acta constitutiva de las personas morales a que se refiere el artículo anterior, deberá por lo menos contener:

I. Denominación;

II. Domicilio;

III. Duración;

IV. Objeto social;

V. Capital social;

VI. Régimen de responsabilidad;

VII. Relación de socios, y

VIII. Estatuto social, mismo que como mínimo contendrá las estipulaciones relativas a:

a) Admisión, separación y exclusión de socios o asociados;

b) Derechos y obligaciones de los socios;

- c) Órganos de autoridad, administración y vigilancia;
- d) Normas de funcionamiento;
- e) Ejercicios y balances;
- f) Fondos, reservas y reparto de utilidades;
- g) Normas para su disolución y liquidación, y
- h) Las demás que sean necesarias de conformidad con su naturaleza y objeto social, y que decida la asamblea general de la asociación o sociedad, sin contravenir las disposiciones de esta ley.

El acta constitutiva deberá formalizarse ante fedatario público, a partir de lo cual las figuras asociativas adquieren personalidad jurídica. Así mismo, deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional.

Las modificaciones al acta constitutiva y la elección o remoción de los miembros de los órganos de administración y vigilancia, también deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional.

Artículo 113. Las uniones constituidas por ejidos y comunidades o entre éstas, tendrán por objeto la coordinación de sus actividades productivas o de comercialización y las de prestación de servicios, asistencia mutua y, en general, cualquier otra no prohibida por la ley.

Un mismo ejido o comunidad podrá formar parte de manera simultánea de dos o más figuras asociativas, siempre y cuando sus respectivos objetos sociales no sean excluyentes entre sí.

Para constituir una unión de ejidos se requerirá la resolución de la asamblea de cada uno de los núcleos participantes, la elección de sus delegados y la determinación de las facultades de éstos.

Las uniones de ejidos y comunidades o entre éstas, podrán establecer empresas especializadas que contribuyan al cumplimiento de su objeto y les permita acceder de manera óptima a la integración de sus cadenas productivas.

Los ejidos y comunidades, de igual forma, podrán establecer empresas para el aprovechamiento de sus recur-

sos naturales o de cualquier índole, así como la prestación de servicios. En ellas podrán participar ejidatarios, grupos de mujeres campesinas organizadas, hijos de ejidatarios, comuneros, avocados, poseionarios y pequeños productores.

Las empresas a que se refieren los dos párrafos anteriores podrán adoptar cualquiera de las formas asociativas previstas por la ley.

Artículo 114. El órgano supremo de las uniones a que se refiere el artículo anterior, será la asamblea general, que se integrará con dos representantes de cada una de las asambleas de los ejidos o de las comunidades miembros de la unión y dos representantes designados de entre los miembros del comisariado y el consejo de vigilancia de los mismos.

La dirección de la unión corresponderá a un consejo de administración nombrado por la asamblea general; estará formado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero, el número de vocales que determine el estatuto y sus respectivos suplentes, quien tendrá la representación de la unión ante terceros.

La representación legal de la unión requerirá la firma mancomunada, de por lo menos dos de los miembros del consejo de administración cuando se trate de actos de administración o de pleitos y cobranzas. En el caso de los actos de dominio, la representación será ejercida por la totalidad de los miembros propietarios y en su caso de los suplentes en funciones.

La vigilancia de la unión estará a cargo de un consejo de vigilancia nombrado por la asamblea general e integrado por un Presidente, un Secretario y un Vocal propietarios, con sus respectivos suplentes.

Los miembros de la unión que integren los consejos de administración y de vigilancia durarán en sus funciones tres años y sus facultades y responsabilidades se deberán consignar en los estatutos de la unión.

Artículo 115. Las asociaciones rurales de interés colectivo deberán constituirse por dos o más de las siguientes personas: uniones de ejidos y comunidades, uniones de sociedades de producción rural, uniones de unidades agrícolas industriales de la mujer. A éstas podrán integrarse ejidos, comunidades, sociedades de producción rural y unidades agrícolas industriales de la mujer.

Su objeto será la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el establecimiento de industrias, aprovechamientos, sistemas de comercialización y cualesquiera otras actividades económicas.

Cuando en su integración participen Sociedades de Producción Rural o con uniones de éstas, se inscribirán además en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Es aplicable a las asociaciones rurales de interés colectivo, en lo conducente, lo previsto en el artículo 114 de esta ley.

Artículo 116. Las sociedades de producción rural se constituirán con dos o más productores rurales.

El nombre de la sociedad será formado libremente e irá seguido de las palabras “Sociedad de Producción Rural” o de su abreviatura “SPR”, así como del régimen de responsabilidad ilimitada, limitada o suplementada que se **haya** adoptado.

Las de responsabilidad ilimitada son aquellas en que cada uno de sus socios responde por sí, de todas las obligaciones sociales de manera solidaria; las de responsabilidad limitada son aquellas en que los socios responden de las obligaciones hasta por el monto de sus aportaciones al capital social, y las de responsabilidad suplementada son aquellas en las que sus socios, además del pago de su aportación al capital social, responden de todas las obligaciones sociales subsidiariamente, hasta por una cantidad determinada en el pacto social y que será su suplemento, el cual en ningún caso será menor de dos tantos de su mencionada aportación.

La constitución y administración de la sociedad se sujetará en lo conducente a lo establecido **en el artículo 114 de esta Ley, pero podrán contar con un administrador único.**

Además de su inscripción en el Registro Agrario Nacional, el acta constitutiva se inscribirá en el Registro Público de la **Propiedad y de Comercio del domicilio de la sociedad.**

Artículo 117. Los derechos de los socios de la sociedad serán transmisibles con el consentimiento de la asamblea. Cuando la sociedad tenga obligaciones con alguna institución financiera se requerirá además la autorización de ésta.

Las Sociedades de Producción Rural constituirán su capital social mediante aportaciones de sus socios, conforme a las siguientes reglas:

I. En las sociedades de responsabilidad ilimitada no se requiere aportación inicial;

II. En las de responsabilidad limitada, la aportación inicial será la necesaria para formar un capital mínimo que deberá ser equivalente a setecientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal;

III. En las de responsabilidad suplementada, la aportación inicial será la necesaria para formar un capital mínimo, que deberá ser equivalente a trescientos cincuenta veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal.

La contabilidad de la sociedad será llevada por la persona propuesta por la junta de vigilancia y aprobada por la asamblea general.

Artículo 118. Dos o más sociedades de producción rural podrán constituir uniones. **La escritura constitutiva se inscribirá tanto en el Registro Agrario Nacional como en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.**

Las uniones se constituirán siguiendo el procedimiento establecido en el artículo **114 de esta Ley. Su organización y funcionamiento se regirán, en lo conducente, por lo dispuesto en el mismo precepto.**

Artículo 119. Cinco o más mujeres mexicanas, mayores de edad o menores con familia a su cargo, pertenecientes a un mismo núcleo agrario, ejidatarias, comuneras, posesionarias, avocindadas o pobladoras, podrán constituir una Unidad Agrícola Industrial de la Mujer.

Su denominación social irá seguida de las palabras “Unidad Agrícola Industrial de la Mujer” o de su abreviatura “UAIM”.

Su objeto social será la realización y coordinación de actividades productivas, de transformación, de comercialización, de servicios o cualesquiera otras siendo lícitas, que contribuyan al desarrollo de la mujer dentro del núcleo agrario.

El acta constitutiva que, además, contenga los estatutos de la Unidad, deberá formalizarse ante fedatario públi-

co, a partir de lo cual, contará con personalidad jurídica. Así mismo deberá inscribirse en el Registro Agrario Nacional,

Para su constitución no será requisito la aportación de tierras por parte de las socias.

Dos o más unidades a las que se refiere este artículo podrán constituir una organización de carácter regional denominada Unión de Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer.

Artículo 120. Las operaciones crediticias y financieras que realicen las figuras asociativas a que se refiere este Título, deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional cuando intervengan sujetos o bienes agrarios, y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Artículo 121. La Procuraduría Agraria proporcionará la asesoría legal que le sea requerida por los interesados para la constitución y funcionamiento de sociedades agrarias de que trata este Título.

En los casos, en que quien deba convocar a asamblea de socios no lo haga dentro de los cinco días posteriores a la solicitud de sus miembros y una vez agotadas las instancias que establezca el estatuto de las sociedades a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 111 de esta ley, la Procuraduría Agraria estará facultada para convocarla, si así se lo solicita al menos el veinticinco por ciento del total de socios.

Las controversias derivadas de la constitución, funcionamiento y liquidación de las sociedades agrarias a las que se refiere este Título, serán competencia de los tribunales agrarios.

Título Quinto

Del aprovechamiento conjunto de tierras

Capítulo I

De los sujetos aportantes

Artículo 122. El aprovechamiento conjunto de tierras consiste en la suma de unidades parcelarias o propiedades de dos o más de las siguientes personas: ejidatarios, comuneros, poseionarios o pequeños propietarios, que sean susceptibles de ser aprovechadas en forma conjunta por los aportantes, en virtud de su ubicación, calidad, vocación y topografía de las tierras.

Artículo 123. Los ejidatarios o poseionarios que deseen aprovechar sus parcelas de manera conjunta, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser titulares de los derechos parcelarios que aportan, y

II. Notificar a la asamblea a través del comisariado ejidal, de su propósito de aprovechar conjuntamente sus tierras.

Artículo 124. Los particulares que deseen incorporar predios de su propiedad o de los cuales gocen del usufructo, para el aprovechamiento conjunto de tierras, deberán acreditar:

I. La propiedad o la posesión legal de los terrenos de que se trate;

II. La colindancia con las demás unidades de propiedad social o privada con que se pretenda formar la unidad productiva de tierras para el aprovechamiento conjunto, y

III. El usufructo de las tierras.

Capítulo II

De los contratos de aprovechamiento conjunto de tierras

Artículo 125. El aprovechamiento conjunto de tierras se formalizará a través de la celebración de un contrato de asociación, en el que se establezcan los términos de dicha acción.

Artículo 126. Los contratos que se celebren entre ejidatarios o poseionarios, o entre éstos y pequeños propietarios, deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional.

Artículo 127. El aprovechamiento conjunto de tierras no implica la constitución de derechos de copropiedad entre los aportantes respecto de la superficie objeto de esta acción; tampoco modifica la titularidad de los derechos de cada aportante.

Artículo 128- Los contratos de aprovechamiento conjunto de tierras deberán contener:

I. El nombre, domicilio y calidad de los contratantes;

II. La acreditación de los derechos parcelarios o de propiedad privada de que se trate, así como la de los otros bienes que se aporten;

III. La descripción de los predios, indicando superficie, medidas y colindancias;

IV. La forma de explotación asociativa a que se sujetarán los predios y la distribución del trabajo entre los contratantes;

V. Los derechos y obligaciones de los contratantes, así como la forma de distribución de gastos, utilidades y pérdidas derivados del contrato;

VI. El término del contrato y las condiciones para su prórroga, modificación o extinción;

VII. El aportante que fungirá como representante común;

VIII. Las especificaciones, en el caso de que el aprovechamiento se realice, total o parcialmente, en áreas naturales protegidas o para el pago de servicios ambientales; y

IX. Las demás modalidades, términos y estipulaciones a que se sujeten los contratantes.

Artículo 129. Los contratos de aprovechamiento conjunto de tierras no podrán exceder el término de 20 años y podrán ser prorrogables por una sola vez.

Cuando las tierras de propiedad particular que se aprovechen conjuntamente con parcelas ejidales estén sujetas a usufructo, el contrato agrario correspondiente no podrá exceder el término de éste.

Artículo 130. La Secretaría de la Reforma Agraria promoverá el aprovechamiento conjunto de tierras, especialmente cuando se trate del minifundio o del parvifundio, a fin de propiciar la reorganización de los productores, facilitar el acceso al crédito y a los insumos, promover un aprovechamiento ambiental sustentable y, en general, mejorar la productividad de la tenencia y explotación de la tierra.

Artículo 131. Las dependencias y entidades del gobierno federal podrán promover el desarrollo de las superficies que se aprovechen conjuntamente, mediante la instauración de proyectos productivos, aprovechamiento sustentable, programas de capacitación y de fomento técnico, así como de medidas de acceso al crédito, al aseguramiento y cualquier otra de índole similar.

Artículo 132. El usufructo de las superficies sujetas al contrato podrá ser dado en garantía crediticia, siempre y cuando esta circunstancia se encuentre prevista en aquél y el término de la garantía no exceda el del aprovechamiento conjunto convenido.

Artículo 133. Las controversias que se susciten con motivo de los contratos de aprovechamiento conjunto de tierras a que se refiere este Título, serán resueltas por los tribunales agrarios.

Título Sexto

De la Pequeña Propiedad Individual de Tierras Agrícolas, Ganaderas y Forestales

Artículo 134. Para los efectos del párrafo tercero y la fracción XV del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consideran latifundios las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad.

Artículo 135. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Tierras agrícolas: los suelos utilizados para el cultivo de vegetales.

II. Tierras ganaderas: los suelos utilizados para la reproducción y cría de animales mediante el uso de su vegetación, sea ésta natural o inducida.

III. Tierras forestales: los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o selvas.

Se reputan como agrícolas las tierras rústicas que no estén efectivamente dedicadas a alguna otra actividad económica.

Artículo 136. Se considera pequeña propiedad agrícola la superficie de tierras agrícolas de riego o humedad de primera que no exceda los siguientes límites o sus equivalentes en otras clases de tierras:

I. 100 hectáreas si se destina a cultivos distintos a los señalados en las fracciones II y III de este artículo;

II. 150 hectáreas si se destina al cultivo de algodón;

III. 300 hectáreas si se destina al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales.

Para los efectos de esta ley, se consideran árboles frutales las plantas perennes de tronco leñoso productoras de frutos útiles al hombre.

Para efectos de la equivalencia a que se refiere este artículo, se computará una hectárea de riego, por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad, por ocho de monte o agostadero en terrenos áridos.

Artículo 137. Para efectos de la aplicación de los límites de la pequeña propiedad, cuando un mismo individuo sea propietario de tierras agrícolas de distinta clase o las destine a diferentes cultivos, se sumarán todas ellas de acuerdo a sus equivalencias y al cultivo respectivo.

En los predios dedicados a las actividades previstas en las fracciones II y III del artículo 136, podrán intercalarse otros cultivos, sin que por ello dejen de aplicarse los límites previstos para dichas actividades.

Artículo 138. Se considera pequeña propiedad forestal la superficie de tierras forestales de cualquier clase que no exceda de 800 hectáreas.

Artículo 139. Se considera pequeña propiedad ganadera la superficie de tierras ganaderas que, de acuerdo con el coeficiente de agostadero ponderado de la región de que se trate no exceda de la necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, conforme a las equivalencias que determine y publique la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

El coeficiente de agostadero por regiones que determine la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos se hará mediante estudios técnicos de campo tomando en cuenta la superficie que se requiere para alimentar una cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, atendiendo los factores topográficos, climatológicos y pluviométricos que determinen la capacidad forrajera de la tierra de cada región.

Artículo 140. La superficie de las tierras que a partir de su estado natural hubieren sido mejoradas con obras de riego, drenaje, nivelación o cualesquiera otras ejecutadas por sus dueños o poseedores, continuarán computándose conforme a la clase o coeficiente de agostadero anteriores a la mejora, según se trate de tierras agrícolas o ganaderas respectivamente.

A solicitud del propietario o poseedor de un predio, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos expedirá certificados en los que conste la clase o coeficiente de agostadero de sus tierras. Dichos certificados harán prueba plena.

Artículo 141. Las pequeñas propiedades ganaderas seguirán siendo consideradas como tales, aún cuando se dediquen a uso agrícola, siempre que las tierras dedicadas a tal fin hubieren sido mejoradas y se cumpla con lo siguiente:

I. Que la producción obtenida de la superficie destinada a uso agrícola se utilice para la alimentación de ganado; o

II. Que las tierras dedicadas a uso agrícola, sin fines de alimentación de ganado, no excedan las superficies señaladas en el artículo 136. El límite aplicable será el que corresponda a la clase que tenían dichas tierras antes de la mejora.

Continuarán en el supuesto de la fracción I quienes, manteniendo como mínimo el número de cabezas que corresponda al coeficiente de agostadero anterior a la mejora, comercien con los excedentes de los productos que se obtengan debido a las mejoras realizadas.

Los vegetales que en forma espontánea se obtengan en tierras ganaderas podrán comercializarse sin que por ello se entienda que dichas tierras se destinan a uso agrícola.

Artículo 142. Cuando las tierras de una pequeña propiedad ganadera se conviertan en forestales, ésta seguirá considerándose como pequeña propiedad, aunque rebase ochocientas hectáreas.

Artículo 143. Las tierras que conforme a lo dispuesto en esta ley excedan la extensión de la pequeña propiedad individual, deberán ser fraccionadas, en su caso, y enajenadas de acuerdo con los procedimientos previstos en las leyes de las entidades federativas.

De acuerdo con lo dispuesto por la parte final del párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando en la enajenación de excedentes en pública almoneda se hagan dos o más ofertas iguales, tendrán preferencia, en el orden señalado:

- I. Los núcleos de población colindantes a las tierras de cuya enajenación se trate;
- II. Los municipios en que se localicen los excedentes;
- III. Las entidades federativas en que se localicen los excedentes;
- IV. La federación;
- V. Los demás oferentes.

Título Séptimo **De las Sociedades Propietarias de** **Tierras Agrícolas, Ganaderas o Forestales**

Artículo 144. Las disposiciones de este título son aplicables a las sociedades mercantiles o civiles que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales.

Asimismo, lo dispuesto en este título será aplicable a las sociedades a que se refieren los artículos **75** y **103** de esta ley, excepto cuando se dediquen a actividades distintas a las señaladas en el párrafo anterior.

Artículo 145. Las sociedades mercantiles o civiles no podrán tener en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la equivalente a veinticinco veces los límites de la pequeña propiedad individual y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Deberán participar en la sociedad, por lo menos, tantos individuos como veces rebasen las tierras de la sociedad los límites de la pequeña propiedad individual. Al efecto, se tomará en cuenta la participación de cada individuo, ya sea directamente o a través de otra sociedad;
- II. Su objeto social deberá limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesarios para el cumplimiento de dicho objeto;

III. Su capital social deberá distinguir una serie especial de acciones o partes sociales identificada con la letra T, la que será equivalente al capital aportado en tierras agrícolas, ganaderas o forestales o al destinado a la adquisición de las mismas, de acuerdo con el valor de las tierras al momento de su aportación o adquisición.

Artículo 146. Las acciones o partes sociales de serie T no gozarán de derechos especiales sobre la tierra ni de derechos corporativos distintos a las demás acciones o partes sociales. Sin embargo, al liquidarse la sociedad sólo los titulares de dichas acciones o partes sociales tendrán derecho a recibir tierra en pago de lo que les corresponda en el haber social.

Artículo 147. Los estatutos sociales de las sociedades a que este Título se refiere deberán contener transcritas las prescripciones a que se refiere el artículo 145.

Artículo 148. Ningún individuo, ya sea directamente o a través de una sociedad, podrá detentar más acciones o partes sociales de serie T, ya sea de una o varias sociedades emisoras, que las que equivalgan a la extensión de la pequeña propiedad.

Ninguna sociedad podrá detentar más acciones o partes sociales de serie T, ya sea de una o varias sociedades emisoras, que las que equivalgan a una superficie igual a veinticinco veces la pequeña propiedad.

Artículo 149. En las sociedades a que se refiere este título, los extranjeros no podrán tener una participación que exceda del 49 por ciento de las acciones o partes sociales de serie T.

Artículo 150. El Registro Agrario Nacional contará con una sección especial en la que se inscribirán:

- I. Las sociedades mercantiles o civiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales;
- II. Las superficies, linderos y colindancias de los predios agrícolas, ganaderos o forestales propiedad de las sociedades a que se refiere la fracción anterior, con indicación de la clase y uso de sus tierras;
- III. Los individuos tenedores de acciones o partes sociales de serie T de las sociedades a que se refiere la fracción I de este artículo;

IV. Las sociedades tenedoras de acciones o partes sociales de serie T representativas del capital social de las sociedades a que se refiere la fracción I de este artículo;

V. Los demás actos, documentos o información que sea necesaria para vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en este Título y que prevea el reglamento de esta ley.

Los administradores de las sociedades, así como los socios tenedores de acciones o partes sociales de serie T, según corresponda, serán responsables de proporcionar al Registro la información a que se refiere este artículo, en la forma y términos que señale el reglamento respectivo de esta ley.

Artículo 151. Cuando una sociedad rebase los límites a la extensión de tierra permitidos por esta ley, la Secretaría de la Reforma Agraria, previa audiencia, ordenará a la sociedad que en el plazo de un año fraccione, en su caso, y enajene los excedentes o regularice su situación. Si transcurrido el plazo la sociedad no lo hubiere hecho, la dependencia seleccionará discrecionalmente las tierras que deban ser enajenadas y notificará a la autoridad estatal correspondiente para que aplique el procedimiento a que se refiere el artículo 143.

Artículo 152. Las acciones o partes sociales de serie T que un individuo o sociedad tenga en exceso de las que equivalgan a la pequeña propiedad o a veinticinco veces ésta, respectivamente, deberán ser enajenadas por su propietario o se ordenará su enajenación en los términos que para la enajenación de tierra prescribe el artículo anterior.

Serán nulos los actos o contratos por los que se pretenda simular la tenencia de acciones de serie T.

Título Octavo De la Procuraduría Agraria

Artículo 153. La Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria.

Tendrá su domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal y establecerá delegaciones en todas las entidades federativas, así como oficinas en aquellos lugares que estime necesario.

Artículo 154. La Procuraduría Agraria tiene como función principal la procuración de la administración de la justicia agraria, en términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidos y comunidades, ejidatarios, comuneros, poseionarios y sus respectivos sucesores, pequeños propietarios, avendados, jornaleros agrícolas, colonos, poseedores de terrenos baldíos o nacionales y campesinos en general, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de esta ley.

Artículo 155. Son atribuciones de la Procuraduría Agraria las siguientes:

I. Asesorar y representar legalmente a los sujetos agrarios ante autoridades administrativas y jurisdiccionales del ámbito agrario.

II. Asesorar y en su caso representar legalmente a los sujetos agrarios, ante autoridades administrativas del trabajo, del medio ambiente y del Ministerio Público, así como jurisdiccionales federales y del fuero común; siempre y cuando se afecten sus bienes o derechos agrarios.

III. Atender las consultas jurídicas planteadas por los sujetos agrarios respecto de sus relaciones con terceros que tengan que ver con la aplicación de esta ley y, en general, difundir las disposiciones relacionadas con sus derechos.

IV. Contribuir en el ámbito de sus facultades, mediante el procedimiento de conciliación, a la solución de las controversias que se susciten entre los sujetos agrarios, o entre éstos con terceros, o con autoridades administrativas;

V. Prevenir y denunciar ante la autoridad competente, la violación de las leyes agrarias, para hacer respetar el derecho de sus asistidos e instar a las autoridades agrarias a la realización de funciones a su cargo y emitir las recomendaciones que considere pertinentes;

VI. Estudiar y proponer medidas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica en el campo;

VII. Denunciar el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades de los funcionarios agrarios o de los empleados de la administración de justicia agraria;

VIII. Ejercer, con el auxilio y participación de las autoridades **federales, estatales, del Distrito Federal o municipales**, las funciones de inspección y vigilancia encaminadas a defender los derechos de sus asistidos;

IX. Investigar y denunciar los casos en los que se presume la existencia de prácticas de acaparamiento o concentración de tierras, en extensiones mayores a las permitidas legalmente;

X. Asesorar y **en su caso** representar **legalmente a los sujetos agrarios en sus trámites y gestiones para la defensa de sus derechos laborales, cuando éstos deriven de actividades agrícolas, ganaderas, turísticas, forestales o urbanas y tengan relación con sus derechos y calidad agraria;**

XI: Asesorar y representar, ante cualquier autoridad, a los núcleos agrarios en la regularización de los excedentes de tierras que posean con motivo de la ejecución de la resolución presidencial o sentencia que los benefició, por más de cinco años, de buena fe y de manera pública, pacífica y continua;

XII. Asesorar a los grupos de ejidatarios y comuneros en la gestión o conciliación de intereses en la división y fusión de ejidos y comunidades;

XIII. Procurar el acceso pleno a la jurisdicción del Estado en materia agraria a los pueblos y comunidades indígenas, a efecto de que, cuando así proceda, en los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, sean tomados en cuenta sus sistemas normativos; y de que, las personas o grupos indígenas que no hablen suficientemente el español sean asistidos por traductores e intérpretes que tengan conocimiento de su lengua y cultura;

XIV. Convocar a asamblea de los núcleos agrarios cuando se le solicite, en los términos de esta Ley;

XV. Asistir y asesorar a los núcleos agrarios para mantener la legalidad y el adecuado desarrollo en la realización de las asambleas, cuando se puedan afectar los intereses colectivos de éstos, proporcionando

la asesoría conducente, sin contravenir la autoridad de éstas; y

XVI. Las demás que esta Ley, sus reglamentos y otras leyes le señalen.

Artículo 156. Las controversias en las que la Procuraduría Agraria sea directamente parte, serán competencia de los tribunales federales.

Las autoridades federales, estatales, municipales y las organizaciones sociales agrarias, serán coadyuvantes de la Procuraduría Agraria en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 157. La Procuraduría Agraria estará presidida por un Procurador. Se integrará, además, por los subprocuradores, sustitutos del Procurador en el orden que lo señale el Reglamento Interior, por un Secretario General y por un Cuerpo de Servicios Periciales, así como por las demás unidades técnicas, administrativas y dependencias internas que se estimen necesarias al adecuado funcionamiento de la misma.

Artículo 158. El Procurador Agrario deberá satisfacer los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Ser licenciado en derecho, con título debidamente registrado y contar con experiencia mínima de cinco años en cuestiones agrarias, y

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal.

Artículo 159. Los Subprocuradores deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, expedido cuando menos tres años antes de la fecha de la designación, acreditando una práctica profesional por la misma temporalidad; y

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena privativa de libertad.

El Secretario General deberá reunir los requisitos previstos en las fracciones I y III anteriores.

Artículo 160. El Procurador Agrario será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.

Artículo 161. Los Subprocuradores y el Secretario General de la Procuraduría Agraria, también serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Secretario de la Reforma Agraria.

Artículo 162. El Procurador Agrario tendrá las siguientes atribuciones:

I. Actuar como representante legal de la Procuraduría Agraria;

II. Dirigir y coordinar las funciones de la Procuraduría Agraria;

III. Nombrar y remover al personal al servicio de la institución, así como señalar sus funciones, áreas de responsabilidad y remuneración de acuerdo con el presupuesto programado;

IV. Crear las unidades técnicas y administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de la Procuraduría Agraria;

V. Expedir los manuales de organización y procedimientos, y dictar normas para la adecuada desconcentración territorial, administrativa y funcional de la institución;

VI. Hacer la propuesta del presupuesto de la Procuraduría Agraria;

VII. Delegar sus facultades en los servidores públicos subalternos que el reglamento Interior de la Procuraduría Agraria señale, y

VIII. Las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes le señalen.

Artículo 163. Al Secretario General corresponderá realizar las tareas administrativas de la Procuraduría Agraria, coordinando las oficinas de la dependencia de conformidad con las instrucciones y disposiciones del Procurador Agrario.

Artículo 164. A los Subprocuradores corresponderá dirigir las funciones de sus respectivas áreas de responsabilidad, de conformidad con el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, atendiendo las tareas relativas a la asistencia y defensa de los derechos e intereses de ejidos, comunidades, ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios y comuneros, pequeños propietarios, avocados y jornaleros, la asistencia en la regularización de la tenencia de la tierra de los mismos y la inspección y vigilancia en el cumplimiento de las leyes agrarias.

Artículo 165. El cuerpo de servicios periciales se integrará por los expertos de las distintas disciplinas profesionales y técnicas que requiera la Procuraduría Agraria. Tendrán a su cargo la realización de los estudios, peritajes, consultas y dictámenes que le sean requeridos por la propia dependencia.

Artículo 166. Las relaciones de trabajo entre la Procuraduría Agraria y sus trabajadores se regirán por las disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el Estatuto del Servicio Profesional Agrario que regule el servicio de carrera a su interior.

Título Noveno Del Registro Agrario Nacional

Artículo 167. Para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de esta ley funcionará el Registro Agrario Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. El registro tendrá además una sección especial para las inscripciones correspondientes a la propiedad de sociedades.

Artículo 168. Para efectos de lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 27 constitucional, el Registro Agrario Nacional prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrechamente con las autoridades de las entidades federativas y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Artículo 169. Las inscripciones en el Registro Agrario Nacional y las constancias que de ellas se expidan, harán prueba plena en juicio y fuera de él.

Cuando los actos a que esta ley se refiere deban inscribirse en el Registro y no se inscriban, sólo surtirán efectos entre los otorgantes pero no podrán producir perjuicio a terceros, quienes sí podrán aprovecharlos en lo que les fueren favorables.

Artículo 170. El Registro Agrario Nacional será público y cualquier persona podrá obtener información sobre sus asientos e inscripciones y obtener a su costa las copias que solicite.

Artículo 171. Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional:

I. Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales;

II. Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de ejidatarios o comuneros;

III. Los títulos primordiales de las comunidades, y en su caso, los títulos que las reconozcan como comunidades tradicionales;

IV. Los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 57 de esta ley;

V. Los planos y documentos relativos al catastro y censo rurales;

VI. Los documentos relativos a las sociedades mercantiles, en los términos del Título **Séptimo** de esta ley;

VII. Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales;

VIII. Los contratos y sus modificaciones cuando tengan por objeto el aprovechamiento de tierras ejidales o comunales, de uso común o parceladas, de conformidad con lo establecido en los artículos 46, 80 y 122 de esta Ley;

IX. Las operaciones crediticias celebradas por núcleos de población ejidales o comunales, por ejidatarios, poseionarios o comuneros o por las sociedades reguladas por la presente Ley; y

X. Los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos u otras disposiciones normativas.

Artículo 172. El Registro Agrario Nacional también deberá llevar las inscripciones de todos los terrenos nacionales y los denunciados como baldíos.

Artículo 173. El Registro Agrario Nacional en coordinación con otras dependencias gubernamentales, coadyuvará, a partir de su base catastral, en la formulación de mecanismos institucionales que propicien la generación e integración de información sobre las características y potencialidades de la propiedad, uso y explotación del suelo, así como las propias de la zona económica en la que se encuentren dichas tierras.

Artículo 174. Para los efectos de esta ley, las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a proporcionar al Registro Agrario Nacional la información estadística, documental, técnica, catastral y de planificación, que éste requiera para el mejor desempeño de sus funciones.

Artículo 175. El Registro Agrario Nacional deberá:

I. Llevar clasificaciones alfabéticas de nombres de individuos tenedores de acciones de serie T y denominaciones de sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales;

II. Llevar clasificaciones geográficas de la ubicación de predios de sociedades, con indicaciones sobre su extensión, clase y uso;

III. Registrar las operaciones que impliquen la cesión de derechos sobre tierras ejidales y la garantía a que se refiere el artículo **47**, así como las de los censos ejidales;

IV. Disponer el procesamiento y óptima disponibilidad de la información bajo su resguardo;

V. Participar en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal en los términos que señala el artículo 57 de esta ley.

VI. Llevar el inventario de toda la propiedad rural y su actualización, a través del sistema de Catastro Rural Nacional;

VII. Seguir el trámite administrativo previsto en su reglamento para la transmisión por lista de sucesión de los derechos agrarios y expedir los certificados correspondientes, y

VIII. Ejercer las demás funciones que esta Ley, sus reglamentos y otras disposiciones le confieran.

Artículo 176. Los notarios y los registros públicos de la propiedad, cuando autoricen o registren operaciones o documentos sobre conversión de propiedad ejidal a dominio pleno y de éste al régimen ejidal, así como la adquisición de tierra por sociedades mercantiles o civiles, deberán dar aviso al Registro Agrario Nacional. Asimismo, los notarios públicos deberán dar aviso al Registro Agrario Nacional de toda traslación de dominio de terrenos rústicos de sociedades mercantiles o civiles.

**Título Décimo
De los Terrenos Baldíos y Nacionales**

Artículo 177. Son baldíos, los terrenos de la Nación que no han salido de su dominio por título legalmente expedido y que no han sido deslindados ni medidos.

Artículo 178. Son nacionales:

I. Los terrenos baldíos deslindados y medidos en los términos de este Título; y

II. Los terrenos que recobre la Nación por virtud de nulidad de los títulos que respecto de ellos se hubieren otorgado.

Artículo 179. Los terrenos baldíos y los nacionales serán inembargables e imprescriptibles.

Artículo 180. La Secretaría de la Reforma Agraria llevará a cabo las operaciones de deslinde que fueren necesarias, directamente o por conducto de la persona que designe. El deslindador formulará aviso de deslinde en el que señalará el lugar donde tenga instaladas sus oficinas, en las que deberá poner los planos relativos a los terrenos que se van a deslindar a disposición de cualquier interesado para su consulta. Dicho aviso será publicado por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial de la entidad federativa en que se encuentre el terreno que se va a deslindar y en uno de los diarios de mayor circulación de la propia entidad federativa, fijándolo además en los parajes cercanos al mismo terreno. En este último caso, al

aviso se agregará un croquis en el que se indiquen los límites y colindancias del terreno. Los propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que se consideren afectados por el deslinde, tendrán un plazo de treinta días hábiles para exponer lo que a su derecho convenga.

El deslindador notificará a quienes se hubieren presentado el día, hora y lugar en que principiarán las operaciones de deslinde a efecto de que concurren por sí o designen representante. Se levantará acta de las diligencias realizadas, en la que firmarán el deslindador, dos testigos y los interesados que estuvieren o no conformes; en caso de inconformidad se hará constar esta circunstancia, sin que la falta de firma de estos últimos afecte la validez del acta. Los propietarios o poseedores de predios prestarán toda clase de facilidades para que se lleven a cabo los trabajos de deslinde. En caso de oposición, el deslindador solicitará la ayuda de la fuerza pública.

Recibida por la Secretaría la documentación de las operaciones de deslinde procederá a hacer el estudio de las mismas, tanto de la parte técnica topográfica, como de la titulación enviada y resolverá si el terreno solicitado es o no nacional o, en su caso, si dentro de la zona abarcada por el deslinde existen o no terrenos nacionales. Las resoluciones se notificarán a los interesados en los domicilios que hayan señalado, y se publicarán además en el Diario Oficial de la Federación.

En caso de controversia respecto de las resoluciones que dicte la Secretaría de la Reforma Agraria, el interesado podrá someter el asunto al conocimiento de los tribunales agrarios, en un plazo de quince días hábiles siguientes al en que haya surtido efectos la notificación personal al interesado, o de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación en caso de que se desconozca su domicilio.

Artículo 181. La Secretaría de la Reforma Agraria estará facultada para **transmitir a título gratuito el dominio de terrenos nacionales a los núcleos agrarios que los posean como excedente de tierras, con motivo de la ejecución de la resolución presidencial o sentencia que los benefició, por más de cinco años, de buena fe y de manera pública, pacífica y continua.**

Asimismo podrá enajenar a título oneroso y fuera de subasta, terrenos nacionales a los particulares dedicados a la actividad agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría. **La Secretaría de la Reforma Agraria igualmente estará fa-**

cultada para enajenar los terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no agropecuaria, de acuerdo al valor comercial que determine el **Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales**.

Los supuestos **de que trata el párrafo anterior** procederán, siempre y cuando los terrenos no se requieran para el servicio de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su utilización prevista no sea contraria a la vocación de las tierras.

Artículo 182. Tendrán preferencia para adquirir terrenos nacionales, a título oneroso, los poseedores que los hayan explotado en los últimos tres años. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Libro Segundo De la Justicia Agraria

Título Primero Definiciones, Principios y Reglas Generales del Juicio Agrario

Capítulo I Definiciones

Artículo 183. La jurisdicción agraria es la potestad que la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los tribunales agrarios para que, con plena autonomía, impartan y administren justicia, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad.

Artículo 184. Para los efectos de este libro se entiende por:

I. Actos de naturaleza agraria. Aquellos que constituyan, alteren, modifiquen, transmitan o extingan derechos u obligaciones en favor o en contra de los sujetos agrarios o de sus bienes, en términos de lo dispuesto por esta ley o sus reglamentos;

II. Autoridades agrarias. Son aquellas que formal o materialmente realizan actos que constituyan, alteren, modifiquen o extingan derechos o determinen la existencia de obligaciones, respecto de los sujetos agrarios y sus bienes, protegidos por el régimen jurídico agrario;

III. Bienes agrarios. Las tierras, bosques y aguas que han sido dotados a los núcleos ejidales o comunales o que hubieren adquirido por cualquier otro título y hayan sido incorporadas al régimen jurídico ejidal o comunal;

IV: Régimen jurídico agrario. El conjunto de leyes, reglamentos y demás ordenamientos que regulen los bienes, derechos y obligaciones de los sujetos agrarios, así como las que regulen la impartición de la justicia agraria; y

V. Sujetos agrarios:

- a) Los ejidatarios y sus sucesores;
- b) Los comuneros y sus sucesores;
- c) Los vecindados a que se refiere esta ley;
- d) Los posesionarios a que se refiere esta ley;
- e) Los colonos agrícolas, ganaderos o agropecuarios;
- f) Los poseedores de terrenos nacionales;
- g) Quienes se encuentren vinculados por un contrato o convenio que involucre tierras, bosques o aguas, ejidales o comunales;
- h) Los núcleos de población ejidal o comunal;
- i) Las asociaciones y sociedades agrarias y las propietarias de tierras agrícolas, de agostadero o forestales, a las que se refiere esta ley, y
- j) Las personas físicas o morales que pertenecen al régimen jurídico agrario, conforme a la ley de la materia y los reglamentos que deriven de ésta.

Artículo 185. A falta de disposición expresa, será de aplicación supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en todo lo que no se oponga directa o indirectamente a lo dispuesto por este ordenamiento y a la naturaleza y principios generales del juicio agrario; asimismo, se tomarán en consideración los principios generales de derecho y los de otros ordenamientos que regulen situaciones análogas, los de justicia social que

deriven del artículo 27 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre, los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas y la equidad.

Capítulo II Principios del Juicio Agrario

Artículo 186. En el juicio agrario se observarán los siguientes principios generales:

Iniciativa de parte. El inicio del proceso corresponde exclusivamente a quien tenga interés en que el tribunal agrario declare o constituya un derecho o imponga una condena. Los tribunales agrarios no podrán iniciar de oficio ningún procedimiento.

Legalidad. Los tribunales se ajustarán a los preceptos contenidos en la Constitución, en esta ley y en las demás leyes aplicables, para la correcta prosecución del juicio y la decisión judicial apegada a derecho.

Igualdad. Se deberá observar un tratamiento igualitario en el ejercicio de los derechos procesales de las partes, para que éstas actúen de la manera que estimen conveniente a sus intereses y cumplan las obligaciones legales que les correspondan en paridad de condiciones, conforme a las disposiciones de esta ley.

Publicidad. Las diligencias del proceso agrario serán públicas, salvo que la ley disponga lo contrario o así lo considere el tribunal con la finalidad de guardar el orden de las diligencias.

Inmediación. Todas las audiencias deberán ser presididas por el magistrado agrario o por el secretario autorizado por el Tribunal Superior Agrario en los casos de habilitación, conforme lo establece la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Las actuaciones realizadas en contravención a esta disposición serán nulas.

Concentración. Es responsabilidad del tribunal agrario lograr que la justicia sea pronta y expedita, para lo cual proveerá lo necesario a fin de desahogar el mayor número de actuaciones procesales en una sola audiencia, cuando así lo permita la ley y sin perjuicio de los derechos de las partes.

Gratuidad. Los servicios que proporcionen los tribunales agrarios serán gratuitos.

Oralidad. Las actuaciones en el juicio agrario se realizarán en forma oral, con excepción de aquellas que requieren constancia escrita o que exijan determinadas formalidades.

Objetividad. Los tribunales buscarán la verdad material o histórica en los hechos y puntos controvertidos, proveyendo lo que fuere necesario para alcanzarla y sin lesionar el derecho de las partes, conforme al principio de igualdad procesal.

Imparcialidad. El tribunal agrario deberá mantener siempre una posición equilibrada al justipreciar los hechos controvertidos que son puestos a su consideración, sin privilegios hacia ninguna de las partes.

Sustentabilidad. El tribunal deberá vigilar que sus resoluciones propendan a conservar, preservar y restaurar las tierras, bosques, aguas y otros recursos naturales, cualquiera que sea el régimen de propiedad al que pertenezcan, tratando de evitar perjuicios al medio ambiente o al equilibrio ecológico.

Celeridad. El tribunal agrario está obligado a proveer las medidas que sean pertinentes para evitar retrasos o acciones que operen contra la economía procesal, a fin de que la impartición de justicia agraria sea eficaz, eficiente y expedita.

Itinerancia. Los tribunales unitarios podrán realizar sus funciones fuera de su sede, en las regiones o municipios ubicados dentro de su jurisdicción territorial, a fin de acercar la impartición de justicia agraria a los sujetos agrarios.

Conciliación. Los tribunales agrarios exhortarán a las partes para que en cualquier estado del proceso resuelvan su conflicto mediante amigable composición.

Suplencia de los planteamientos de derecho. Los tribunales agrarios suplirán la deficiencia de los sujetos agrarios en los planteamientos de derecho.

Artículo 187. Corresponderá al magistrado la conducción del proceso, quien deberá poner especial cuidado y empeño para que durante éste se apliquen los principios enunciados en el artículo anterior.

Capítulo III De las Reglas Generales

Sección Primera Facultades y Obligaciones de los Tribunales Agrarios

Artículo 188. Los tribunales agrarios tienen las siguientes facultades y obligaciones:

I. Conocer y resolver los asuntos de su competencia que se sometan a su jurisdicción;

II. Procurar que las partes en litigio se encuentren debidamente asesoradas;

III. Examinar la demanda y prevenir al actor, en su caso, para subsanar las irregularidades que contenga;

IV. Observar los sistemas normativos de cada pueblo indígena mientras no contravengan lo dispuesto por la Constitución o por el régimen jurídico agrario, ni se afecten derechos de terceros. El tribunal se asegurará de que los indígenas sean asistidos por intérpretes y traductores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, cuando así se requiera;

V. Decretar, de oficio o a petición de parte, las medidas precautorias tendientes a proteger los bienes y derechos en litigio, manteniendo las cosas en el estado en que se encuentren al momento de su conocimiento y salvaguardando los intereses colectivos e individuales de los núcleos agrarios o de sus integrantes;

VI. Llamar de oficio o, a petición de parte, a cualquier persona que pueda resultar afectada con la resolución del juicio;

VII. Proveer lo necesario ante las autoridades para que expidan documentos cuyo contenido se considere esencial para el conocimiento de la verdad, así como, apremiar a las partes o a terceros para que exhiban los que tienen en su poder;

VIII. Suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como de ejidata-

rios, comuneros, aspirantes a ellos, sucesores, poseisionarios y avecindados.

IX. Proveer de manera discrecional y conforme a su prudente arbitrio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad;

X. Ordenar que se subsane toda omisión o irregularidad que notaren en la substanciación del juicio agrario con el único fin de regularizarlo, y

XI. Desechar demandas notoriamente improcedentes, fundando, motivando y notificando personalmente el acuerdo correspondiente, derivado de la incompetencia por razón de materia o existencia de cosa juzgada.

Artículo 189. Los magistrados agrarios tienen el deber de mantener el orden, y de exigir que se les guarde el respeto y consideración debidos tanto a ellos como a los demás miembros del tribunal, por parte de los litigantes y personas que ocurran a los tribunales y sancionarán inmediatamente, con correcciones disciplinarias, cualquier acto que contravenga este precepto. Si se presume que algún acto constituye un delito, se levantará acta circunstanciada que se remitirá al ministerio público.

Artículo 190. Son correcciones disciplinarias:

I. Apercibimiento;

II. La amonestación privada o pública, y

III. Multa hasta de cien salarios mínimos generales vigentes en la zona económica que corresponda.

Artículo 191. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:

I. Multa hasta de cien salarios mínimos generales vigentes en la zona económica que corresponda;

II. El auxilio de la fuerza pública, y

III. Arresto hasta por treinta y seis horas.

La aplicación de los medios de apremio es independiente de la intervención que pudiera corresponder al Ministerio Público.

Sección Segunda De las Formalidades, Actuaciones y Términos Judiciales

Artículo 192. Las actuaciones ante los Tribunales se efectuarán en días y horas hábiles. Para los emplazamientos, notificaciones, citaciones e itinerancias, no habrá días ni horas inhábiles.

El despacho de los tribunales agrarios comenzará de las nueve de la mañana hasta las diecisiete horas.

Artículo 193. Son días hábiles todos los del año con excepción de los sábados y domingos, los de descanso obligatorio, los festivos que señale el calendario oficial y aquéllos en que el Tribunal suspenda sus labores.

Artículo 194. Los tribunales agrarios dejarán constancia en autos de todas sus actuaciones, en las cuales intervendrá el magistrado y autorizará con su firma el secretario de acuerdos.

Artículo 195. Las promociones de las partes y terceros, así como los informes y comunicaciones de las autoridades deberán presentarse por escrito en idioma español y contener la firma autógrafa del promovente. Si quien debiera hacerlo no supiera o no pudiera firmar, imprimirá su huella digital.

En el caso de las promociones que presenten los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas en lo individual, en su lengua, dialecto o idioma, no necesitarán acompañarse de su traducción al español. El tribunal ordenará la traducción correspondiente.

Artículo 196. Para cada asunto se formará un expediente con los documentos relativos al mismo, que podrá ser consultado por cualquier persona que esté acreditada legalmente para ello.

Las partes pueden pedir en todo tiempo, a su costa, copias certificadas por el secretario de acuerdos de cualquier constancia o documento original o certificado que obre en los autos y que señale de manera precisa el so-

licitante, las que mandará expedir el tribunal sin audiencia previa de las partes.

Los tribunales agrarios llevarán un registro en que se asentarán por días y meses los nombres de actores y demandados y el objeto de la demanda, destacándose todos aquellos actores y demandados que se identifiquen como indígenas.

Artículo 197. El tribunal en su primer auto solicitará a las partes autorización para hacer públicos sus nombres en caso de consultas previstas por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de ser omisas, se tendrá por otorgada dicha autorización.

Artículo 198. El secretario hará constar el día y la hora en que se presente un escrito, y dará cuenta con él dentro de los tres días siguientes, sin perjuicio de hacerlo desde luego, cuando se trate de un asunto urgente.

Inmediatamente después de que se hayan asentado las actuaciones del día o agregados al expediente los documentos recibidos, el Secretario de Acuerdos, vigilará que se folien las fojas respectivas y rubricará cada una de ellas, poniendo el sello del tribunal en el fondo del cuaderno, de manera que abarque las dos caras.

El Secretario vigilará, que se guarden con la seguridad debida los expedientes originales. Los billetes de depósito, cheques de caja y demás valores que entreguen las partes, se guardarán en el secreto del tribunal. En ningún caso se resguardará dinero en efectivo.

Artículo 199. Los documentos presentados por las partes les serán devueltos al terminar la audiencia, sólo si así lo solicitan, tomándose razón de ello en el expediente, previa copia certificada que se agregue a los autos.

Si alguna de las partes manifestara su oposición a la devolución de las constancias, porque pretendiera impugnar la autenticidad o contenido de dichos documentos, o en caso de que el magistrado considere que son imprescindibles dentro del expediente, éste resolverá lo procedente.

Artículo 200. Para la facilidad y rapidez en el despacho, los emplazamientos, citatorios, órdenes, actas y demás documentos necesarios, se extenderán de preferencia en formatos impresos que tendrán los espacios que su ob-

jeto requiera y los cuales se llenarán haciendo constar en un breve extracto claro y legible, lo indispensable para la exactitud y precisión del documento.

Artículo 201. Los términos se contarán a partir del día siguiente de aquél en el que surta efectos la notificación correspondiente y se contará en ellos completo el día de su vencimiento. En los términos no se computarán los días en que no labore el tribunal.

Cuando el domicilio de la persona que deba ser notificada se encuentre fuera del lugar de residencia del Tribunal, éste podrá ampliar el término de que se trate, en función de la distancia y/o de los medios de comunicación a razón de un día por cada 100 kilómetros.

Artículo 202. Cuando fueren varias las partes, el término se contará desde el día siguiente a aquel en que todas hayan quedado notificadas, si el término fuere común a todas ellas.

Artículo 203. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho no tenga fijado un término, éste será el de tres días hábiles.

Artículo 204. En los juicios agrarios, la inactividad procesal o la falta de promoción de las partes durante el plazo de cuatro meses producirán la caducidad.

La caducidad tiene como efecto anular los actos procesales verificados y sus consecuencias; entendiéndose como no presentada la demanda y, en cualquier juicio futuro sobre la misma controversia, no puede invocarse lo actuado en el proceso caduco.

Artículo 205. Las diligencias que no puedan practicarse en la circunscripción territorial del tribunal en que se siga el juicio, deberán encomendarse, mediante exhorto, al tribunal correspondiente.

Los exhortos y despachos se expedirán al día siguiente al en que se emita el acuerdo que los ordene.

Los exhortos y despachos que se reciban, se acordarán dentro de los tres días siguientes a su recepción y se diligenciarán dentro de los cinco días siguientes, a no ser que lo que haya de practicarse exija necesariamente mayor tiempo. En este caso, el tribunal requerido fijará el plazo que considere necesario.

Artículo 206. Para el exacto desahogo de sus despachos, el Tribunal Superior Agrario puede encomendar la práctica de toda clase de diligencias al Tribunal Unitario Agrario competente, autorizándolo para proveer lo necesario, para su cumplimiento.

Artículo 207. Las autoridades administrativas de los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, auxiliarán sin excusa alguna a los tribunales agrarios en la realización de las diligencias y actuaciones en que se requiera su participación.

Artículo 208. Las cartas rogatorias se tramitarán por vía judicial y por intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos correspondientes.

Las cartas rogatorias contendrán la petición a la autoridad competente para la realización de las actuaciones que el tribunal estime necesarias dentro del juicio y los datos informativos correspondientes.

El tribunal que las expida acompañará las copias certificadas, cédulas, copias de traslado y demás anexos procedentes.

Artículo 209. La tramitación del juicio se interrumpirá por:

I. El fallecimiento de alguna de las partes, hasta en tanto el causahabiente del finado o quien acredite interés jurídico en la sucesión, se apersona en el juicio.

II. El fallecimiento del representante legal de cualquiera de las partes, hasta por un mes, a fin de que ésta provea su sustitución, en caso de no presentarse, será la Procuraduría Agraria quien le represente.

III. El acontecimiento de desastres naturales que afecten notablemente las vías de comunicación y la prestación de servicios públicos en la jurisdicción del tribunal, a juicio del magistrado del tribunal unitario agrario correspondiente; y

IV. En los demás casos señalados en este ordenamiento.

Capítulo IV De la Jurisdicción y Competencia

Artículo 210. Son de jurisdicción federal agraria, todas las cuestiones que tiendan a garantizar la seguridad jurídica en la propiedad, posesión o disfrute de bienes y derechos agrarios, ya sean de carácter ejidal, comunal y de la pequeña propiedad; y en general, todas las cuestiones que tiendan a la administración de justicia agraria, tuteladas por ésta y otras leyes relacionadas directamente con el régimen jurídico agrario.

Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley o en otras disposiciones legales respecto de actos que sean de naturaleza agraria.

Artículo 211. Los tribunales unitarios agrarios serán competentes para conocer dentro de la circunscripción territorial que les corresponda, de las controversias siguientes:

I. Por límites de terrenos entre núcleos de población ejidal o comunal, así como entre estos y pequeños propietarios, sociedades o asociaciones;

II. De la restitución de tierras, bosques y aguas, a los núcleos de población ejidal o comunal, que hayan sido privados ilegalmente de las propiedades o posesiones que les fueron materialmente entregadas en la ejecución de sus resoluciones presidenciales o sentencias de los tribunales agrarios, por actos de autoridades administrativas federales, estatales, del Distrito Federal o municipales, resoluciones de jurisdicción voluntaria, o por actos de particulares en los términos de esta ley;

III. De juicios de nulidad contra resoluciones de autoridad, formal o materialmente agrarias, que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación;

IV. De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los actos, acuerdos, decretos o resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que constituyan, alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación de carácter agrario;

V. De las omisiones en que incurran las autoridades agrarias y que deparen perjuicio a los sujetos agrarios que contempla esta ley;

VI. De las controversias que se deriven con motivo de la expropiación de los bienes ejidales o comunales; nulidad por falta de pago total o parcial de la indemnización por expropiación, así como de la reversión prevista en esta ley;

VII. Del reconocimiento del régimen comunal y de la exclusión de pequeñas propiedades ubicadas en dichas tierras;

VIII. De las controversias derivadas de la constitución, funcionamiento y liquidación de las asociaciones y sociedades previstas en esta ley;

IX. De las controversias relativas a terrenos baldíos y nacionales;

X. De las controversias que se susciten con motivo de la posesión de superficies en asentamientos humanos irregulares en tierras ejidales o comunales que no hayan salido del régimen agrario;

XI. De las controversias relativas a los contratos a que se refiere esta ley, celebrados por los núcleos agrarios;

XII. De los asuntos relativos a la protección de la integridad de las tierras, bosques y aguas de los pueblos y comunidades indígenas en ejidos y comunidades, a que se refiere el artículo 2o Constitucional y esta ley;

XIII. De las controversias que afecten los intereses colectivos de los núcleos agrarios;

XIV. De la nulidad de los acuerdos tomados en asambleas de ejidos o comunidades;

XV. De controversias por derechos o posesiones entre ejidatarios, comuneros, poseionarios o vecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos de representación del núcleo de población ejidal o comunal;

XVI. De la sucesión de derechos ejidales y comunales;

XVII. De las controversias relativas a los contratos a que se refiere esta ley, celebrados individualmente por los integrantes de los núcleos agrarios;

XVIII. De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria;

XIX. De la prescripción y restitución de parcelas;

XX. De los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra en las colonias agrícolas o ganaderas que no hayan adoptado el dominio pleno;

XXI. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras y derechos de agua, ejidales y comunales. En los conflictos de aguas, invariablemente se dará intervención a la Comisión Nacional del Agua;

XXII. De la ejecución de laudos arbitrales a que se refiere esta ley, previa determinación de que se encuentran apegadas a las disposiciones legales aplicables; y

XXIII. De los demás asuntos que determine esta ley y otras disposiciones derivadas del régimen jurídico agrario.

Artículo 212. El Tribunal Superior Agrario será competente para conocer:

I. Del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los tribunales unitarios agrarios en juicios que se refieran a controversias contenidas de la fracción I a la XIV del artículo anterior;

II. De los conflictos de competencia que se susciten en los tribunales unitarios agrarios;

III. De la integración de la jurisprudencia, conforme a las reglas que para tal efecto se establezcan en el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios;

IV. De los impedimentos y excusas de los magistrados, tanto del Tribunal Superior Agrario como de los Tribunales Unitarios Agrarios;

V. De las excitativas de justicia cuando los magistrados del Tribunal Superior no formulen sus proyectos o los magistrados de los Tribunales Unitarios no cumplan con los plazos establecidos, y

VI. De los demás asuntos que las leyes expresamente le confieran.

Corresponderá al magistrado ponente instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución definitiva para someterlo a la consideración y, en su caso, aprobación del Tribunal Superior Agrario.

Artículo 213. Cuando el tribunal, al recibir la demanda o en cualquier estado del procedimiento agrario se percate de que el litigio o asunto no litigioso no es de su competencia, en razón de corresponder a tribunal de diversa jurisdicción o competencia por razón de la materia, grado o territorio, suspenderá de plano el procedimiento y remitirá lo actuado al tribunal que considere competente. Lo actuado por el tribunal incompetente será nulo, salvo cuando se trate de incompetencia por razón de territorio.

Cuando el tribunal agrario recibiere inhibitoria de otro en que se promueva competencia y considerase debido sostener la suya, el mismo día lo hará saber al competidor y remitirá el expediente con el oficio inhibitorio, con informe especial, al tribunal superior agrario, el cual decidirá, en su caso, la competencia.

Capítulo V De las Partes

Artículo 214. Son partes en el juicio agrario:

I. El actor, persona física o moral que tenga interés en que la autoridad jurisdiccional declare o constituya un derecho o imponga una condena y ejercite alguna acción agraria;

II. El demandado, persona física o moral en contra de la cual el actor ejercita la acción.

Artículo 215. Es tercero la persona física o moral que acredite interés jurídico cuyo derecho pueda resultar afectado con el fallo que en su oportunidad se emita; quien podrá intervenir en el Juicio o ser llamado por el Tribunal.

Si el tercero interesado coadyuva con alguna de las partes, deben litigar unidos y nombrar un representante común.

Artículo 216. Las partes en el juicio o los promoventes en un procedimiento no litigioso, tendrán derecho a:

I. Exigir al tribunal agrario que cumpla los plazos y términos que marca esta ley, mediante la excitativa de justicia, conforme al procedimiento que establecen la Ley Orgánica y el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios;

II. Tener acceso al expediente agrario por sí o por conducto de sus autorizados para ello;

III. Obtener, a su costa, copias certificadas de los documentos originales o certificados que señalen con precisión y que integren el expediente del juicio;

IV. Plantear lo que a su juicio, constituya causa de impedimento para que el magistrado agrario conozca y resuelva del asunto, conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica y el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, y

V. Los demás derechos que les confiera el régimen jurídico agrario.

Artículo 217. Las partes en el juicio o los promoventes en un procedimiento no litigioso, estarán obligadas a:

I. Cumplir con la normatividad procesal agraria y con los requerimientos del tribunal, para la correcta prosecución del juicio;

II. Conducirse con probidad y respeto en el desarrollo del proceso, con su contraparte, y con los servidores públicos agrarios, y

III. Abstenerse de interponer actuaciones, incidentes o recursos maliciosos o notoriamente improcedentes, que obstaculicen el proceso agrario. Cuando se advierta que una de las partes promovió con el propósito de retrasar la solución del asunto, entorpecer u obstaculizar la actuación de la autoridad judicial, se impondrán a dicho promovente o a sus representantes legales, o a ambos, la corrección disciplinaria que corresponda.

Capítulo VI

De la Capacidad, Representación y Personalidad

Sección Primera De la Capacidad

Artículo 218. Los núcleos agrarios tendrán capacidad de ejercicio, la que ejercerán a través del comisariado ejidal o de bienes comunales, cuyos integrantes actuarán de manera conjunta, salvo lo previsto en el Reglamento Interno o cuando exista acuerdo de asamblea general que autorice su representación por uno de los integrantes del comisariado.

Para efectos de la representación del ejido o comunidad, los integrantes del comisariado no requieren de acuerdo de asamblea general que les autorice a realizar todos los actos procesales que sean necesarios para la defensa de los derechos del propio núcleo.

La facultad de otorgar poderes o mandatos a favor de terceros corresponde exclusivamente a la asamblea general.

Artículo 219. Los ejidatarios, comuneros, avecindados y poseionarios cuentan con capacidad para ejercitar sus derechos individuales sin que se requiera la conformidad de la asamblea general.

Artículo 220. En aquellos casos en que se controvierta el régimen de propiedad ejidal o comunal o que pueda haber una afectación al interés colectivo, el comisariado ejidal o de bienes comunales no podrá desistirse, allanarse o firmar convenio que resuelva el fondo del juicio, sin previo consentimiento de la asamblea.

Sección Segunda De la Representación y Personalidad

Artículo 221. Tienen representación legal para acudir al juicio agrario, a nombre de los ejidos y comunidades, los comisariados ejidales o de bienes comunales o, mandatario designado por la asamblea general.

Los sujetos agrarios en lo individual, las personas físicas o morales, podrán ser representadas ante los Tribunales Agrarios mediante apoderado general o especial. Tratándose de personas morales, el mandato se otorgará de acuerdo con lo previsto por las leyes que regulen

su constitución y funcionamiento, o en su caso, su estatuto.

Podrán actuar en el juicio los directamente interesados o sus representantes o apoderados legales; en cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos.

Artículo 222. Para acreditar la representación en juicio, cuando se trate de núcleos agrarios bastará el acuerdo de asamblea que conste en el acta respectiva y tratándose de ejidatarios, comuneros, sucesores de unos u otros, posesionarios y avecindados, la representación se podrá otorgar mediante poder notarial o carta poder firmada ante dos testigos. El poder también podrá ser otorgado por el interesado directamente ante el Tribunal Agrario.

Artículo 223. El asesor legal de los ejidatarios, posesionarios, comuneros o núcleos agrarios, deberá actuar siempre en favor de los intereses de sus representados.

Artículo 224. El tribunal no admitirá de los representantes legales ningún desistimiento, allanamiento, transacción, convenio de conciliación o cesión de bienes que afecten los intereses de sus representados, sin la ratificación expresa de éstos. Tratándose de los núcleos agrarios, se requerirá el consentimiento de la asamblea.

Artículo 225. Cuando en un juicio dos o más personas ejerciten la misma acción u opongan la misma excepción o defensa, deberán litigar unidas y con una representación común, salvo que los colitigantes tengan intereses opuestos. El representante común tendrá todas las facultades y obligaciones de un mandatario judicial.

Si se trata de la parte actora, el nombramiento de representante común deberá hacerse en el escrito de demanda o al inicio de la audiencia de ley. En el caso de la demandada, el nombramiento se hará en el escrito de contestación o en la audiencia a que se ha hecho mención. Si el nombramiento no lo hacen las partes con la oportunidad señalada, el tribunal agrario lo hará escogiendo de entre los propios interesados.

El representante común tendrá los derechos, obligaciones y responsabilidades inherentes a todo mandatario judicial.

Artículo 226. Las partes podrán revocar en cualquier momento la designación de representante común, de-

signando a otro, siempre que la promoción sea suscrita por la mayoría de los actores o demandados.

Artículo 227. Los ejidatarios y los comuneros acreditarán su derecho para acudir a juicio agrario con cualquiera de los siguientes documentos:

- I. Certificado parcelario o de derechos agrarios;
- II. Certificado de derechos comunes;
- III. Certificado o constancia de comunero;
- IV. Acta de asamblea donde se le haya reconocido tal carácter;
- V. Constancia que expida el Registro Agrario Nacional;
- VI. Sentencia de un tribunal agrario o resolución presidencial en que se le reconozca tal carácter, y
- VII. Cualquier otra constancia fehaciente que a juicio del magistrado sea procedente.

Artículo 228. Los posesionarios y los avecindados acreditarán su derecho con el acta de asamblea o sentencia del tribunal agrario que les reconoció dicha calidad, el certificado que les haya expedido el Registro Agrario Nacional o cualquier otro documento que haga prueba fehaciente a juicio del Tribunal Unitario Agrario.

Artículo 229. Los pequeños propietarios, los colonos, las sociedades propietarias de tierras y las demás figuras asociativas, acreditarán su derecho o personalidad con los títulos, escrituras constitutivas o cualquier otro documento que establezca la ley y que a juicio del tribunal sea suficiente.

Cuando los poseedores sean parte en un juicio agrario, no se exigirá documento alguno para que acrediten su interés jurídico.

Artículo 230. La personalidad de los integrantes de los órganos de representación y vigilancia de los núcleos agrarios se acreditará con el original o copia certificada del acta de asamblea en la que hayan sido electos para sus respectivos cargos o con las credenciales o constancias que expida el Registro Agrario Nacional.

Artículo 231. La personalidad de quienes concurren al juicio en representación de las partes será acreditada por el actor en el escrito inicial de demanda y por el demandado en la audiencia de ley; de no acreditarse por el actor, el tribunal agrario deberá prevenirlo para que lo haga en el término de cinco días; de no hacerlo, se desechará la demanda. En el supuesto de que se trate de la parte demandada, se le hará la misma prevención y, de no acreditarla, se tendrá por no contestada la demanda.

Cuando los integrantes del comisariado ejidal o de bienes comunales no puedan acreditarla, el tribunal deberá solicitar al Registro Agrario Nacional, la constancia correspondiente.

Artículo 232. Todas las personas físicas que acrediten algún carácter ante los tribunales agrarios, además de la documentación señalada en los artículos que anteceden, se identificarán mediante credencial expedida por el Registro Agrario Nacional, credencial del elector o cualquier otro documento oficial vigente con fotografía, a satisfacción del tribunal.

Artículo 233. Las personas físicas que no puedan acreditar de manera documental el carácter con el que se ostenten ante los tribunales agrarios, podrán hacerlo mediante otras pruebas que a juicio del tribunal sean suficientes para dicho fin, siempre y cuando establezcan las causas de la imposibilidad para hacerlo en términos de las disposiciones anteriores.

Artículo 234. Las personas morales acreditarán su personalidad con los documentos públicos que establezcan las leyes conforme a las cuales fueron constituidas.

Artículo 235. Las autoridades y los servidores públicos en general acreditarán su carácter con la constancia de su nombramiento.

Capítulo VII De los Incidentes

Artículo 236. Se tramitarán en forma de incidentes las cuestiones relativas a:

I. Incompetencia;

II. Daños y perjuicios relacionados con la garantía y contragarantía otorgada para la suspensión;

III. Conexidad;

IV. Reposición de autos, y

V. Ejecución de sentencia.

Artículo 237. Los incidentes de incompetencia y de daños y perjuicios a que se refiere la fracción II del artículo anterior, que se susciten en la substanciación del procedimiento agrario se resolverán en forma previa a la realización de la audiencia, salvo los que se susciten con posterioridad.

Artículo 238. Las demás cuestiones incidentales que se susciten ante los tribunales agrarios se resolverán conjuntamente con lo principal, excepto los que se refieran a la ejecución de la sentencia.

Artículo 239. Las cuestiones incidentales señaladas en el artículo anterior se resolverán conforme a las reglas siguientes:

I. Promovido el incidente, el tribunal correrá traslado a la contraparte por el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

II. Desahogada la vista, el tribunal se allegará de los elementos de juicio para emitir la resolución correspondiente, la que no excederá de tres días hábiles; y

III. Transcurrido el término de la vista, si la contraparte no promueve, el tribunal resolverá de plano el incidente.

Artículo 240. La conexidad sólo procede cuando se trate de juicios que se sigan ante el mismo tribunal y se resolverá luego que se promueva, sin necesidad de audiencia especial ni otra actuación.

Artículo 241. Se tramitará en forma incidental la reposición de autos o de expediente, si se perdieren alguna constancia o el expediente, lo cual podrá hacerse de oficio por el tribunal o a petición de parte.

Sin acuerdo previo, el secretario hará constar desde luego, bajo su responsabilidad y dentro de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de la pérdida, la existencia anterior y falta posterior del documento o

el expediente, haciéndolo del conocimiento de las partes y procederá a practicar las investigaciones del caso y a tramitar de inmediato la reposición de los autos, y señalará día y hora para que tenga lugar una audiencia, en la que las partes deberán aportar todos los elementos, constancias y copias que obren en su poder, la cual se llevará a cabo en un término no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la notificación; en la misma audiencia dará vista a las partes y les concederá el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

El tribunal podrá ordenar se practiquen aquellas actuaciones y diligencias necesarias para reponer los autos. Con el material recabado el tribunal decretará la reposición mencionada.

Cuando no sea posible reponer todas las actuaciones, se tendrá por probada plenamente la existencia de las que se inserten o mencionen en el cuaderno formado por la secretaría de acuerdos para este efecto.

Capítulo VIII

De las Diligencias Precautorias y Suspensión de Actos de Autoridad

Artículo 242. Los tribunales agrarios proveerán, a petición de parte, las diligencias precautorias necesarias para mantener la situación de hecho existente y conservar la integridad de la materia del litigio, con el objeto de proteger a los interesados en los bienes y derechos agrarios controvertidos.

Para pronunciar la medida se dará vista a la contraparte para que en el término de veinticuatro horas, manifieste lo que a su derecho convenga; de ser omiso se le tendrá por conforme. En todo caso, el tribunal resolverá lo conducente.

Las medidas precautorias se decretarán de oficio únicamente cuando pueda verse afectado el interés colectivo de los núcleos agrarios o el interés social.

Las medidas precautorias, únicamente pueden ser decretadas una vez iniciado el juicio y hasta antes de dictarse la sentencia.

Artículo 243- Al resolver sobre el otorgamiento o la negativa de una medida precautoria, el tribunal deberá:

Apreciar su necesidad y disponerla de manera total o parcial;

Establecer con precisión su alcance y sus limitaciones, y

Determinar su vigencia y las demás modalidades que estime aplicables para asegurar los efectos de la medida sobre el fondo del asunto.

Artículo 244. La suspensión de actos de autoridad en materia agraria deberá decretarse a petición de parte cuando el acto, de llegar a consumarse, haga imposible volver las cosas al estado en que se encontraban, siempre y cuando no se siga perjuicio al interés general, ni se contravengan disposiciones de orden público.

Promovida la suspensión, el tribunal pedirá informe a la autoridad correspondiente, quien deberá rendirlo dentro del término de setenta y dos horas, transcurrido el cual, se resolverá de plano lo relativo a la suspensión; en su caso, se notificará de inmediato a la autoridad para su cumplimiento.

Los efectos de la suspensión únicamente consistirán en ordenar que cesen los efectos del acto y se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio.

Al conceder la suspensión, el tribunal procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio hasta su terminación definitiva.

La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Libro Primero, título segundo capítulo III, de la Ley de Amparo.

Artículo 245. En los casos en que proceda la suspensión o la medida precautoria, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el peticionario otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ellos se causaren si no obtuviese sentencia favorable en el juicio.

La fijación de la garantía la determinará el tribunal tomando en consideración las condiciones económicas de las partes y el valor objetivo de los bienes y derechos controvertidos.

En los casos en que se afecten recursos naturales no renovables de los núcleos agrarios, la medida de suspensión se otorgará sin exigir garantía.

Artículo 246. La parte contraria a la que haya obtenido la suspensión podrá solicitar al magistrado le fije una contragarantía que permita la ejecución de los actos impugnados, siempre y cuando el procedimiento no quede sin materia, la cual deberá ser suficiente para volver las cosas al estado que guardaban antes de la petición de suspensión.

Artículo 247. La garantía y la contragarantía se harán efectivas a través del incidente de daños y perjuicios, en el que el promovente deberá acreditar haber sufrido unos u otro o ambos.

El incidente deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes que la sentencia que resuelva el fondo del asunto ha causado ejecutoria. En caso contrario, el tribunal pondrá a disposición del otorgante la garantía o contragarantía presentada y autorizará su cancelación.

Título Segundo Del Juicio Agrario

Capítulo I De la Demanda

Artículo 248. El actor presentará su demanda por escrito o por comparecencia, en este último caso se solicitará a la Procuraduría Agraria coadyuve en su formulación por escrito de manera clara y concisa.

Cuando se trate de núcleos agrarios, ejidatarios, comuneros, posesionarios o avocados, la Procuraduría Agraria está obligada a prestar la asesoría necesaria en la defensa de los derechos y pretensiones de los mismos, cuando lo soliciten. A partir de esta intervención, dicha Procuraduría asumirá la representación legal del interesado.

Artículo 249. La demanda contendrá:

- I. El tribunal ante el cual se promueve;
- II. El nombre del actor y/o del asesor legal, el domicilio para recibir notificaciones en la sede del tribunal y las personas autorizadas para tal efecto;

III. El nombre del demandado y el domicilio donde deberá ser emplazado;

IV. Las pretensiones materia u objeto de su demanda;

V. Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente con claridad y precisión;

VI. En su caso, el nombre y domicilio de los terceros interesados, expresando las razones por las que se le imputa dicho carácter, y

VII. Los fundamentos de derecho en que sustente su acción y pretensión.

Si el actor no sabe o no puede firmar, asentará su huella digital y la demanda estará firmada, además, a su ruego, por la persona que designe para tal efecto.

Artículo 250. Con la demanda el actor deberá presentar el o los documentos con los que se acredite su personalidad y en los que funde su acción y acompañar las copias necesarias de la demanda y sus anexos para el traslado. Si no tuviere los documentos a su disposición, señalará el archivo, la dependencia o lugar en que se encuentren, acreditando que hizo solicitud previa a la interposición de la demanda, a efecto de que el tribunal, a petición de parte, requiera la expedición de las copias certificadas.

Artículo 251. La demanda sólo podrá ser aclarada o ampliada, por una sola vez, siempre y cuando existan nuevos elementos relacionados con el ejercicio de la acción.

Artículo 252. Presentada la demanda el tribunal la examinará y, si hubiera imprecisiones en la misma u omisiones de alguno de los requisitos previstos legalmente, deberá prevenir al promovente para que las subsane dentro del término de ocho días hábiles, que se contarán a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación personal de la referida prevención; transcurrido el cual, si nada manifestare el promovente o la prevención no fuera desahogada en los términos requeridos, se tendrá por no interpuesta.

Artículo 253. En el auto que admita la demanda se hará constar de manera clara y concisa lo siguiente:

I. Número de expediente con el que se radica;

II. Nombre y domicilio del actor;

III. Fecha de presentación de la demanda;

IV. Prestaciones que se reclaman;

V. Nombre y domicilio del demandado;

En su caso, nombre y domicilio de los terceros interesados, expresando las razones por las que se les imputa dicho carácter;

VI. Fecha y hora de la audiencia de ley, que deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda, y

VII. Requerimiento al actor de:

a. Asistir legalmente asesorado a la audiencia o en su defecto, acudir a la Procuraduría Agraria a solicitar que se le brinde el servicio correspondiente. No será motivo para diferir la audiencia, comparecer sin asesor legal a la misma.

b. Presentar en la audiencia los testigos y peritos que se relacionen con las pruebas que en su caso, vaya a ofrecer.

Artículo 254. Procede el desistimiento de la instancia, siempre y cuando sea aceptado por la parte demandada. No es necesaria la aceptación, cuando el desistimiento se verifica antes del emplazamiento.

Tratándose de desistimiento de la acción o de la instancia, ejercitado por un núcleo ejidal o comunal, en los que se involucren los intereses colectivos de éstos, el mismo deberá ser aprobado por la asamblea general.

Capítulo II

Del Emplazamiento y las Notificaciones

Artículo 255. Toda notificación surtirá efectos el día hábil siguiente al en que se practique.

Los actuarios tienen fe pública en las actuaciones que practiquen.

Artículo 256. Admitida la demanda, se emplazará al demandado para que comparezca a contestarla en la audiencia. El referido emplazamiento se deberá llevar a cabo por lo menos diez días hábiles antes de su celebración.

Artículo 257. El emplazamiento se efectuará al demandado en el lugar que el actor designe para ese fin, y que podrá ser:

a) El domicilio del demandado, su finca, su oficina, o principal asiento de negocios o el lugar en que labore, o

b) Su parcela u otro lugar que frecuente y en que sea de creerse que se halle al practicarse el emplazamiento.

Los terceros deberán ser notificados en términos similares al demandado.

A la cedula de emplazamiento se acompañará copia de la demanda y de sus anexos así como una copia del acuerdo de admisión.

En la cédula de emplazamiento se señalarán:

I. Fecha y hora en que tendrá verificativo la audiencia;

II. La obligación de contestar la demanda a más tardar en la audiencia de ley, en la que deberá comparecer con asesor jurídico, haciéndole saber que podrá ser asesorado gratuitamente por la Procuraduría Agraria; apercibido que de no comparecer a dicha audiencia se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda, y si comparece sin asesor legal, se llamará al abogado adscrito de la Procuraduría Agraria para que asuma la representación legal.

III. Que una vez acreditados en autos los asesores jurídicos de las partes, su inasistencia no será motivo de diferimiento de la audiencia.

IV. Que en la audiencia deberá ofrecer todas las pruebas que considere necesarias para su defensa y excepciones y acompañar las pruebas documentales que ofrezca, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo perderá su derecho a ofrecer pruebas y presentar documentos; y

V. Que a la audiencia deberá presentar a sus testigos y peritos, para el caso de que se relacionen con los medios de prueba que ofrezca, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no ofrecida la prueba.

Artículo 258. Las partes o promoventes podrán acompañar al funcionario agrario encargado de realizar el emplazamiento o notificación para facilitar la diligencia.

Artículo 259. Si el actuario no encuentra al demandado en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 257, deberá cerciorarse de manera fehaciente que el domicilio señalado corresponde a éste, en cuyo caso dejará citatorio para realizar la diligencia dentro de las veinticuatro horas siguientes; si en este tiempo no se encontrare, se practicará el emplazamiento por cédula, la que se entregará a la persona que atiende la diligencia, con la copia de la demanda y anexos.

Artículo 260. Al practicarse el emplazamiento se recabará el acuse de recibo y si la persona que debiera firmar no supiere o no quisiere hacerlo, se levantará acta circunstanciada por el actuario, que será agregada al expediente.

Artículo 261. Previa certificación del actuario de que no pudo hacer el emplazamiento al demandado en los lugares señalados por el actor, éste deberá comprobar que el demandado no tiene domicilio conocido e ignora su paradero. Cuando el tribunal cuente con esta información y cualquier otra que acredite los extremos anteriormente establecidos, se ordenará que el emplazamiento se haga por edictos a costa del actor, apercibiéndolo que en caso de promover la publicación de edictos conociendo el domicilio del demandado, se hará acreedor a las sanciones correspondientes.

Los edictos contendrán una breve síntesis de la demanda y del emplazamiento y se publicarán por dos veces dentro de un plazo de diez días, en uno de los diarios de mayor circulación en la región en que esté ubicado el núcleo agrario relacionado con el procedimiento, así como en la presidencia municipal que corresponda y en los estrados del tribunal.

La notificación practicada en la forma antes prevista, surtirá efectos una vez transcurridos quince días a partir de la fecha de la última publicación.

Si llegada la audiencia el demandado no comparece, por sí o por apoderado, el tribunal tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se seguirá el juicio, haciéndosele las ulteriores notificaciones por estrados.

Artículo 262. Quienes comparezcan ante los tribunales agrarios deberán señalar domicilio en la primera diligencia judicial en que intervengan, o en el primer escrito, el cual deberá estar ubicado en la población en que tenga su sede el tribunal respectivo. Cuando se trate de notificaciones personales, en caso de que el interesado o su representante no estén presentes en el domicilio señalado, éstas se harán por instructivo con la persona que atiende o se fijará en la puerta, sin necesidad de citatorio previo, elaborando la razón correspondiente. Las notificaciones personales así practicadas surtirán efectos legales plenos.

Mientras una de las partes no señale un nuevo domicilio en que han de hacerse las notificaciones, aún las personales, éstas seguirán haciéndose en el domicilio que para ello hubiere señalado, a menos que las personas indicadas ocurran espontáneamente al tribunal a notificarse. Cuando no se señale domicilio para recibir notificaciones, aún las personales, se harán en los estrados del tribunal.

Artículo 263. Serán personales las notificaciones siguientes:

I. El acuerdo de admisión, prevención, desechamiento y el que tenga por no interpuesta la demanda;

II. El emplazamiento a juicio al demandado, y en todo caso en que se trate de la primera notificación del juicio;

III. El auto que decrete medidas precautorias o suspensión de actos de autoridad agraria;

IV. La resolución interlocutoria que resuelva un incidente;

V. La suspensión y reanudación del procedimiento;

VI. Los casos que el tribunal estime urgentes o que por alguna circunstancia considere que las notificaciones deban ser personales;

VII. Las sentencias y los autos que pongan fin al juicio; y

VIII. Aquellas otras que la ley así lo ordene.

Artículo 264. La cédula de notificación deberá ser legible y contener como mínimo:

I. Lugar, hora y fecha en que se practique la notificación;

II. Número del expediente y nombre del actor y del demandado;

III. Nombre y domicilio de las personas que deban ser notificadas;

IV. Copia legible de la resolución o acuerdo del tribunal y de la documentación para el traslado en su caso, y

V. Nombre, firma y cargo de quien notifica.

Artículo 265. Las notificaciones realizadas en contravención a los requisitos establecidos en este ordenamiento serán nulas.

Capítulo III

De la Contestación de la Demanda

Artículo 266. El demandado, por sí o por conducto de su apoderado, podrá contestar las pretensiones del actor negándolas, allanándose total o parcialmente, oponiendo excepciones o reconviniendo.

Artículo 267. La contestación deberá producirse a más tardar el día de celebración de la audiencia, pudiendo hacerla por escrito o mediante comparecencia; en este último caso, y de no contar con asesor, el tribunal solicitará a la Procuraduría Agraria que coadyuve en su formulación en forma clara y concisa.

Si el demandado no comparece o se rehúsa a contestar la demanda, el tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte. El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos hechos sobre los que no se suscite controversia.

Artículo 268. La contestación de la demanda debe contener lo siguiente:

I. Tribunal ante el cual promueve;

II. Nombre del demandado y el domicilio para recibir y oír notificaciones en donde tenga su sede el tribunal, así como el nombre de las personas autorizadas para ello;

III. Las excepciones y defensas que oponga el demandado, debiendo de referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos, y expresando los que ignore cuando no sean propios; pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes; y

IV. En su caso, la reconvencción que solo se podrá plantear en contra del actor.

Artículo 269. Si el demandado opusiere reconvencción en contra del actor, lo hará precisamente al contestar la demanda y nunca después, debiendo contener los requisitos establecidos en el artículo 249 de esta ley. En la misma reconvencción se deberán ofrecer las pruebas que se estimen pertinentes.

En este caso, se correrá traslado al actor en el principal, para que esté en condiciones de contestar lo que a su derecho convenga y el tribunal diferirá la audiencia por un término que no exceda diez días hábiles, excepto cuando el reconvenido conteste en el mismo acto la reconvencción y esté de acuerdo en proseguir el desahogo de la audiencia.

Artículo 270. El demandado podrá allanarse a la demanda en todas o en algunas de sus partes.

Cuando el allanamiento, a juicio del magistrado, sea procedente y se refiera a todos y cada uno de los hechos de la demanda, se citará a las partes para oír sentencia; en caso contrario se continuará con la audiencia de ley.

Artículo 271. Para que el allanamiento a la demanda sea válido, tratándose de ejidatarios, comuneros, poseionarios o avecindados sea válida, deberá ser realizado por ellos mismos y no por sus representantes o apoderados.

Cuando se trate de los núcleos agrarios y se afecten los intereses colectivos, el allanamiento sólo será válida si es aprobado previamente por la asamblea general.

Artículo 272. Cuando la parte demandada, en su contestación a la demanda señale en contra de quién o quiénes, deba ejercerse la acción litigiosa, el tribunal dará vista a la parte actora con esta manifestación, para que en el mismo acto manifieste lo que a su interés convenga y en su caso, se emplazará a la o las personas señaladas para que sean llamados a juicio a deducir sus derechos.

Capítulo IV De la audiencia

Artículo 273. Las audiencias serán públicas, excepto cuando a criterio del magistrado se pudiera perturbar el orden o generar violencia.

Artículo 274. El tribunal deberá programar las audiencias en forma razonable, en orden a la complejidad de los asuntos, con la finalidad de evitar que su celebración registre dilaciones.

Si en la hora fijada para la celebración de una audiencia no se hubiere terminado la anterior, las personas citadas deberán permanecer en el tribunal hasta que llegue el turno del asunto respectivo, siguiendo rigurosamente el orden que les corresponda según la lista del día, la que debe estar fijada en los estrados del tribunal con una semana de anticipación.

Sección Primera De las Formalidades de la Audiencia

Artículo 275. El magistrado verificará si las partes fueron debidamente notificadas y en su caso, debidamente emplazadas de la celebración de la audiencia para determinar si tuvieron conocimiento de la misma.

El secretario de acuerdos dará cuenta al magistrado de las constancias recibidas que deban ser integradas al expediente.

Artículo 276. La audiencia se suspenderá en los casos siguientes:

- I. Cuando no concurra alguna de las partes y de autos se desprenda que no fue emplazada o notificada debidamente;
- II. Cuando sea necesario conceder tiempo para el desahogo de alguna diligencia, a criterio del propio tribunal;

III. Por el fallecimiento de alguna de las partes o de sus asesores legales;

IV. Cuando el tribunal no esté en posibilidades de funcionar por caso fortuito o de fuerza mayor;

V. Cuando el magistrado esté impedido para presidir la audiencia, a menos que exista habilitación del Tribunal Superior Agrario, para que el secretario de acuerdos pueda sustanciar el procedimiento, quien informará a las partes de la ausencia del magistrado titular y de su habilitación; y

VI. Cuando alguna de las partes, por causa justificada no pueda asistir, haciéndolo del conocimiento del tribunal oportunamente y éste así lo considere y acuerde;

Artículo 277. En las audiencias el magistrado y el secretario de acuerdos observarán las disposiciones siguientes:

- I. El magistrado presidirá la audiencia, asistido del secretario de acuerdos;
- II. Cuando dos o más personas ejerciten la misma acción u opongan las mismas excepciones, el magistrado solicitará que designen a un representante común;
- III. El magistrado proveerá lo necesario para que la intervención de las partes, las declaraciones de los testigos, los dictámenes de los peritos y en general todas las pruebas tengan relación con la materia del juicio; pudiendo desechar las probanzas que no tengan relación con los hechos, o no sean idóneas;
- IV. Las intervenciones del magistrado y las de las partes se asentarán en el acta de la audiencia, y
- V. El secretario de acuerdos dará fe de lo asentado en el acta de la diligencia.

Artículo 278. Si llegada la audiencia no estuvieren presentes el actor ni el demandado, a pesar de haber sido debidamente notificado y emplazado, respectivamente, se impondrá una multa al actor de hasta cien días de salario mínimo general en la zona de que se trate, en el entendido de que no se señalará nueva fecha para audiencia hasta en tanto no se acredite el pago correspondiente;

hecho lo cual, se notificará y emplazará, a las partes la fecha y hora de la nueva audiencia. Se apercibirá al actor de que en caso de inasistencia a esta nueva audiencia, su demanda se tendrá por no interpuesta, ordenándose el archivo del asunto; y al demandado que de no comparecer nuevamente, se continuará con el juicio y se tendrán por ciertos los hechos de la demanda.

Cuando el demandado este ausente por no haber sido emplazado, el magistrado fijará nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia, ordenando su debido emplazamiento.

En caso de que no esté presente el actor pero sí el demandado, se suspenderá la audiencia y se aplicará al ausente lo previsto en el primer párrafo del presente artículo.

Cuando se presente durante ella el demandado continuará está con su intervención, según el estado en que se encuentre y no se le admitirá prueba sobre ninguna excepción si no demostrare el impedimento de caso fortuito o fuerza mayor para presentarse a contestar la demanda.

Artículo 279. Si alguna de las partes no compareció a la audiencia, por causas de caso fortuito o fuerza mayor, lo demostrarán al tribunal dentro de los cinco días hábiles siguientes, el cual podrá acordar la reposición del procedimiento a partir de la audiencia.

Sección Segunda Del Desarrollo de la Audiencia

Artículo 280. El magistrado abrirá la audiencia y en ella se observarán las reglas siguientes:

I. Se hará constar la presencia del magistrado titular y del secretario de acuerdos, así como de las partes y sus asesores legales, debidamente identificados;

II. El magistrado exhortará a las partes a conciliar sus pretensiones, dejando constancia de ello en el acta, sin perjuicio de hacerlo nuevamente durante el procedimiento. Si se lograra la avenencia que resuelva el fondo de la controversia, sin sujetarla a condición posterior, se suscribirá el convenio respectivo, se calificará y en su caso, se aprobará por el tribunal y se elevará a la categoría de sentencia dándose por terminado el juicio.

El magistrado verificará que las partes que suscriban el convenio tengan la capacidad de disponer del derecho en litigio.

En caso de que se encuentren involucrados los intereses colectivos de un núcleo agrario se requerirá, previa a la calificación, la aprobación de la asamblea general correspondiente.

En caso contrario se continuará con las siguientes etapas de la audiencia:

III. La parte actora ratificará y en su caso, ampliará su demanda; en seguida la parte demandada formulará su contestación, opondrá excepciones y defensas, y si lo considera, reconvencción.

Si al contestar la demanda se opusiere reconvencción, se correrá traslado de ella al actor para que la conteste, lo que podrá hacer en ese mismo acto o si lo considera necesario para la mejor defensa de sus intereses, podrá solicitar se suspenda la audiencia, la cual deberá reanudarse en un término no mayor a diez días. También podrá ser diferida la audiencia, cuando se amplíe la demanda.

IV. Excepto el caso previsto en la fracción anterior, la audiencia continuara procediéndose al ofrecimiento de las pruebas propuestas por las partes en sus respectivos escritos o intervenciones; el magistrado acordará la admisión o desechamiento de las pruebas y procederá, en su caso, al desahogo de las mismas;

Las partes podrán hacerse mutuamente las preguntas y repreguntas que consideren pertinentes e interrogar a los testigos y peritos, siempre y cuando se relacionen con la litis;

El magistrado podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a las partes, terceros con interés, testigos y peritos; carearlos entre sí, examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocer por peritos.

Si alguna de las partes rehusare contestar las preguntas que se le hagan, el magistrado lo asentará así y lo valorará al momento de resolver en definitiva;

V. Desahogadas las pruebas, el magistrado exhortará a las partes para que presenten sus alegatos en la misma audiencia. En el caso de que los alegatos no se formulen en la propia audiencia, se concederá a las partes un término de tres días para que lo hagan, apercibiéndolas que de no hacerlo, precluirá su derecho.

VI. Oídos los alegatos o precluido el derecho de las partes, el tribunal, si la naturaleza del asunto lo permite, dictará la sentencia; en caso contrario, citará para pronunciarla dentro de los 15 días siguientes, contados a partir de la audiencia.

Artículo 281. En caso de que el magistrado se percate de la existencia de diligencias pendientes de desahogar que impidan dictar sentencia, ordenará la realización de las mismas, notificando, en su caso, a las partes.

Capítulo V De las Pruebas

Artículo 282. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones o defensas. Sin embargo, para el conocimiento de la verdad material respecto de la controversia planteada, el magistrado podrá acordar de oficio, en todo tiempo, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia probatoria, girar oficios a las autoridades para que expidan documentos y apremiar a las partes o a terceros para que exhiban los que tengan en su poder o para que comparezca cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos controvertidos.

En la práctica de estas diligencias, el magistrado actuará con objetividad e imparcialidad para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad.

Artículo 283. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos y costumbres. Los hechos notorios pueden ser invocados por el magistrado, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.

Artículo 284. En el juicio agrario son admisibles los siguientes medios de prueba:

I. Confesional;

II. Documental pública y privada;

III. Pericial;

IV. Testimonial;

V. Inspección judicial;

VI. Instrumental de actuaciones;

VII. Presuncional;

VIII. Medios de prueba aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica, y

IX. En general todos aquellos que no sean contrarios a la ley, que estén relacionados directamente con los hechos materia de la controversia.

Cuando intervengan pueblos o comunidades indígenas o individuos pertenecientes a estos en el proceso agrario, se prestará especial atención a las pruebas periciales antropológica y paleográfica.

Artículo 285. El magistrado acordará en la propia audiencia sobre la admisión de las pruebas ofrecidas y la forma de su desahogo, atendiendo a la naturaleza de cada una de ellas, las que deberán ser idóneas para el conocimiento de la verdad material. Las pruebas que no se encuentren relacionadas con la materia del juicio, se desecharán fundando y motivando dicha determinación.

Sección Primera De la Prueba Confesional

Artículo 286. La confesión debe ser libre y puede ser expresa o tácita. Es expresa, la que se hace de manera clara y precisa al formular o contestar la demanda, al absolver posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; es tácita, la que se deduce de los hechos expuestos y de las constancias que obran en el expediente.

Artículo 287. Para el desahogo de la prueba confesional, el pliego cerrado que contenga las posiciones podrá presentarse desde el ofrecimiento de la prueba y, en este caso, deberá guardarse en el secreto del tribunal, asentándose la razón respectiva en la cubierta, que firmará el secretario de acuerdos. Llegado el día del desahogo de la prueba, el magistrado abrirá el pliego y calificará las posiciones. En el caso de que el oferente de la prueba opte por la formulación verbal y directa de

las posiciones, éstas se articularán en la etapa de la audiencia señalada para ese fin, ajustándose a las reglas a que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 288. En el desahogo de la prueba confesional se observarán las reglas siguientes:

I. Las posiciones deben articularse en términos claros y precisos; no han de ser insidiosas; deben formularse en sentido afirmativo, procurando que cada una no tenga más de un hecho y éste sea propio del quien las absuelve. Se tienen por insidiosas las posiciones que se dirigen a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, con objeto de obtener una confesión contraria a la verdad;

II. Si son varios los que han de absolver posiciones al tenor de un mismo pliego, las diligencias se practicarán separadamente y en un mismo día, siempre que fuere posible, evitando que los que absuelvan primero se comuniquen con los que hayan de absolver después;

III. En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver posiciones esté asistida por su asesor legal u otra persona, ni se le dará traslado de las posiciones. Si el absolvente es indígena, o no hable o no entienda el español, deberá ser asistido por un intérprete;

El magistrado deberá explicar el alcance de la posición a absolverse cuando se trate de ejidatarios, comuneros, indígenas, pequeños propietarios parvifundistas, o cualquier otra persona que por su condición socio-cultural y étnica no comprenda su sentido;

IV. Tomada la protesta de ley al absolvente, el magistrado procederá al interrogatorio. Las contestaciones serán categóricas, en sentido afirmativo o negativo, pero el absolvente podrá agregar las explicaciones que considere necesarias, y en todo caso, dará las que el magistrado le solicite. Si la parte contraria al oferente estima ilegal una pregunta, podrá manifestarlo al tribunal, a fin de que vuelva a calificar. Si se declara procedente, se le repetirá para que la conteste, apercibida de tenerla por confesa si no lo hace;

V. Si la parte absolvente se niega a contestar, contesta con evasivas, o dice ignorar los hechos propios, el magistrado la apercibirá de tenerla por confesa si insiste en su actitud.

Artículo 289. Terminado el interrogatorio, la parte que lo formuló puede articular nuevas posiciones al absolvente, oral y directamente en el mismo acto. En este caso, cuando el magistrado considere que una pregunta formulada no se ajusta a lo dispuesto por el artículo anterior, no la calificará de legal, lo cual se asentará en autos si así lo desea el oferente.

Artículo 290. Se tendrá por confesa a la parte que tenga que absolver posiciones cuando:

I. Sin causa justificada no comparezca, en cuyo caso el tribunal abrirá el pliego de posiciones si lo hay, o serán formuladas verbal y directamente por el oferente, las calificará y hará la declaración;

II. Insista en negarse a contestar o lo haga con evasivas, y

III. Manifieste en forma reiterada, ignorar los hechos propios.

Artículo 291. Las autoridades, las entidades y organismos que formen parte de la Administración Pública Federal o local, absolverán posiciones por medio de oficio, en el que se insertarán las posiciones que quiera hacerle la contraparte, para que por vía de informe, sean contestadas dentro del término que señale el tribunal. En el oficio se apercibirá a la parte absolvente de tenerla por confesa si no contesta dentro del término que se le haya fijado, o si no lo hace categóricamente afirmando o negando los hechos.

Sección Segunda De la Prueba Documental

Artículo 292. Son documentos públicos aquellos expedidos por un servidor o fedatario públicos en ejercicio de sus atribuciones, que contengan los sellos, firmas u otros signos exteriores que prevengan las leyes.

Artículo 293. Los documentos públicos expedidos por autoridades competentes, federales, estatales, municipales o del Distrito Federal harán prueba plena en el juicio, sin necesidad de legalización.

Artículo 294. Los documentos que se presenten en lenguas indígenas o que hayan sido expedidos en la época colonial, podrán acompañarse de su traducción y de un dictamen pericial sobre su autenticidad y alcance legal. El dictamen mencionado deberá ser realizado por el experto que designe alguna institución oficial con atribuciones en la materia. Cuando no se acompañe la traducción, el tribunal la ordenará y designará al traductor que deba realizarla.

Artículo 295. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas en el artículo 292.

Artículo 296. Las partes podrán ofrecer como prueba documentos públicos o privados preexistentes, compulsas de éstos, o bien solicitar que se les expidan en vía de informe de autoridad las constancias que prueben los hechos que funden su reclamación.

Artículo 297. La autenticidad de los documentos deberá ser objetada por las partes en la audiencia de ley, siempre que ofrezcan las pruebas necesarias para acreditar la objeción que formulen.

Artículo 298. Para acreditar la autenticidad de un documento, las partes podrán solicitar el cotejo de firmas, letras o huellas digitales, designando el documento que se considerará indubitado con el que deba hacerse el cotejo o bien solicitar al tribunal que se cite al interesado para que en su presencia se estampe la firma, letra o huella digital para el cotejo o, en su caso, reconozca si es suya la que se impugna o ratifique el contenido del documento.

Sección Tercera De la Prueba de Inspección Judicial

Artículo 299. La inspección judicial tendrá por objeto aclarar o verificar los hechos relativos a la contienda, percibidos por los sentidos y que no requieran conocimientos técnicos especiales; ésta se llevará a cabo previa citación a las partes de cuando menos cuarenta y ocho horas, señalando el lugar en que ha de llevarse a cabo, día y hora.

Las partes, sus asesores legales o ambos, podrán concurrir a la inspección y hacer las observaciones que estimen oportunas. De no concurrir a la misma, el actuario adscrito procederá a realizar la diligencia conforme a lo ordenado en autos.

De la diligencia se levantará acta circunstanciada que firmarán los que en ella intervengan, si así lo desean, lo que se hará constar por el funcionario encargado de la misma.

A juicio del tribunal o a petición de parte, se tomarán fotografías, registros fonográficos o video grabaciones del lugar u objetos inspeccionados.

La parte que ofrezca la inspección judicial deberá precisar el propósito y materia de la misma, así como señalar la ubicación del bien que deba examinarse y proporcionar los medios requeridos para el desahogo de la prueba.

Sección Cuarta De la Prueba Instrumental de Actuaciones

Artículo 300. La instrumental es el conjunto de actuaciones que obren en el expediente formado con motivo del juicio, y que el tribunal está obligado a tomar en cuenta al momento de emitir sentencia.

Sección Quinta De la Prueba Testimonial

Artículo 301. Podrán ser testigos los que tengan conocimiento de los hechos controvertidos.

Artículo 302. En la audiencia, el oferente de la prueba testimonial deberá presentar a sus testigos, que no podrán exceder de tres sobre los hechos controvertidos; cuando una de las partes, bajo protesta de decir verdad, no pueda presentarlos, por imposibilidad justificada, lo hará saber al tribunal y solicitará que por su conducto ordene, por una sola vez, que sean citados a declarar.

El tribunal podrá acordar la admisión de más testigos, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad, en la aplicación del principio de objetividad.

En caso de inasistencia injustificada del testigo no obstante su legal citación, se declarará desierta la prueba.

Los gastos que hagan los testigos y los perjuicios que sufran por presentarse a declarar serán satisfechos por la parte que los ofrezca.

Artículo 303. Cuando se acredite que las personas que deban rendir testimonio tengan más de setenta años o es-

tén incapacitadas para comparecer al tribunal personalmente, el magistrado podrá autorizar al secretario de acuerdos o al actuario para recibir su declaración en el lugar en que se encuentren, con la presencia de las partes y sus asesores.

Artículo 304. En el desahogo de la prueba testimonial se observarán las reglas siguientes:

I. Después de tomarse al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirlo de las penas en que incurre el que se conduce con falsedad, se hará constar su nombre, edad, estado civil, lugar de residencia, ocupación, domicilio; si es pariente consanguíneo o afín de alguno de los litigantes y en qué grado; si tiene interés directo en el juicio o en otro semejante, y si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes. Hecho lo anterior, se procederá al desahogo;

II. Para el examen de los testigos se podrán presentar interrogatorios escritos, o bien las preguntas se podrán formular verbal y directamente por las partes o sus asesores legales. Primero interrogará el oferente de la prueba y a continuación las demás partes, pudiendo el tribunal permitir que con motivo de una respuesta, hagan las demás partes las repreguntas relativas a ella o formularlas el propio tribunal;

III. Las preguntas y repreguntas deben estar articuladas en términos claros y precisos, conducentes a la cuestión debatida, que una sola no comprenda más de un hecho y en el número suficiente, a juicio del magistrado, para alcanzar la verdad. Las que no satisfagan estos requisitos, serán desechadas de plano;

IV. Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos puedan presenciar ni escuchar las declaraciones de los otros;

V. Cada respuesta del testigo se hará constar en autos, en forma tal que al mismo tiempo se comprenda en ella el sentido o términos de la pregunta formulada;

VI. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho y el tribunal deberá exigirla y asentarla en autos, y

VII. El testigo firmará al pie de su declaración y al margen de las hojas en que se contenga.

Artículo 305. Si el testigo no habla español, rendirá su declaración por medio de intérprete que será nombrado por el tribunal, quién deberá rendir la protesta de ley, previo el desempeño de su encargo.

Artículo 306. Las partes solo pueden tachar al testigo o sus declaraciones en el acto del examen, por cualquier circunstancia que, en su concepto, afecte su credibilidad, lo que será valorado por el magistrado al emitir sentencia.

Sección Sexta De la Prueba Pericial

Artículo 307. La prueba pericial tendrá lugar en cuestiones que requieran el conocimiento especializado de alguna ciencia, técnica, arte u oficio, para valorar hechos y circunstancias relevantes en el proceso o adquirir certeza sobre ellas y en los casos que expresamente lo prevenga la ley.

Los peritos deben tener título en la ciencia, técnica o arte sobre la cuestión en que ha de oírse su opinión, si aquel estuviera legalmente reglamentado; si no está o estándolo no hubiera peritos en el lugar, podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas en la materia, a juicio del tribunal, aún cuando no tengan título.

Artículo 308. Cuando se ofrezca prueba pericial se deberá aportar el cuestionario para los peritos exhibiendo las copias que sean necesarias. El tribunal concederá a las demás partes el término de cinco días para que adicionen el cuestionario, apercibiéndolas que de no hacerlo así la probanza se desahogará con el formulado por el oferente.

Al promoverse la prueba pericial el tribunal hará la designación del perito que estime conveniente para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito en el término de cinco días, apercibiéndolas que de no hacerlo así, precluirá su derecho.

En los siguientes cinco días hábiles a su designación, los peritos deberán aceptar y protestar el cargo, haciendo expresa su manifestación, bajo protesta de decir verdad,

de conducirse con independencia e imparcialidad y no tener impedimento legal.

Los peritos deberán rendir su dictamen en el término de quince días o en el plazo prudente que a juicio del magistrado sea necesario.

Se tendrá por desahogada la prueba pericial exclusivamente con el dictamen del perito designado por el tribunal cuando las partes no designen perito o cuando los peritos designados por las propias partes no rindan su dictamen en los términos señalados en el párrafo anterior.

La prueba pericial será calificada por el tribunal según su prudente estimación.

Las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, estarán obligadas a proporcionar a los tribunales agrarios, los peritos cuando cuenten con el personal técnico correspondiente.

Sección Séptima De la Prueba Presuncional

Artículo 309. Las presunciones legales, humanas y los indicios, se deducen de los hechos comprobados. La parte que alegue una presunción debe probar los supuestos de la misma, lo que deberá ser tomado en cuenta por el magistrado al emitir sentencia.

Sección Octava De los Medios Probatorios Aportados por la Ciencia

Artículo 310. Los demás elementos de prueba derivados de los descubrimientos de la ciencia, tendrán como objeto acreditar hechos o circunstancias en relación con la litis planteada; en el caso, en que se necesiten conocimientos técnicos especiales para la apreciación de estos medios de prueba oír al tribunal el parecer de un perito nombrado por él, cuando así lo juzgue conveniente.

Artículo 311. Las partes podrán acreditar los hechos o circunstancias relacionados con la controversia mediante la presentación de fotografías, grabaciones de audio o de video, así como de toda la clase de elementos probatorios aportados por la ciencia y la tecnología.

Artículo 312. La parte que ofrezca como prueba los elementos derivados de descubrimientos científicos o tecnológicos, deberá acompañar los instrumentos necesarios para la apreciación de este tipo de pruebas, tales como cámaras especiales, equipos de audio o de video, proyectores u otros equipos que se requieran para su reproducción o análisis.

Sección Novena Apreciación y Valoración de las Pruebas

Artículo 313. El tribunal gozará de libertad en la apreciación de pruebas con el propósito de encontrar la verdad material o histórica, analizando los hechos expuestos por las partes, los documentos aportados, las pruebas rendidas y en general, todo lo actuado en el juicio, en conciencia y a verdad sabida, con imparcialidad, objetividad y criterio lógico, fundando y motivando su apreciación.

Capítulo VI De la Sentencia

Artículo 314. Las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación o valoración de las pruebas, sino apreciando en su conjunto los hechos y los documentos según el magistrado lo estimare debido, en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones, atendiendo a los principios que fundamentan el juicio agrario.

Artículo 315. Sólo una vez puede pedirse la aclaración de sentencia, promoviéndose ante el tribunal del conocimiento dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación, expresándose con toda claridad la contradicción, ambigüedad u oscuridad de las palabras cuya aclaración se solicite.

El tribunal resolverá dentro de los tres días hábiles siguientes lo que estime procedente, sin que pueda variar el fondo de la resolución.

El auto que resuelva sobre la aclaración de una resolución será parte integrante de ésta e interrumpirá el término para impugnar la sentencia.

Artículo 316. El Tribunal Agrario podrá elevar a la categoría de sentencia, previa calificación, las medidas conciliatorias, acuerdos o soluciones de controversias individuales o colectivos internos de los pueblos y co-

munidades indígenas, obtenidas en aplicación de sus propios sistemas normativos.

Capítulo VII De la Ejecución de la Sentencia

Artículo 317. Los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y para ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes, sin contravenir las reglas siguientes:

I. Pronunciada la sentencia, y una vez que haya sido declarada ejecutoriada, el tribunal citará a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, acerca de la forma que cada una proponga para la ejecución, procurando el tribunal lograr avenimiento a este respecto;

II. Las partes podrán convenir el cumplimiento subsidiario de la sentencia, estableciendo las contraprestaciones que acuerden; convenio que deberá ser aprobado por el Tribunal, dando por cumplida la sentencia;

III. El vencido en juicio podrá proponer garantía o fianza de institución autorizada para garantizar la obligación que se le impone, y el tribunal, con audiencia de la parte contraria, calificará la garantía o fianza según su arbitrio y, si la aceptare, podrá conceder un término hasta de quince días para el cumplimiento y mayor tiempo si el que obtuvo sentencia favorable estuviera conforme con ella. Si transcurrido el plazo no hubiere cumplido, se hará efectiva la fianza o garantía correspondiente;

IV. Si existiera alguna imposibilidad material o jurídica para ejecutar una sentencia relativa a tierras de un núcleo de población, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá aceptar la superficie deslindada en ejecución, o bien, obtener de la parte vencida, el cumplimiento sustituto de la sentencia, en cuyo caso, la sentencia se tendrá por ejecutada, dejándose constancia de tal circunstancia en el acta que para el efecto se levante;

V. El Tribunal podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública federal, estatal, del Distrito Federal o muni-

cipal en el caso de que lo considere necesario para ejecutar una sentencia; y

VI. En caso de inconformidad con la ejecución por la parte que obtuvo sentencia favorable, se presentarán al actuario los argumentos legales correspondientes, que se adjuntarán con el acta circunstanciada que se levante en la que se exprese de manera detallada su actuación, junto con las razones que impidan la ejecución.

Dentro de los quince días siguientes al levantamiento del acta de ejecución el tribunal del conocimiento dictará resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia respectiva.

Capítulo VIII De los Medios de Impugnación de la Sentencia

Artículo 318- El recurso de revisión en materia agraria procede contra las sentencias de los tribunales unitarios agrarios que resuelvan en primera instancia sobre las controversias a que se refieren las fracciones de la I a la XIV del artículo 12 de este código.

Artículo 319. La revisión debe presentarse ante el tribunal que haya pronunciado la resolución recurrida dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. Para su interposición, bastará un simple escrito que exprese los agravios.

El tribunal unitario agrario podrá tener por no interpuesto el recurso de revisión, cuando notoriamente se advierte que no se trata de alguno de los supuestos previsto por la ley o haya sido presentado de manera extemporánea, previa certificación del secretario de acuerdos del propio tribunal, sin necesidad de correr traslado ni dar vista a la parte contraria. Asimismo, el tribunal unitario deberá proveer lo conducente, cuando el promovente del recurso de revisión se desista de su interposición, previa ratificación de tal desistimiento.

Artículo 320. El tribunal unitario tendrá por presentado el recurso de revisión, si este es presentado en tiempo, dentro de los tres días siguientes a su interposición y dará vista a la contraparte del recurrente para que en un plazo de cinco días exprese lo que a su interés convenga. Hecho lo anterior, remitirá inmediatamente el expediente, el original del escrito de agravios y la pro-

moción de los terceros interesados al Tribunal Superior Agrario, el cual resolverá en un término de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de su recepción.

Artículo 321. Contra las sentencias definitivas de los Tribunales Unitarios o del Tribunal Superior Agrario, sólo procederá el juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Tratándose de otros actos de los tribunales unitarios en que por su naturaleza proceda el juicio de amparo, conocerá el juez de distrito que corresponda.

Título Tercero De la Jurisdicción Voluntaria

Artículo 322. Los tribunales agrarios conocerán, en la vía de jurisdicción voluntaria, de asuntos en los que no exista controversia o no litigiosos y sobre los que se requiera la intervención del tribunal, por disposición de ley o a solicitud de los interesados; conforme al procedimiento establecido en esta ley, proveyendo lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes.

Artículo 323. Cuando lo considere necesario o se pueda afectar el interés colectivo de un ejido o comunidad, el tribunal podrá citar y escuchar a los representantes legales del núcleo ejidal o comunal de que se trate. También lo hará a petición de la parte interesada.

Artículo 324. Si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se dará por terminada la vía de jurisdicción voluntaria y se dejarán a salvo los derechos de los interesados.

Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello el tribunal la desechará de plano.

Artículo 325. No procede la acumulación de un expediente de jurisdicción voluntaria y otro de jurisdicción contenciosa, en todo caso, al estar en trámite el primero, deberá darse por terminado y continuar el segundo.

Título Cuarto De los Medios Alternativos de Solución de Conflictos Fuera de Sede del Tribunal

Capítulo I De la Conciliación

Artículo 326. Los convenios conciliatorios que se suscriban fuera de juicio por los interesados, con la intervención de la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, los gobiernos de los estados, del Distrito Federal, de los municipios y de otras instancias gubernamentales, mediante los cuales se logre la solución de conflictos agrarios, serán sometidos al tribunal agrario competente, para que, previa su calificación, sean homologados, elevados a la categoría de sentencia y se provea su ejecución, ordenándose su inscripción en el Registro Agrario Nacional, una vez que causen ejecutoria.

Capítulo II Del Arbitraje

Artículo 327. Las controversias individuales podrán ser sometidas a resolución arbitral, salvo disposición expresa en contrario.

Artículo 328. El compromiso arbitral podrá celebrarse antes o durante el juicio y comprenderá el objeto del arbitraje, el plazo de duración del proceso, el procedimiento aplicable y las reglas para la determinación o laudo, así como la renuncia a interponer recurso alguno y las demás modalidades que acuerden los interesados.

Artículo 329. Las partes designarán de común acuerdo al árbitro, el cual deberá ser elegido de entre los que se encuentren registrados ante el Tribunal Superior Agrario.

Artículo 330. Los árbitros decidirán según las reglas del derecho, a menos que las partes les encomienden la amigable composición o el fallo en conciencia.

Artículo 331. En el arbitraje de estricto derecho las partes se sujetarán al compromiso establecido en los términos del procedimiento que fijen, apegándose a los principios de legalidad, equidad e igualdad. En caso de que no se fijen reglas o no se pongan de acuerdo, el árbitro las establecerá y se ajustará, en lo conducente, a las dis-

posiciones de la presente ley o, en su defecto, a la legislación federal aplicable.

Artículo 332. En la amigable composición, fijadas las cuestiones objeto del arbitraje, el árbitro resolverá en conciencia y a buena fe, sin sujetarse a reglas legales. El árbitro podrá allegarse los elementos que considere necesarios para la resolución del asunto planteado. En este tipo de arbitraje, no habrá términos ni incidentes.

Artículo 333. En caso de no haber sido acordado por las partes, el árbitro llevará el procedimiento conforme a las siguientes reglas:

I. Señalará día y hora para la celebración de una audiencia, la que se llevará a efecto en un término no menor a cinco días hábiles ni mayor a diez, siguientes a la firma del compromiso arbitral;

II. Durante la audiencia las partes podrán aportar cualquier tipo de pruebas permitidas por la ley para fundar su dicho;

III. Las pruebas deberán tener relación con el asunto controvertido. El árbitro podrá desechar aquellas que no reúnan ese requisito;

IV. En la audiencia se desahogarán las pruebas cuya naturaleza así lo permita. Para el desahogo de las pruebas restantes, se señalará nueva fecha para continuar la audiencia;

V. Concluido el desahogo de las pruebas, las partes formularán sus alegatos dentro de la misma audiencia. De solicitarlo ambas, se les concederá un término que no excederá de tres días hábiles para tal efecto, y

VI. El árbitro dictará su laudo, después de analizar y valorar las pruebas y alegatos aportados por las partes, en un término que no excederá de diez días hábiles.

Artículo 334. Los laudos serán notificados a las partes dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se hayan dictado.

Los laudos dictados para resolver la controversia que también sea materia de un juicio agrario, se turnarán al

tribunal agrario competente para su calificación, homologación y, en su caso, ejecución.

Artículo 335. La aclaración del laudo arbitral sólo podrá pedirse dentro de los tres días hábiles que sigan a su notificación.

Transitorios

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a los treinta días siguientes del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se aboga la Ley Agraria del 26 de febrero de 1992, así como la disposiciones que se opongán a la presente ley.

Artículo Tercero. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, expedirá en un plazo de un año las disposiciones para organizar el Servicio Nacional de la Fe Pública Agraria.

Artículo Cuarto. La Ley Agraria que se aboga, se seguirá aplicando en los juicios agrarios que actualmente se encuentran en trámite y en aquellos que se presenten hasta antes de la entrada en vigor de este ordenamiento.

Artículo Quinto. La Secretaría de la Reforma Agraria continuará desahogando los asuntos que actualmente se encuentren en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; creación de nuevos centros de población ejidal, restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, de conformidad con las disposiciones legales que reglamenten dichas cuestiones y que estaban vigentes en el momento en que se iniciaron.

Los expedientes de los asuntos arriba mencionados, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a los tribunales agrarios para que se resuelvan en definitiva, de conformidad con las disposiciones legales a que se refiere el párrafo anterior.

Los demás asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite y que sean de la competencia de los tribunales agrarios, se turnarán a éstos para que resuelvan en definitiva, como lo previene el artículo tercero transitorio de las reformas al artículo 27 constitucional, según decreto promulgado el tres de enero de 1992 y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de enero del mismo año, en

relación con el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, promulgada el 23 de febrero de 1992 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 26 del mismo mes y año.

Artículo Sexto. El presupuesto que se requiera para hacer efectivas las nuevas facultades y obligaciones que se imponen al sector agrario será con cargo al que se apruebe a la Secretaría de la Reforma Agraria, a su órgano desconcentrado el Registro Agrario Nacional y al organismo descentralizado Procuraduría Agraria

Artículo Séptimo. Los recursos que sean necesarios para hacer efectivo el nuevo ámbito competencial de los tribunales agrarios serán con cargo a su presupuesto.

Diputados: Ramón Ceja Romero (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), José Ignacio Rubio Chávez (rúbrica), Félix Castellanos Hernández.

Se turna a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, Desarrollo Rural, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«160. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma a Ley Federal del Trabajo para que se constituyan en los centros de trabajo “comisiones mixtas de tutela de los derechos y acciones afirmativas para las trabajadoras”, y en general se establezcan acciones afirmativas a favor de las comisiones, especialmente en materia de capacitación y adiestramiento; finalmente para que en el marco de ésta se

acceda a estudios de educación media superior y superior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Poco puede avanzar un país, y menos de manera firme sin incorporar de lleno a la producción económica y a la cultura a más de la mitad de la población, a sus mujeres. Si vemos el nuevo paisaje histórico del mundo, podemos constatar que los países que se desarrollan a pasos agigantados han cubierto como requisito previo la valorización de las mujeres, incorporándolas masivamente y con amplios horizontes de igualdad a la educación, el trabajo, el deporte, la ciencia.

Aprovechar al máximo todo el talento y la fuerza de las mujeres, no sólo es una cuestión de justicia humana sino de elemental lógica para el desarrollo. Además que esto impulsará el florecimiento de los valores propios de lo femenino, ayudando al país y al mundo a liberarse de vicios insostenibles de inequidad.

Sin embargo, en México los años pasan sin que se hagan los cambios necesarios y profundos para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. En tal virtud los ocho de marzo suelen usarse para presentar un almacén histórico de injusticias, que parece inamovible e insuperable.

Pese a todo, las mujeres en su lucha han dado pasos importantes para que la igualdad y las prohibiciones a la discriminación, por razón de género, establecidas en la Constitución federal, pasen del nivel declarativo a realidad presente de nuestra nación.

Sólo como ejemplo, a últimas fechas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha representado para las mujeres un triunfo moral, político y jurídico; sin embargo, otras esferas del derecho están reclamando la toma de medidas afirmativas a favor de las mujeres para pasar de la justicia aparente a la justicia efectiva. En otras palabras, transitar de la justicia conmutativa a la justicia distributiva. Esta última, parte de la idea de que debe apoyarse a la parte en desventaja, no con privilegios sino con medidas adicionales exigidas para alcanzar una igualdad real y no formal y estéril.

El campo laboral es uno de los que exige su inmediata modificación o adición, con el objeto de que la mujer encuentre caminos francos para su desarrollo en esta esfera que es

nodal, al permitirle su incorporación al ámbito de la producción económica, obteniendo un salario y otros apoyos que solidifiquen su autoestima e independencia.

En este orden de ideas es indispensable fortalecer las medidas que permitan el acceso del sector femenino a las actividades productivas, ya que ciertos empleos de las mismas, le están vedados en los hechos al no contar con la capacitación y adiestramiento necesarios.

Esta situación exige en primer lugar el cambio de una cultura laboral que impone ciertos roles en razón del género. Todo el sistema educativo, los medios de difusión y el aparato de justicia deben coadyuvar aún más que en la actualidad para romper estos diques que niegan el pleno desarrollo de la población femenina.

Pero esto debe complementarse con la necesaria formación en lo laboral que se debe dar al interior de los centros de trabajo. Evidentemente para el desempeño de ciertos empleos, no bastan los deseos, sino la formación profesional o su actualización para desarrollar con eficiencia y seguridad las tareas inherentes al mismo.

Con mayor razón para aspirar a puestos de dirección de los cuales las mujeres están excluidas en su gran mayoría y, para el manejo de las nuevas tecnologías. Así pues la igualdad no es un valor en abstracto sino que se debe ir haciendo realidad en lo cotidiano en cada una de las esferas de vida de la comunidad.

La capacitación y adiestramiento de las mujeres debe superar rezagos derivados de su posición social, que le limita la educación con más fuerza que al varón, así como de ciertas actividades a las que los varones acceden desde su niñez, mientras que la mujer es acotada a actividades tradicionales.

Incluso, recordemos que hasta en la escuela secundarias hay talleres “propios para la mujer” y otros “para los varones”, que encaminan a estos últimos con claridad a mayores oportunidades de incorporarse en el aparato productivo, en tanto que se busca capacitar a la mujer en actividades “propias del hogar”.

Para superar lo anterior, en principio debe haber una igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en los planes y programas de capacitación o adiestramiento. Pero partiendo del rezago social de las mujeres en la introducción y formación en el trabajo y, ante la carga de la doble o triple

jornada que debe desarrollar la mujer que la despoja de tiempo necesario para tal capacitación, se deben buscar los caminos para que dentro de la jornada de trabajo exista un apoyo especial, para la formación de las trabajadoras.

La capacitación o el adiestramiento en el trabajo implica inversión del tiempo y de los recursos necesarios para la formación profesional. De qué sirve este último, si la sobrecarga social sobre la mujer para la crianza de los hijos y su aplicación para las actividades de todo tipo para sacar adelante los hogares, y que tarde que temprano deberá ser asumida por la sociedad, le hacen prohibitivo en la práctica acceder a su superación personal.

La capacitación para las trabajadoras tiene por objetivo mejorar su conocimiento para ayudarles en su permanencia en el empleo y ascensos, prepararlas para que puedan acceder a puestos tradicionalmente masculinos, incluidos los de dirección, permitiéndoles alcanzar mejores condiciones de trabajo y de vida. Incluso, opino yo, impulsarlas a que caminen hacia la actividad de la invención, de la cual la mujer está casi totalmente excluida.

Las acciones afirmativas son la solución a seguir para alcanzar una real capacitación y respeto a los derechos de las trabajadoras, al constituirse en ventajas temporales que permiten combatir la discriminación de la mujer en el mundo laboral, lo que hace posible avanzar hacia un ambiente laboral y, en general social, más justo y democrático.

Luego, las acciones afirmativas son instrumentos que permite el cambio de una comunidad en beneficio de todos. La consecución de las medidas afirmativas requiere de la participación de todos: trabajadores, en su caso los sindicatos, el gobierno, los empresarios.

Pero ya que estamos abordando la capacitación y adiestramiento, por un lado hay que feminizarla en los términos señalados; pero por otro lado debemos impulsar la ampliación de su concepto, en términos tales que no sólo se limite a la formación para el desarrollo de un oficio, o para superar el analfabetismo o cursar la educación básica; sino que la Secretaría del Trabajo, las universidades e instituciones educativas, los patrones y los trabajadores, deben coordinarse para que se incluya dentro de los programas de capacitación y adiestramiento la educación media superior y superior.

Esto dentro de una visión amplia que nos muestra que el manejo y desarrollo de a nueva tecnología exige cada vez

más de mayor formación académica; a la vez que la preparación en las instituciones de educación superior requiere su vinculación con la esfera productiva transformándose en una palanca vital para que el país alcance niveles superiores de desarrollo económico, permitiendo al mismo tiempo el empleo de los egresados, no sólo porque su formación estará siendo requerida por el aparato productivo económico y cultural, sino porque durante la carrera se combinarán de manera armónica el estudio y el trabajo, resultando que al terminar los estudios profesionales la y el joven ya tendrán una experiencia acumulada. Así se romperá con la escolarística e insostenible separación entre el mundo del trabajo y la esfera académica.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 3o.; tres últimos párrafos al artículo 153-A; un segundo párrafo al artículo 153-E; un segundo párrafo al artículo 153-I; y un segundo párrafo a la fracción IV Del artículo 994, todos de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos:

Artículo Primero. Se adicionan un último párrafo al artículo 3o.; tres últimos párrafos al artículo 153-A; un segundo párrafo al artículo 153-E; un segundo párrafo al artículo 153-I; y un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 994, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

...

La Secretaría del Trabajo deberá impulsar las acciones afirmativas. Se entiende por acciones afirmativas la adopción de medidas temporales destinadas a fomentar la participación de la mujer en el empleo, en la actividad sindical y en los programas de capacitación y adiestramiento de manera que contribuyan a corregir en los hechos los factores de discriminación por género.

Artículo 153-A. ...

Los patrones y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, deberán adoptar todas las medidas de acción afirmativa para garantizar condiciones efectivas de igualdad entre las trabajadoras y los trabajadores en el ejercicio de este derecho. Debiendo adoptar, los progra-

mas y planes, las modalidades necesarias para la debida capacitación o adiestramiento de las trabajadoras, incluida la capacitación de género.

Los patrones y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberán promover la participación de las mujeres en la elaboración de los planes y programas de capacitación o adiestramiento.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los patrones en coordinación con las universidades e instituciones de educación superior deberán tomar las medidas necesarias para que, de manera equitativa, los trabajadores y las trabajadoras accedan como parte integrante de los programas de capacitación o adiestramiento, a estudios de educación media superior y superior, debiendo acceder a éstos mínimamente dos trabajadores por cada cincuenta empleados. Al efecto se podrán emplear cualquiera de los sistemas idóneos que tengan en operación estas universidades e instituciones en el marco de la educación abierta y a distancia.

Artículo 153-E. ...

Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, las trabajadoras tendrán derecho a cuatro horas semanales para su capacitación o adiestramiento. Salvo acuerdo en contrario, en la última hora de la jornada accederán a una hora de capacitación o adiestramiento.

Artículo 153-I. ...

En esta comisión deberán participar por partes iguales mujeres y varones, tanto en la representación de los trabajadores como del patrón.

Artículo 164. ...

En cada empresa se constituirán comisiones mixtas de tutela de los derechos y acciones afirmativas para las trabajadoras, integradas por igual número de representantes mujeres de los trabajadores y del patrón, las cuales vigilarán el cumplimiento efectivo de los derechos de las trabajadoras y la aplicación de las medidas afirmativas necesarias al efecto.

Artículo 994. ...

I. a III. ...

IV. ...

El incumplimiento de las normas sobre capacitación o adiestramiento relativas a acciones afirmativas a favor de las trabajadoras y de la participación de las mujeres en las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento, se sancionará con multas por el equivalente de 100 a 500 veces el salario mínimo general.

V. y VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los tres meses siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.—
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

«161. Que reforma y adiciona el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas, legisladoras federales, integrantes de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción al artículo 219 del Cofipe, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México ha vivido y vive una transformación de la democracia, proceso que se ha venido gestando desde varias dé-

cadass, en donde grandes luchas se han llevado a cabo para reconocer los derechos fundamentales, entre los cuales destacan los civiles y los políticos.

El derecho al sufragio femenino en nuestro país se logró gracias a un largo proceso en el que las manifestaciones y las legítimas demandas adquirieron fuerza a partir de la segunda década del siglo XX, bajo el ideario de la Revolución Mexicana que en síntesis proclamó “democracia y justicia social”.

Las mujeres de hoy somos expresión de una memoria colectiva, debiendo reconocer que se vivieron épocas difíciles y poco claras, motivo que nos obliga a mujeres que hoy ocupamos un cargo como representante popular, a no olvidar a las féminas que nos antecedieron y allanaron el camino para alcanzar los éxitos consecuentes, preservando, consolidando e incrementando sus logros

En pleno siglo XXI, como sociedad es necesario entender plenamente que la equidad de género es un asunto medular y que no compete exclusivamente a las mujeres sino a toda la ciudadanía.

En este orden de ideas, es necesario instrumentar acciones en favor de las mujeres, las cuales se han desprendido de los grandes escenarios mundiales, tales como las Conferencias Mundiales de la Mujer en las cuales México se ha sumado a estas acciones afirmativas necesarias que nos permitan alcanzar la igualdad y la equidad. Porque no basta con tener derechos sino que es necesario ejercerlos para educar a las generaciones venideras en el respeto a éstos mismos.

Hoy, el cambio democrático debe estar encaminado a una pluralidad que conlleve una cultura cívica y equitativa de las relaciones entre los géneros y de todos los sujetos sociales.

Las mujeres seguimos luchando por la consolidación de una apertura democrática y efectiva, que concilie los valores de equidad, justicia, libertad y respeto de toda la sociedad. Porque no obstante que las mujeres hemos sido reconocidas legal y socialmente, no podemos perder de vista que nuestros derechos políticos y sociales nos conducirán a ejercer una ciudadanía plena.

La afirmación de que “todos los seres humanos hemos sido creados iguales” no es una verdad científica sino una afirmación política. En este sentido decía Rousseau: “debi-

do a que la fuerza de las circunstancias tiende siempre a destruir la igualdad, la fuerza de la legislación debe tender siempre a mantenerla". Por ello, el Estado está llamado a promover la igualdad a través de medidas concretas, que permitan corregir las desigualdades naturales y sociales, y así emancipar a las víctimas de los desequilibrios sociales.

Cuánta razón tuvo Rosario Castellanos al decir que "la hazaña de convertirse en lo que se es [...] exige sobre todos el rechazo de esas falsas imágenes que los falsos espejos ofrecen a la mujer".

En este sentido, la intervención de las mujeres en la política mexicana resulta fundamental para marcar el rumbo que pretendemos darle a nuestra nación.

Las leyes y sus enunciados a favor de una equidad e igualdad hacia las mujeres no debe convertirse en letra muerta, porque esto sería como eliminar la razón de dichos mandatos surgidos de una necesidad de reconocimiento hacia las mujeres, pero más de una obligación de nuestro país por alcanzar una democracia cierta y justa.

La participación política de las mujeres abarca una amplia gama de acciones y estrategias, que incluye el voto y la educación de las votantes.

Se hace necesario consolidar el apoyo a las candidaturas que impulsan una agenda sensible al género, campañas contra quienes promueven políticas que se oponen a los derechos de las mujeres, así como promoción y defensa de la integración de una agenda de derechos de las mujeres en las plataformas de candidaturas y partidos.

En este sentido, es importante reconocer que los sistemas de cuotas de género han incrementado en forma significativa la participación y representatividad de las mujeres, tanto en los puestos de toma de decisiones electivos como en los de nombramientos de facto.

En suma, las cuotas han sido consideradas como una de las acciones que preservan, reconocen y dan certeza a los compromisos y a la ley misma de dar respuesta y congruencia para aumentar la participación política de las mujeres.

Si existiera la igualdad y la equidad política de las mujeres, entonces las cuotas no tendrían razón de existir.

El incremento en la cantidad de mujeres en puestos de toma de decisiones ayuda a colocar las agendas de la pobla-

ción femenina en el nivel de mayor prioridad; posibilitan cambios en actitudes acerca de los roles y habilidades de los géneros, e inciden en la apertura de más oportunidades de educación y trabajo para otras mujeres.

En este orden de ideas, los partidos políticos que constituyen una institución esencial de los regímenes liberales adquieren una mayor relevancia para el establecimiento e impulso de acciones afirmativas que fortalezcan el desarrollo democrático de las mujeres, toda vez que nacieron y se desarrollaron conjuntamente con las elecciones y la figura de la representación y el constitucionalismo.

Los partidos son un enlace mediador directo entre electores y elegidos, sin ellos el funcionamiento de la representación, cuando menos en nuestros días, resultaría imposible, ya que cumplen funciones básicas para el buen desarrollo organizacional y político. Queda claro que estas instituciones ayudan a la toma de conciencia política de la ciudadanía y permiten elegir con mucha mayor claridad a quienes habrán de representarnos. En razón de ello, son una institución sustancial de la democracia moderna.

En razón de lo anterior, es que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su articulado mandata diversas disposiciones que atañen a los partidos políticos en materia de equidad de género, incluso señalando expresamente porcentajes de participación que actualmente se encuentra en un 40/60 por ciento, lo que constituye un importante avance en la materia derivado de la última reforma electoral.

En este contexto, se considera fundamental realizar las acciones necesarias para garantizar la continuidad del avance democrático de las mujeres, para lo cual es necesario impulsar que en el seno de los partidos políticos se sigan ejecutando las acciones congruentes y necesarias que garanticen su democratización interna.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un numeral tercero del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar de la siguiente manera:

Artículo 219.

1. ...

2. ...

3. Los partidos políticos deberán establecer en sus estatutos cuotas de género, a fin de implantar acciones positivas y normas compensatorias que impulsen el desarrollo político de las mujeres. Todo acuerdo o norma posterior que tenga por objeto eliminar, modificar o atente en contra de la participación política de las mujeres no será aplicable.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2008.— Diputadas: Lourdes Quiñones Canales, María Mercedes Colín Guadarrama, Martha Hilda González Calderón, Yolanda Rodríguez Ramírez, Lorena Martínez Rodríguez, Patricia Villanueva Abarajan, Sara Latife Ruiz Chávez, Yari Gebhardt Garduza, Araceli Escalante Jasso, Areli Madrid Tovilla, María Oralia Vega Ortiz, Mayra Gisela Peñuleas Acuña, Elizabeth Morales García, Beatriz Pages Llergo Rebollar, María del Carmen Pinete Vargas, Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Guillermina López Balbuena, Martha Rocío Partida Guzmán, Elda Gómez Lugo.»

Se turna a la Comisión de Gobernación.

«162. Que reforma las Leyes General de Salud, y de Asistencia Social, a cargo del diputado Gerardo Buganza Salmerón, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gerardo Buganza Salmerón, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas

disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Dos de los ordenamientos jurídicos de mayor importancia para el desarrollo de las personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales; sin duda alguna lo son la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, las cuales en algunos de sus artículos siguen apareciendo las palabras invalidez e inválidos para referirse, según la interpretación gramatical, en la primera a la discapacidad y en la segunda a las personas con discapacidad.

Es preciso aclarar, que la palabra invalidez es un término que regularmente se utiliza en el ámbito laboral y que al respecto, la Ley del Seguro Social en su artículo 119 a la letra dice: “Para los efectos de esta ley existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales”.

De igual manera, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su artículo 118 dice: “Para los efectos de esta ley, existe invalidez cuando el trabajador activo haya quedado imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual, percibida durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el instituto”.

Según las disposiciones antes citadas, podríamos deducir que un inválido, es aquella persona que reúne las características siguientes:

- a) Es un trabajador dado de alta en el instituto Mexicano del Seguro Social o en el ISSSTE.
- b) Que después de ser un trabajador activo, adquirió una imposibilidad para procurarse mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento que percibió durante su último año de trabajo.
- c) Que esa imposibilidad, deriva de una enfermedad o accidente no profesionales.

Por otra parte, la Ley General de Salud, en su artículo 173 dispone: “Para los efectos de esta ley, se entiende por invalidez la limitación en la capacidad de una persona para realizar por sí misma actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico como consecuencia de una insuficiencia somática, psicológica o social”.

Atendiendo a lo establecido en esta última disposición, ahora podríamos decir que un inválido, es aquella persona que reúne las características siguientes:

- a) Se refiere a una persona en lo general y no en lo particular a un trabajador dado de alta en el IMSS o en el ISSSTE.
- b) Se refiere a la invalidez, como una limitación en la capacidad de una persona para realizar por sí misma actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico. Y no como una imposibilidad sólo para trabajar y para procurarse una remuneración superior al cincuenta por ciento que percibió durante su último año de trabajo.
- c) Se refiere a una insuficiencia somática o psicológica, que puede ser congénita o adquirida. Mientras que en la Ley del Seguro Social, se refiere a una imposibilidad para trabajar y que sólo puede ser adquirida.

Tomando en consideración la interpretación gramatical de la Ley General de Salud, en la que se puede apreciar que la intención del legislador, fue referirse a la invalidez, no como un término del ámbito laboral, sino como una insuficiencia somática, psicológica y social que tiene como consecuencia la limitación en la incapacidad de una persona para realizar por sí misma diversas actividades y que la Ley General de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2, fracción XI dice: “Persona con discapacidad. Toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”, hemos de apreciar, que hoy en día, lo más adecuado es emplear en la Ley General de Salud y en la Ley de Asistencia Social, los términos “discapacidad” y “persona con discapacidad”.

Atendiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, que fue ratificada por el Senado de la Repúbli-

ca el pasado 27 de septiembre del año en curso y que entrará en vigor 13 días después de que en la ONU se haya registrado el último depósito del instrumento de ratificación o adhesión de los Estados parte; la cual preferentemente emplea los términos discapacidad y persona con discapacidad y tomando en consideración, que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., párrafo tercero, aparece la palabra discapacidades; que en la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad –de la que México forma parte– en su artículo 1 y para efectos de ésta, indica: “El término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”; y que la Ley General de las Personas con Discapacidad, también emplea preferentemente el término “persona con discapacidad”.

Es por estas consideraciones previas que propongo que en la Ley General de Salud y en la Ley de Asistencia Social, se eliminen los términos invalidez e inválidos, cuando con éstos se refieran a quienes padezcan deficiencias físicas, mentales o sensoriales de manera general y no sólo a lo laboral en particular; y que sean sustituidos por el de discapacidad y el de persona con discapacidad, siempre que éstos no se refieran sólo a esa imposibilidad laboral a la que aluden la Ley del IMSS y la del ISSSTE.

Compañeras y compañeros diputados, por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ustedes la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social

Artículo 1o. Se reforman los artículos 3o., fracción XIX; 59, 100, fracción VI; 104, párrafo segundo, fracción I; 112, fracción III; 167, 168, fracciones I, II y V; 173, 174, fracciones I, II, III, IV, V, VI; 175, 177, 178, 180 y 300; así como la denominación del título noveno de la Ley General de Salud para quedar como a continuación se indica

Artículo 3o. ...

I. a XVIII. ...

XIX. La prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con discapacidad;

XX. a XXX. ...

Artículo 59. Las dependencias y entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, promoverán y apoyarán la constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los programas de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, así como en los de prevención de enfermedades y accidentes, y de prevención de discapacidad y de rehabilitación de personas con discapacidad.

Artículo 100. ...

I. a V. ...

VI. El profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, discapacidad o muerte del sujeto en quien se realice la investigación, y

VII. ...

Artículo 104. ...

...

I. Estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad y discapacidad;

II. a III. ...

Artículo 112.

...

I. a II. ...

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Título Noveno

Asistencia Social, Prevención de Discapacidad y Rehabilitación de Personas con Discapacidad

Artículo 168....

I. La atención a personas que, por sus carencias socioeconómicas o por problemas de discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;

II. La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono o desamparo y personas con discapacidad sin recursos;

III. a IV. ...

V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, ancianos y personas con discapacidad sin recursos;

VI. a IX. ...

Artículo 173. Para los efectos de esta Ley, se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

Artículo 174. La atención en materia de prevención de discapacidad y rehabilitación de personas con discapacidad comprende:

I. La investigación de las causas de la discapacidad y de los factores que la condicionan;

II. La promoción de la participación de la comunidad en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad;

III. La identificación temprana y la atención oportuna de procesos físicos, mentales y sociales que puedan causar discapacidad;

IV. La orientación educativa en materia de rehabilitación a la colectividad en general, y en particular a las familias que cuenten con alguna persona con discapacidad, promoviendo al efecto la solidaridad social;

V. La atención integral de las personas con discapacidad, incluyendo la adaptación de las prótesis, órtesis y ayudas funcionales que requieran;

VI. La promoción para adecuar facilidades urbanísticas y arquitectónicas a las necesidades de las personas con discapacidad, y

VII. ...

Artículo 175. La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas de carácter nacional en materia de prevención de discapacidad y rehabilitación de personas con discapacidad, y coordinará, supervisará y evaluará su cumplimiento por parte de las instituciones públicas, sociales privadas que persigan estos fines.

Artículo 177. La Secretaría de Salud a través del organismo a que alude el artículo 172 de esta ley, y los gobiernos de las entidades federativas, coordinadamente y en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional para las personas que sufran cualquier tipo de discapacidad, así como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales.

Artículo 178. El organismo del gobierno federal previsto en el artículo 172, tendrá entre sus objetivos operar establecimientos de rehabilitación, realizar estudios e investigaciones en materia de discapacidad y participar en programas de rehabilitación y educación especial.

Artículo 180. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con otras instituciones públicas, promoverán que en los lugares en que se presten servicios públicos, se dispongan facilidades para las personas con discapacidad.

Artículo 300. Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de las personas con discapacidad, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere esta ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Comercio y Fomento Industrial, Comunicaciones y Transportes y otras dependencias del Ejecutivo federal.

Artículo 20. Se reforma el artículo 12 en sus fracciones I, incisos a, b y e y XII de la Ley de Asistencia Social para quedar como a continuación se indica:

Artículo 12. ...

I. ...

a) La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por problemas de discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;

b) La atención en establecimientos especializados a menores y adultos mayores en estado de abandono o desamparo y personas con discapacidad sin recursos;

c) a d) ...

e) La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, adultos mayores y personas con discapacidad sin recursos;

f) a i) ...

II. a XI. ...

XII. La prevención de discapacidad y la rehabilitación e integración a la vida productiva o activa de personas con algún tipo de discapacidad;

XIII. a XIV. ...

Transitorio

Único. Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2008.— Diputado Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud.

«163. Que expide la Ley Federal sobre los Derechos de las Madres Solteras o Solas y de las Mujeres en Estado de Violencia, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se promulga la Ley Federal sobre los Derechos de las Madres Solteras o Solas y de las Mujeres en Estado de Violencia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Si a la palabra madre le agregamos el calificativo de soltera o sola, la palabra torna de un término respetable a una expresión ofensiva en el criterio de una parte importante de los miembros de nuestra sociedad. Alude a aquellas mujeres, especialmente jóvenes, que sin el papel o acta del matrimonio ni el apoyo de un hombre entran al mundo de la maternidad. Ya sea de manera consciente y voluntaria, o bien forzadas mediante el engaño, la violación, por falta de educación en métodos para evitar embarazos no deseados o por falla de éstos, u otras circunstancias. Históricamente han sido señaladas, discriminadas, pisoteadas en sus derechos humanos, así como sus hijos. “Perdidas”, “locas”, han sido algunos de los términos con que el sadismo verbal machista las flagela; “bastardas”, “sin nombre”, son epítetos dirigidos contra las hijas y los hijos cuya única realidad es su inocencia y su derecho como seres humanos a una vida con dignidad y en la plenitud de sus derechos.

Surgiendo una inentendible contradicción social, a estas madres se les cierran u obstaculizan las puertas, en tanto que en su situación de vulnerabilidad es cuando más requiere de apoyo. Si la función de la maternidad, o reproductiva, es la más importante en una sociedad al dar origen a la esencia de una comunidad que son sus individuos; sin importar la forma en que esta función se cumple, deben las mujeres recibir el reconocimiento y el apoyo del Estado y la sociedad, no haciéndole pagar una supuesta falta, que en todo caso es imputable al varón que abandona, que engaña o a las faltas de oportunidades de un sistema económico.

Contrariamente, respecto a la madre soltera o sola, el apoyo debe ser mayor, pues debe sacar adelante su papel “sola”, con un doble o triple esfuerzo, en ocasiones poniendo en riesgo su propia salud, seguridad y la de sus hijos. Situación de vulnerabilidad que el Estado tiene la obligación de compensar en la medida de lo posible.

En la actualidad más de cuatro y medio millones de mujeres entran al concepto de madres solas; una parte son las llamadas madres solteras en estricto sentido; sin embargo, existen otras que aunque se encuentran legalmente casadas o son viudas o divorciadas, en los hechos sufren abandono y violencia iguales, son “solteras” de facto, razón por la cual deben ser objeto de tutela y de consideraciones especiales. La materia de su protección debe tener un enfoque federal, a efecto de que a todo lo largo del país las madres solteras lato sensu salgan del “señalamiento hipócrita” a un respaldo cierto, en el marco de su dignidad. Al impulsarse lo anterior, también las hijas y los hijos desde la más tierna edad encontrarán su respeto y una viabilidad de vida.

Abundando en las cifras proporcionadas por el Consejo Nacional de Población (Conapo), y de acuerdo con un diagnóstico que realizó esta entidad sobre las madres en México, se detalla que de las mamás solas 8.5 por ciento son viudas, 6.2 por ciento separadas, 1.6 por ciento divorciadas y 4 por ciento solteras en sentido estricto. Así pues la quinta parte de las mujeres que tienen hijos vivos son madres solas.

A su vez, las madres solteras en estricto sentido, ascienden a cerca de 880 mil mujeres y alrededor de nueve de cada 10 tienen hijos menores de 18 años. Además, 6 de cada 10 de estas mujeres viven en el hogar de su padre o madre; 71.8 por ciento de ellas trabaja y, aunque 3 de cada 10 viven en condiciones de pobreza, esta proporción es ligeramente menor al promedio nacional de madres con hijos en el hogar, que es de 35.4 por ciento.

El Conapo precisa que las madres solas por separación o divorcio suman alrededor de 1.7 millones de mujeres, y 6 de cada 10 han asumido la jefatura de su hogar, pero 27.6 por ciento de ellas vive con al menos uno de sus padres.

Además de desempeñar el rol materno, cerca de 7 de cada 10 realizan alguna actividad económica. El organismo señala que, al igual que las madres solteras, el porcentaje que vive en condiciones de pobreza (29.6 por ciento) es menor al de las madres viudas y a las que se encuentran en pareja o casadas.

Las viudas constituyen el grupo más numeroso de las madres solas (1.9 millones) y en la mayoría de los casos las mujeres asumen la jefatura del hogar por la muerte, separación o divorcio del cónyuge.

Las madres solteras son en su mayoría mujeres jóvenes, menores de 30 años de edad, mientras que las mujeres separadas y divorciadas concentran los mayores porcentajes entre los 30 y 49 años de edad, entre las viudas predominan las madres mayores de 50 años.

Las anteriores cifras del Conapo, nos dan un panorama de la gravedad del problema social que representan las madres solteras o solas, por lo que gobierno y sociedad deben de coordinar esfuerzos para combatir a favor de la tutela de estas mujeres y sus hijos.

En este sentido, debe evitarse cualquier acto discriminatorio en su contra que lesione o menoscabe sus derechos, al propio tiempo instrumentarse apoyos concretos de carácter positivo. A manera de guisa, las madres solteras o solas deberán ser preferidas por los patrones de los sectores público y privado, en igualdad de condiciones, para ser empleadas; de manera de asegurar que por lo menos el 8 por ciento de la planta laboral de una empresa corresponda a las madres solteras o solas; lo primero es crear caminos para permitirles acceder al principal derecho para su sobrevivencia y el de sus hijas e hijos, un empleo. Complementariamente si se trata de una madre soltera o sola, el patrón no las podrá despedir de manera ordinaria e intempestiva, sino que deberá demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje la autorización para el despido previa justificación de causa especialmente grave.

Para las madres solteras o solas, que además reciban ingresos por debajo de dos salarios mínimo vigente en el Distrito Federal, se les deberá dar una ayuda económica mensual que les auxilie en la satisfacción de sus necesidades básicas.

Continuando con el análisis de la presente ley, diremos que se consagra la preferencia de las madres solteras o solas para que, en igualdad de condiciones, reciban los créditos de vivienda por las entidades públicas, privadas o sociales. Y asimismo accedan a un contrato de arrendamiento.

El derecho humano a la salud es tutelar de la vida, el bienestar y plenitud del ser humano, resultando fundamental que las madres solteras o solas con ingresos menores a tres salarios mínimos y sus hijos menores de 16 años que no sean derechohabientes de alguna institución pública de segu-

ridad social, accedan a la atención médica y a los medicamentos del sector salud sin cobro de cuotas de recuperación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se promulga la Ley Federal sobre los Derechos de las Madres Solteras o Solas y de las Mujeres en Estado de Violencia

Artículo 1. Esta presente ley es de observancia general en toda la república, sus disposiciones son de orden público y de interés social.

Artículo 2. Se entiende por madre soltera o sola a la mujer soltera, abandonada, separada, viuda o divorciada que realiza la crianza de sus hijos menores de dieciséis años de edad, sin la presencia física, ni el apoyo económico del padre de sus hijos o de cualquier otro varón, certificado lo anterior por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia correspondiente al lugar donde habiten.

Artículo 3. Queda prohibido cualquier conducta discriminatoria en contra de las madres solteras, divorciadas, separadas, viudas y de sus hijos, ya sea en materia política, laboral, educativa, vivienda, cultural, entre otras.

Artículo 4. Las madres solteras con hijos menores de dieciséis años y un ingreso familiar menor a tres salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal tendrán derecho a una ayuda mínima mensual por crianza de hijos, equivalente a un cincuenta por ciento del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, otorgada por el gobierno federal con recursos destinados ex profeso para ello y estos se deberán obtener haciendo un diagnóstico y pronóstico de los diversos programas focalizados dirigidos a género, para unificarlos en un solo proyecto integral e incluyente y ejecutivo, lo que permitirá ahorros importantes con lo que se crearía un fondo para la ejecución de este programa.

En el momento en que estas mujeres dejen la situación de madres solteras o solas, en los términos del artículo segundo de la presente ley o reciban de manera efectiva la pensión alimenticia respectiva o sus ingresos familiares excedan el monto precisado en el párrafo anterior, perderán el derecho a esta ayuda.

Artículo 5. En materia de empleo, las madres solteras, divorciadas, separadas, viudas, en igualdad de condiciones,

deberán ser preferidas por parte del patrón, sea tanto del sector público como del sector privado, para obtener el empleo.

Artículo 6. Los patrones de los sectores público y privado tienen la obligación de contratar madres solteras o solas en una cantidad no menor de un ocho por ciento del promedio mensual de sus trabajadores activos en nómina. Las leyes fiscales deberán establecer incentivos fiscales a los patrones que cumplan este precepto o lo superen.

Artículo 7. En el marco de las instituciones públicas, privadas y de seguridad social, las trabajadoras que sean madres solteras, divorciadas, separadas o viudas, en igualdad de condiciones, tendrán preferencia para que sus hijos accedan a las guarderías.

Artículo 8. Para el despido de una madre soltera o sola, el patrón tiene la obligación de acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para solicitar permiso en donde justificará y fundará, a través de un paraprocesal, la causal que prevé en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, y esa causal deberá de ser especialmente grave o que haga imposible su continuación laboral; con el acuerdo de la junta donde se acredita los motivos de separación, el patrón le dará a la mujer trabajadora el aviso correspondiente. De no cubrir los anteriores requisitos el despido se considerará como injustificado.

Artículo 9. En igualdad de condiciones las madres solteras o solas con hijas e hijos menores de dieciséis años serán preferidas para las obtenciones de un crédito, especialmente para la compra de una vivienda; igualmente para el arrendamiento de ésta, otorgado o contratado por las instituciones públicas, de seguridad social, sociales o privadas.

Artículo 10. Las madres solteras o solas y sus hijos menores de dieciséis años, cuyos ingresos familiares no excedan de tres salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, tendrán derecho de atención médica y medicinas en el sector salud, sin que deban cubrir las cuotas de recuperación respectivas. El monto de ingresos antes referidos deberá ser certificado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Por lo que se refiere a la atención médica, en el momento en que estas mujeres dejen la situación de madres solteras en los términos del artículo segundo de la presente ley o reciban de manera efectiva la pensión alimenticia respectiva,

o sus ingresos familiares excedan la cantidad precisada en el párrafo anterior, perderán el derecho a esta atención médica gratuita.

Artículo 11. Tratándose de madres solteras o solas, para que se dé trámite a la demanda por alimentos bastará que la mujer presente ante el juez denuncia verbal y copia de las actas de nacimiento de los hijos y, en su caso, la de matrimonio. El resto del procedimiento hasta que se dicte sentencia en que se determine el monto de la pensión alimenticia se continuará de oficio por el juez. Igualmente será suficiente que lo solicite verbalmente la madre soltera o sola para que el juez que haya dictado la sentencia proceda a la ejecución de la misma.

A efecto de que la gran mayoría de las mujeres solteras o solas hagan exigible su derecho de alimentos para sus hijos y, en su caso, también para ellas, el Instituto Nacional de la Mujer, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, harán campañas permanentes y nacionales entre la población para que conozcan del trámite ágil y simplificado referido en el párrafo anterior, quedando libres estas mujeres de cubrir los gastos, costas y honorarios que se fijan para tales diligencias .

Artículo 12. Todas las medidas de asistencia previstas en la presente se instrumentarán con preferencia en las zonas rurales y con población indígena, respetándose en este último caso la cultura, usos y costumbres de la población, siempre intentando que no se contrapongan con la dignidad y los derechos de estas mujeres solteras o solas.

Artículo 13. Los tres órdenes de gobierno del país deberán impulsar programas permanentes para el respeto, dignificación y reconocimiento de las madres solteras o solas y sus hijos.

Artículo 14. Se sancionará con prisión de tres meses a dos años de prisión los actos de discriminación que se realicen contra una madre soltera, o sola, o su hija(o) o hijas(os), partiendo de su calidad de madre soltera o sola, o de la calidad de hijo de madre soltera o sola, ya sea en el ámbito laboral, educativo, civil o cualquier otro que se traduzca en la afectación de sus derechos legalmente consagrados, especialmente cuando se despida del trabajo a una madre embarazada soltera o sola sin causa justificada.

Si es un servidor público el que realiza las conductas previstas en este artículo se le aumentará en una mitad la pe-

na prevista en el párrafo anterior, y por el mismo lapso se le destituirá e inhabilitará para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados, en cada uno de los ejercicios fiscales relativos, destinará los recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2008.— Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Equidad y Género, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.